

cuadernos de  
**Nuestra  
américa**  
Vol. XXVIII / Nº 52 / Enero-Junio 2019





*El Centro de Investigaciones de Política Internacional es una institución de carácter académico adscrita al Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García» (ISRI) fundada el 25 de noviembre de 2010.*

*Cuenta con más de 40 investigadores-profesores y mantiene estrechas relaciones de intercambio y colaboración científica con centros de investigación, universidades y organizaciones académicas de Cuba y otros países.*

*El CIPI tiene la misión de contribuir a la actualización periódica de la planeación estratégica y la ejecución de la política exterior cubana, mediante la realización de investigaciones y estudios, a mediano y largo plazo, en el campo de la política internacional y las relaciones internacionales.*

*Las direcciones principales del trabajo de la institución son la investigación científica, la elaboración de Escenarios de Política Internacional, la organización de eventos y las publicaciones.*



# Cuadernos de Nuestra América

Es una publicación semestral editada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI).

## **Consejo Editorial:**

Presidente: Dr. Adalberto Ronda Varona (CIPI)  
Dr. Ruvislei González Saéz. (CIPI)  
Dra. Olga Rosa González Martín (CEHSEU)  
Dr. Fidel Vascós González (SEAP)  
Dr. Ernesto Molina Molina (ISRI)  
Dr. Juan Sánchez Monroe (ISRI)  
MSc. Claudia Marín Suárez (CIPI)  
MSc. Juan A. Cordero Martínez (CIPI)  
MSc. Pável Alemán Benítez (CIPI)

## **Consejo Asesor:**

Dra. Ana Esther Ceceña (México)  
Dra. Esther Aguilera Morató (ANEC)  
Lic. Lourdes María Regueiro Bello (CIPI)  
Dr. Alberto Prieto Rozos (UH)  
Dr. Darío Salinas Figueredo (México)  
Dr. Julio César Gambina (Argentina)  
Dr. Jorge Hernández Martínez (CEHSEU)

## **Coordinador:**

MSc. Luis Feito Corratgé (CIPI)

## **Edición:**

José Alejandro Álvarez (CIPI)

## **Diseño y Composición:**

Alexis Ponce (ACCS)

## **Redacción:**

3ra. Ave., No.1805 entre 18 y 20, Miramar,  
Playa, Zona postal 13, La Habana, Cuba.

**Teléfonos:** 7206 3098, 7202 6442 ext. 119

**E-mail:** revcuaderamerica@cipi.cu

**Sitio web:** www.cipi.cu

Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos siempre que se indique la procedencia.  
Cada trabajo expresa la opinión del autor.

## Índice

- 7 **Marco A. Gandásegui, hijo** | Estados Unidos: Trump y la clase dominante.
- 27 **Leandro Morgenfeld** | Nuestra América ante Trump.
- 55 **Luis René Fernández Tabío** | Regreso al pasado en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba.
- 75 **Nils Castro Herrera** | Aprender de un progresismo al siguiente.
- 89 **Darío Salinas Figueredo y Yissel Santos González** | Cambios políticos recientes y disputas estratégicas en las relaciones de América Latina con Estados Unidos.
- 115 **Pável Alemán Benítez** | ¿Tormenta perfecta? América Latina: Derecha gobernante, resistencias y futuros.
- 133 **Claudia Marín Suárez** | La economía venezolana: Temas críticos en un entorno de complejidad.
- 161 **Diana I. Legrá Brooks** | Coyuntura política en la Comunidad del Caribe (CARICOM). Retos y oportunidades para la articulación de movimientos transformadores.



# Estados Unidos: Trump y la clase dominante

Marco A. Gandásegui, hijo

*gandasegui@hotmail.com*

Doctor en Sociología.

Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá.

Investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA).

## **Resumen:**

Trump tiene dos objetivos. El principal es conservar la Presidencia de EE.UU. y el poder que acompaña ese cargo. La facción política que encabeza cree que lo puede asegurar mediante una estrategia clientelista. Su programa incluye la reconstrucción parcial del sector industrial del país y generar empleos. Parte importante de este objetivo descansa en el presupuesto militar y en la distribución de los centros de producción en áreas claves del país. En el orden mundial promueve una estrategia del equilibrio, sostenida por EE.UU., que consiste en la rivalidad entre los Estados naciones.

## **Palabras clave:**

EE.UU., Donald Trump, Orden Mundial, Militarismo, Estado-nación.

## **Abstract:**

*Arriving at the White House in 2017, President Trump put forth his two main goals. His first objective was reelection in 2020. His second point on the agenda was to rebuild America's industrial infrastructure and create new jobs. In his game-plan reelection and jobs go hand in hand. In order to achieve these goals he was going to rely on strengthening the military budget and spreading the investments in key states. On the global scene his strategy is to relate with countries and regions on a one to one basis, discarding globalization as an enhancing tool for international trade.*

**Keywords:**

*USA, Donald Trump, World Order, Militarism, Nation-State.*

En enero de 2018 el presidente de EE.UU., Donald Trump, cumplió su primer año en la Casa Blanca. El impacto de su gestión ha sido significativo en varios planos. Queremos centrar nuestra atención en tres áreas. En primer lugar, analizaremos el significado de los cambios introducidos por Trump en la política exterior de EE.UU. Por un lado, la política económica que abandona la globalización. Por el otro, el manejo de las fuerzas armadas a escala mundial. En segundo lugar, analizaremos la política interna —reforma fiscal asimétrica, represión de las llamadas minorías y la política de migración— que le ha dado un nuevo perfil a sectores de las capas medias y de la clase obrera. Por último, las relaciones entre EE.UU. y América latina. La llegada del nuevo inquilino en la Casa Blanca coincide con la ola conservadora que atraviesa la región latinoamericana.

**Capitalismo y geopolítica**

Trump está cambiando el mundo. Tiene músculo militar y económico. El poderío de las armas que posee el arsenal de EE.UU. le da ventajas. La riqueza que posee alrededor del mundo le da resultados que todos envidian. Los observadores de las políticas del presidente Trump en el escenario mundial se hacen dos preguntas: ¿Qué hay detrás de Trump? ¿Tiene un objetivo estratégico?

En los últimos 40 años, el *establishment* de EE.UU. y sus aliados —Europa occidental y Japón— se han movido hacia la construcción de lo que llaman un «Nuevo Orden Global». Este movimiento lento pero seguro, según sus arquitectos en las altas finanzas y en la banca, es una respuesta necesaria ante el estancamiento de las tasas de crecimiento económico y la débil acumulación capitalista (inversiones).

El reordenamiento consiste básicamente en la redistribución de las responsabilidades que han caracterizado a las diferentes regiones en el mundo colonial e imperial de los últimos siglos. Es un cambio en la relación entre el centro del sistema capitalista y la periferia. El centro crece en la medida en que se alimenta de la periferia. La crisis del siglo XX determinó que el centro —que siempre cambia— tenía que profundizar la extracción de más riquezas de la periferia. A mediano y



largo plazos, la periferia tiene que aumentar su productividad y el centro tiene que extraer una porción más significativa de esa producción.

La «globalización» favorece a los grandes capitales concentrados en corporaciones gigantes. Sus intereses monopolizan la producción, la distribución —transporte y medios de comunicación— y las nuevas tecnologías. En sus planes está contemplado sumar las corporaciones que han surgido en China Popular y pensaban hacer igual con Rusia. El *establishment* tiene sus dudas sobre Pekín: su origen revolucionario muy reciente y su lealtad al Estado chino. Con Rusia la situación es aún menos segura por el nacionalismo (de mercado) de los gobiernos de Putin.

Trump tiene un proyecto que rompe con la estrategia globalizante. Propone un proyecto que mantiene a los capitalistas de EE.UU. a la cabeza del sistema interestatal (antiglobal). El proyecto subordina a sus aliados, la ONU y pone fin a los tratados comerciales. Además, trata como adversarios a China y Rusia.

Durante su campaña en 2016, Trump trató a China en forma despectiva. En cambio, se acercaba a Moscú. En cambio el *establishment* veía a China como un amigo potencial y a Rusia como enemigo. El *establishment* siempre ha visto a Trump con sospecha. Por un lado, su estilo desgreñado y arrogante. Por el otro, sus propuestas «nacionalistas» que supuestamente privilegian a los capitalistas que invierten en EE.UU.. Trump alega que los «nacionalistas» compiten en desventaja contra el sector dominante del sistema. Por esta misma razón considera que los tratados comerciales son contrarios a los intereses nacionales.

El gobierno de Trump publicó recientemente dos documentos con los lineamientos estratégicos para la Seguridad y para la Defensa del capitalismo norteamericano, respectivamente. La Estrategia para la Seguridad Nacional (ESN) augura problemas con «la reemergencia de la rivalidad estratégica a largo plazo por quienes clasifica como potencias revisionistas». La Estrategia para la Defensa Nacional (EDN) señala que «la rivalidad interestatal, no el terrorismo, es ahora nuestra preocupación principal en cuanto a la seguridad nacional de EE.UU.».

Trump es la otra cara de la misma moneda. Es decir, de la misma oligarquía (*establishment*) que lucha por no perder su dominio sobre la economía mundial. Representa una facción del capital norteamericano que rechaza la idea de ser parte de un mundo globalizado. Quiere mantenerse como «primero entre pares» (*America First*). Quiere

regresar a un pasado idílico para garantizar la grandeza de EE.UU. (*Let's Make America Great Again*).

### **Trump entre la oligarquía y la resistencia popular**

El sistema capitalista mundial tiene como característica central la lucha de clases. En la medida en que el sistema se expande incorpora a más trabajadores en las relaciones de producción que generan crecientes ganancias y acumulación incesante. Al mismo tiempo, genera resistencia y conflictos. Otra característica del sistema capitalista es la aparición de Estados (con definición territorial) al servicio de la acumulación capitalista. La dirección de los Estados, en manos de burguesías nacionales, compiten por acaparar los recursos naturales, las fuerzas productivas y las rutas comerciales. En el caso de EE.UU., después de la segunda guerra mundial asumió la hegemonía mundial y sometió a los demás Estados a sus intereses de expansión global.

Los dos conflictos son concomitantes: La lucha de clases y las guerras entre Estados. Para mantener su hegemonía, EE.UU. tiene dificultades en tres planos distintos, relacionados con los conflictos que emergen de la expansión capitalista. En primer lugar, EE.UU. compite con otros Estados por la hegemonía. Para los teóricos marxistas, se refiere a la teoría del imperialismo. Para otros es el estudio de la geopolítica. Los indicadores de ambos enfoques señalan que la hegemonía norteamericana se debilita. Segundo, la lucha de clases a escala mundial tiende a agudizarse. Prueba de ello son las constantes rebeliones de los trabajadores en todos los continentes del planeta. El tercer plano es lo que se refiere a la lucha de clases a lo interno de EE.UU.. A este punto nos referiremos a continuación.

En un año el presidente Trump ha tratado, con éxito relativo, de cumplir con sus propuestas electorales de campaña. Logró nombrar una cantidad significativa de jueces conservadores en el sistema judicial. Aprobó una reforma fiscal que redujo los impuestos a las grandes corporaciones y a los multimillonarios. Va en camino de aumentar el presupuesto militar en un 10 por ciento (70 mil millones de dólares). Por otro lado, no ha podido acabar con el programa de salud de su predecesor ni con las políticas migratorias. En 2018 promete dar inicio a las inversiones de trillones de dólares en la construcción de infraestructura en todo el país.

La reforma tributaria mantiene en línea a sus aliados más estrechos: La clase de los rentistas y empresarios millonarios. Más difícil será cumplir con sus promesas «populistas» de generar más empleo, frenar la inmigración de nuevos trabajadores y desmontar las regulaciones a las inversiones no sustentables.

Cuando llegó Trump a la Casa Blanca, hace poco más de un año, se encontró con un país con serios problemas. Aún tiene una economía estancada, un sistema político que tiene que refundarse y una cultura que cada vez es más excluyente. La sociedad norteamericana ha sido sacudida por una guerra civil, depresiones económicas, la exterminación de pueblos indígenas y un sistema que discrimina violentamente a sectores sociales por su origen étnico y de clase. El Estado norteamericano tiene fuertes contradicciones y los sectores subordinados viven en permanente guerra con una oligarquía gobernante que logra mantenerse en el poder con una dosis de persuasión y otra más de represión.

En la segunda mitad del siglo XX la economía de EE.UU., basada en la producción industrial-militar, creció a tasas superiores al 3 por ciento anual. A fines del siglo pasado entró en una etapa de lento crecimiento y el *establishment* buscó fórmulas —tanto en el interior como en el extranjero— para frenar la caída de la tasa de ganancias de las corporaciones. Las protestas de los sectores más vulnerables fueron reprimidas y neutralizadas con la introducción de un arma usada por los ingleses en China en el siglo XIX: las drogas.

Mientras tanto, la política neoliberal impulsó la desindustrialización, que aumentó el empleo informal y la pobreza. Los cambios provocaron la recesión de 2007-08 dejando millones de familias sin vivienda ni empleo. La crisis golpeó los bolsillos de los trabajadores y de las capas medias. Además, socavó la sensación de seguridad en sectores amplios de la población generando descontento con el sistema político. Como consecuencia, surgieron grupos sociales que añoraban el pasado destruido por las políticas neoliberales.

En la presente coyuntura, esta situación se refleja de manera contradictoria. Por un lado, la protesta se expresa políticamente en una reacción contra las políticas de globalización —menos empleos— y a favor de un retorno al pasado. Este sentimiento se cuadró con el mensaje del especulador de bienes raíces, Donald Trump. El nuevo inquilino de la Casa Blanca promete revivir el *sueño americano* creando nuevos empleos industriales —políticas «proteccionistas», aún cuando no sean

sustentables—, levantando muros contra los inmigrantes y reprimiendo los grupos históricamente discriminados.

Trump tiene dos problemas para los cuales aparentemente no tiene solución. Por un lado, las demandas de los trabajadores, las reivindicaciones de los excluidos y las aspiraciones de los inmigrantes. Es una lucha permanente para encontrar la legitimidad del sistema. Por el otro, Trump tiene que decidir si descarta a los viejos segmentos de la oligarquía ya improductivos para sumar a los sectores más innovadores. EE.UU. experimenta en estos momentos un período de turbulencia interna que puede generar tres resultados. Por un lado, al no encontrar una solución a la crisis, puede surgir un régimen fascista catastrófico—populismo oligarca con una base social que reivindica el pasado idílico—. Por el otro, la consolidación del «*establishment*» con su proyecto globalizante cuyo resultado final no es seguro. La otra opción es el surgimiento de un movimiento social en EE.UU., desde las bases, que logre promover políticas que generen una economía incluyente capaz de crear empleos productivos, que incorpore a los inmigrantes y que supere el odio explícito en la discriminación.

### «EE.UU. primero»

Trump tiene un objetivo mientras se encuentre en la Casa Blanca: Orientar el país—su economía y sus valores sociales— hacia una forma de organización que reproduzca, en gran parte, los valores que muchos asocian idílicamente con el pasado glorioso de la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX.

El estribillo que mejor sintetiza esa idea es «Hagamos EE.UU. grande nuevamente» o «EE.UU. primero». Al interior del país encuentra una fuerte resistencia a esta orientación por parte de los sectores que apuestan al futuro de EE.UU. en un mundo globalizado donde Washington seguiría siendo primero entre otras pocas potencias subordinadas. Como diría Arrighi, un mundo con un centro, una semiperiferia y una periferia.

Los grupos que promueven la globalización están convencidos que pueden controlar el proceso de acumulación capitalista desde las alturas de los mecanismos financieros. Las intervenciones militares serían restringidas contra países de la periferia que se salen de línea. EE.UU. puede externalizar su estructura tecno-industrial hacia países de la

periferia para garantizar tasas de ganancia aceptables. Al mismo tiempo, conservan áreas estratégicas bajo estricto control: alimentos, energía, tecnología espacial y otras.

Los teóricos de la globalización perciben un nuevo orden mundial equilibrado entre potencias, «casi-potencias» y la periferia. Se llegaría al ideal de poner fin a las guerras, los conflictos y se proclamaría el amor fraternal entre los pueblos.

Trump y sus asesores ven la globalización y la realidad mundial desde otra perspectiva. Para poder competir en el mundo capitalista hay que fortalecer a EE.UU. y probar que es la potencia sin rival. Como dijera Kissinger, después del Tratado de Westfalia (1640) se llegó a un consenso entre las potencias europeas de que no habrían más guerras entre ellas. Emergió Inglaterra y su Gran Bretaña como potencia hegemónica durante casi dos siglos. Westfalia contribuyó al saqueo de la periferia en el proceso de acumulación capitalista mundial.

### **Política interior**

El proyecto de Trump consiste en construir una fortaleza militar en EE.UU. que pueda enfrentar al resto del mundo sobre la base de su economía, su cultura y su poderío bélico. Los retos que enfrenta están básicamente en sus proyectos económico y cultural.

La economía norteamericana está en crisis, no crece, no genera excedentes, desde fines del siglo XX. Las políticas neoliberales (desregulación y flexibilización) no tuvieron los resultados esperados. Por un lado, condujeron al colapso de la bolsa de valores y la crisis de 2007-2008. Por el otro, dejó sin empleo a decenas de millones de trabajadores creando un descontento social de una enorme magnitud.

Además, los agentes culturales de EE.UU. —los medios de comunicación, el sistema educativo, la industria cinematográfica— están en manos de los sectores «liberales» que promueven la ideología de la globalización. Trump cree que obligando a los medianos y grandes industriales —incluyendo los *high tech*— que regresen a EE.UU. la economía puede reestructurarse y promover tasas de crecimiento similares a las que tenía EE.UU. en las décadas de 1950 y 1960. En este mismo movimiento, Trump atacó todos los tratados comerciales que tenía Washington con otros países por considerarlos inadecuados para los objetivos que perseguía. Se fue en contra de la política de migración que EE.UU.

tiene desde hace siglo y medio. Hasta la fecha ataca todos los que buscan llegar a EE.UU. desde el sur de la frontera. En la actualidad, hay 22 millones de mexicanos en EE.UU. La mitad son indocumentados que son superexplotados por la economía norteamericana.

Trump también cree que los medios de comunicación son sus enemigos principales. Es consciente que los medios moldean la ideología de amplios sectores de la población, incluso de los obreros y otros grupos sociales que tienen medios propios. Durante su campaña y en los dos años en Casa Blanca ha entablado —con relativo éxito— una dura batalla contra el monopolio de la comunicación en EE.UU. Defiende a los grupos evangélicos y otros conservadores que protegen dogmas del pasado por considerarlos sus aliados.

Trump asegura que los gobiernos que lo antecedieron ponen en peligro «el estilo de vida» de los norteamericanos. Destaca el sistema educativo, las relaciones étnicas y los procesos electorales como instituciones que deben reformarse a fondo. La política de Trump le ha dado los resultados que esperaba. El país está dividido ante sus iniciativas. Los capitalistas se mueven con cautela. Los gremios de los trabajadores que estaban muy debilitados ahora están sin vocería. Las protestas de los liberales más radicales tienen que enfrentar en las calles a los grupos conservadores más extremistas, como los neonazis.

### **Política exterior**

Trump está alterando los arreglos hechos hace más de 70 años entre las potencias occidentales, que incluye Japón. Ve con buenos ojos un acercamiento a Rusia y le pone cortapisas a China a quien le declaró una guerra comercial. Sus aliados de Europa occidental han perdido confianza en la Casa Blanca de Trump. El presidente de EE.UU. quiere que su mensaje le llegue alto y claro a los líderes europeos en el sentido de que EE.UU. no tolerará disensiones ni cuestionamientos a su política exterior.

Rusia: A corto plazo llegar a un entendimiento militar que le permita a EE.UU. continuar con su despojo de las regiones periféricas. A mediano plazo, convertir a Rusia en un aliado subordinado capaz de servir como contenedor de China desde el norte. A largo plazo, apoderarse de los grandes recursos naturales rusos para administrar su distribución a escala mundial.

China: Corto plazo: Interrumpir su comercio exterior (el yuan). Mediano plazo: Frenar su proceso de acumulación capitalista. Largo plazo: Debilitar su capacidad militar.

América Latina: A corto plazo, poner fin a la insubordinación de los países de la región y asegurar su dependencia militar y económica. A mediano plazo, garantizar el control de los recursos naturales de la región y regular el flujo migratorio de la gran cuenca del Caribe y Sur América. A largo plazo establecer una relación entre ambas regiones que le permita a la doctrina Monroe cumplir su objetivo histórico.

### **Trump y el *establishment***

A diferencia de los gobiernos de EE.UU. que lo antecedieron en el siglo XX, el gobierno que preside Donald Trump no parece estar al servicio del grupo financiero que controla la distribución del capital —los excedentes del sector productivo— y de su burocracia, que administra las relaciones sociales de dominación —el Estado—. Trump es vocero de un sector minoritario de la oligarquía norteamericana que pretende recuperar parte o la totalidad del poder político que ha estado perdiendo en forma consistente desde la Segunda Guerra Mundial.

El enemigo de Trump es el *establishment*. En las elecciones de 2016 logró organizar una campaña político-electoral que, primero, le permitió secuestrar al Partido Republicano en agosto e, inmediatamente, conducir al partido de Lincoln a un triunfo electoral sorpresivo en noviembre. En enero de 2017 se instaló en la Casa Blanca.

El enfrentamiento entre las dos fracciones del capital norteamericano es asimétrico. El sector más poderoso del *establishment*, que controla el capital financiero, no solo sirve de pivote para las inversiones dentro de la economía norteamericana. También ha construido una red global que incluye Europa, pretende incorporar a China y, además, controla la periferia del sistema capitalista, que incluye América Latina.

Según García Bielsa, Trump representa al capital industrial, agroindustrial, bienes raíces y energético. Para equilibrar la asimetría, Trump logró alinear sectores importantes de la clase obrera empobrecida de EE.UU. y sectores que aún conservan una ideología conservadora —el Tea Party— y racista —Krugman—. Para debilitar al sector financiero en el plano internacional, Trump, por un lado, se acerca a Rusia y, por el otro, le declara la guerra comercial a China.

## La coyuntura 2018

Donald Trump se enfrenta a elecciones parciales en noviembre de 2018. Los resultados de las elecciones en la Cámara de Representantes de EE.UU. (450 curules), programadas para el primer martes de noviembre de 2018, abrirán nuevos escenarios que afectarán el futuro inmediato de ese país y del mundo. Está en juego la presidencia de Donald Trump. Si el Partido Republicano conserva su mayoría en el Congreso, se desatarán un conjunto de procesos promovidos por la Casa Blanca. Si pierde, se producirán otros eventos, algunos predecibles y otros menos.

¿Qué pasa si el partido de Trump gana en 2018? Lo más probable es que en 2020 triunfe en las elecciones presidenciales programadas para ese año y siga en la Casa Blanca hasta 2024. También existe la posibilidad de que intente eliminar la enmienda número 25 de la Constitución de EE.UU. que impide que el jefe de gobierno ocupe esa posición por más de dos períodos. Esto significaría en el plano internacional un fin de la globalización que pretendía acabar con las fronteras y dejar establecido un gobierno mundial controlado por los centros financieros y el poder militar de EE.UU. En su lugar, algo igual de pernicioso, Trump contribuiría a consolidar el poder económico y militar —y cultural— centrado en EE.UU. convirtiendo el resto del mundo en sus vasallos. Los vasallos serían sus aliados tradicionales, sus contrincantes —residuos de la guerra fría— así como la periferia.

Esta posibilidad crea un escenario de conflictos sin precedente. Trump cree estar en condiciones de enfrentar al mundo y derrotarlo, utilizando sobre todo su enorme poderío militar —el 70 por ciento de todos los gastos militares en el mundo se concentran en EE.UU.—.

Si las elecciones de noviembre en EE.UU. no favorecen a Trump, puede tener la seguridad que no podrá reelegirse en 2020. Además, es probable que no llegue a 2020 como presidente. La Cámara de Representantes iniciaría en 2019 un juicio (*impeachment*) para destituirlo. El Senado actuaría como juzgado ante las denuncias de la Cámara. En un escenario de este tipo pueden darse sorpresas. Sin embargo, lo más probable es que la maquinaria del *establishment* logre apaciguar cualquier sector con ideas fuera del contexto constitucional.



## ¿Qué alternativa propone Trump?

Entendemos por *establishment* la oligarquía del sistema capitalista que controla la distribución de los excedentes generados por los sectores productivos. Es una combinación de los grandes bancos y sectores financieros de las bolsas de valores que cuentan con una red mundial, las transnacionales que controlan más de la mitad de la producción mundial, la burocracia global que controla la administración de los gobiernos tanto nacionales como internacionales —ONU, EU, etc.— y las fuerzas armadas de EE.UU. y de otros países.

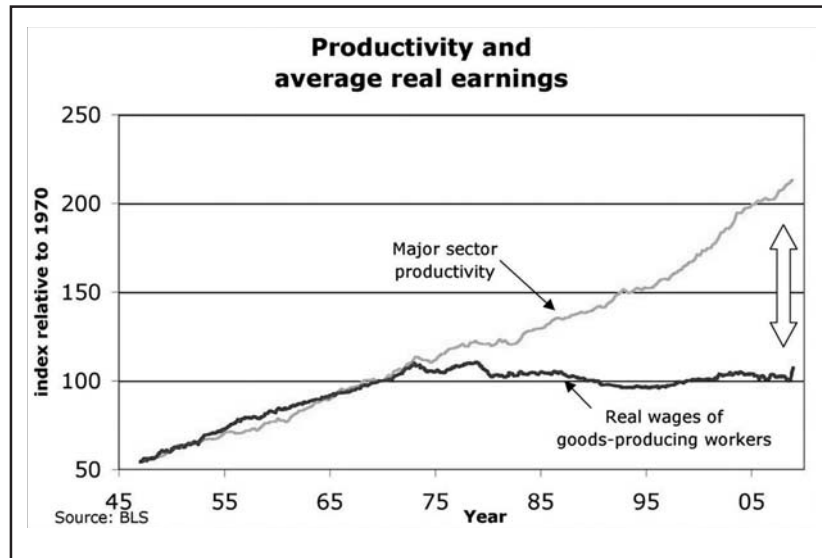
En este trabajo queremos darle respuesta a una pregunta. La respuesta está condicionada a las elecciones de noviembre. Trump llegó a la Casa Blanca con un programa que declaraba su intención de destruir el proyecto global del *establishment*.

¿Cuál es la alternativa? Su objetivo es reconstruir la sociedad norteamericana con una correlación de fuerzas favorable al capital nacional, sometiendo al capital financiero. Para ello está promoviendo una ideología nacionalista, con una base social sólida, fundamentada en creencias de grandeza (*Let's make America great again / What do you have to lose?*).

## ¿Qué encontró Trump al llegar al poder?

Según Bruno Estrada, a partir de la década de 1980 en EE.UU., cuando se asienta la hegemonía cultural neoliberal y el poder de negociación de los sindicatos se debilita, el incremento del PIB se dinamiza. La creciente desigualdad en el reparto de la riqueza hace que una parte creciente de los beneficios empresariales se haya dedicado a actividades improductivas que solo aumentan el poder de mercado de las grandes empresas. Entre 1895 y 1990 por cada dólar gastado en inversión en activos fijos las empresas de EE.UU. gastaron 18 céntimos en procesos de fusiones y absorciones. A partir de 1990 esta relación se incrementó exponencialmente hasta llegar a los 68 céntimos destinados a procesos de reestructuración y concentración empresarial por cada dólar invertido en impulsar la economía productiva. Como consecuencia de ello en los últimos veinticinco años la cuota de mercado de las 100 mayores multinacionales del mundo ha pasado de representar el 9% del total mundial en 1990 al 21% en la actualidad.

**Tabla 1. Productividad y ganancias reales promedio**



Fuente: Bureau of Labour Statistics, United States Department of Labor

El gráfico de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE.UU. apoya las tesis de que a partir de mediados de la década de 1970 se produce una brecha creciente entre los índices de productividad y los salarios reales en EE.UU. Los trabajadores norteamericanos cada vez se llevan a casa una porción menor de la riqueza que generan. Los salarios se estancaron pero las ganancias capitalistas siguieron aumentando. El trabajador norteamericano no entiende muy bien cómo se empobrece. Cómo el 5 por ciento de la población vive en la indigencia. Cómo el 10 por ciento vive en la pobreza extrema y el 15 por ciento debajo de la línea de la pobreza. Sectores cada vez más grandes de la población viven en condiciones de menos bienestar que sus padres. Trump supo comunicarse con estos grupos sociales e identificar culpables: En primer lugar el Partido Demócrata. Seguido por los mexicanos y musulmanes, así como los medios de comunicación y una gama de organizaciones que llama «de izquierda» (*lefties* o *left wing*). Sus políticas atacan a los afro-norteamericanos, a los homosexuales y liberales que cuestionan sus posiciones patriotas. Según Trump, EE.UU. está en guerra contra todos los elementos mencionados y, además, con una

alianza mundial que, junto con el *establishment*, ha levantado el proyecto de globalización. El objetivo central de la globalización es destruir a EE.UU.

### **Hay que hundir el proyecto de la globalización**

Hay tres autores que abordan el problema de la crisis del desarrollo capitalista. Ernest Mandel lo llama «el capitalismo tardío». Paul Sweezy se refiere a la crisis de acumulación y Giovanni Arrighi analiza la crisis del capitalismo financiero.

A fines de la década de 1970 se lanzó una contraofensiva para detener el deterioro de la tasa de ganancia analizado por los autores mencionados. La contraofensiva terminó siendo bautizado como la globalización, acompañada de las políticas neoliberales. La globalización —o fin de las fronteras— tenía en mente llevar a un nuevo nivel el saqueo de las riquezas naturales del llamado tercer mundo e incrementar la explotación de los trabajadores de los países periféricos. David Harvey lo llamaría el «nuevo imperialismo» y Ruy Mauro Marini «la dialéctica de la dependencia», respectivamente. Stiglitz y Krugman anunciarían antes de la gran recesión de 2007-2008 la crisis del neoliberalismo.

Según Krugman,

la única área en la que Trump está en conflicto con la ortodoxia del Partido Republicano es su nacionalismo económico, materializado en un conjunto rápidamente creciente de aranceles a las importaciones. Después de las elecciones de 2016, muchos comentaristas argumentaron que la victoria de Trump gracias al Colegio Electoral reflejó una reacción negativa contra la globalización. Eso sugirió que su proteccionismo podría volverse popular.

Krugman dice que no ha sido así. Asegura que la guerra comercial está ocasionando un malestar considerable entre los republicanos de las zonas agrícolas. Mientras tanto, los aranceles tampoco parecen ser populares en los estados industriales. De hecho, es difícil encontrar a un grupo grande al que le guste la política comercial de Trump. ¿Por qué las ideas de las políticas republicanas fracasan de manera tan contundente? Hasta cierto punto, la respuesta es evidente: las políticas del Partido Republicano son impopulares porque dañan a muchos más

norteamericanos de los que ayudan. ¿Por qué alguien habría de esperar que sea popular un recorte fiscal a los ricos que a la vez elimina la atención médica a los enfermos?

### **¿Qué visión de país tiene Trump para el futuro?**

Según Mark Weiner, muchos liberales y progresistas han tenido la tentación de condenar el comportamiento de Donald Trump en términos personales, acusándolo de incompetencia y especulando sobre su estabilidad mental. Pero hay una explicación más profunda e inquietante del comportamiento del presidente de EE.UU.. La teoría política del filósofo alemán Carl Schmitt ofrece algunas respuestas.

Aparte de la impronta que le añade Trump, su propia elección y parte de la exacerbación de las políticas del imperio norteamericano, son un reflejo del declinar o pérdida de la hegemonía de antaño. Accidentes al margen y entre muchos otros factores, su elección fue posible debido al casi universal rechazo popular a las élites de Washington y de Wall Street, a las notables fracturas sociales en el país, bajo el impacto acumulativo de la globalización y el neoliberalismo, la «sobre expansión imperial», los excesivos gastos militares y el desmesurado crecimiento de la especulación y las inversiones no productivas, bajo los imperativos del mercado. De ahí se deriva una sostenida disminución del ritmo de aumento de la productividad en muchos sectores de la industria, aumento de empleos parciales y mal pagados, el deterioro del estatus de la clase trabajadora y de regiones enteras que se sienten abandonadas y han visto reducir sus condiciones de vida sin que aprecien que el gobierno o el Congreso se preocupe por ellos.

Conservadores y las redes de la derecha política en todo el país y, ciertamente en las zonas rurales, lograron desplegar una eficaz campaña y capacidad para manipular los resentimientos y temores de millones.

Según García Bielsa, esa base de apoyo —junto a intereses millonarios en sectores como los bienes raíces, de la construcción, de la explotación minera, y otros— está en el país «profundo», en estados rurales, sectores empobrecidos hartos de los políticos y de la élite del país, quienes se sienten víctimas de la globalización, del abandono gubernamental y que son empujados a buscar chivos expiatorios por sus problemas y reducción de sus niveles de vida y que sienten como que su mundo se viene abajo. Un ambiente propicio para cierto tipo de populismo

nacionalista, que sigue siendo una de las más poderosas fuerzas en la política del país.

La tesis del empobrecimiento económico como causa del triunfo del discurso nacionalista es cuestionado por quienes hacen énfasis en las políticas racistas que se remontan varios siglos y que han resurgido con fuerza a principios del siglo XXI. ¿Qué segmento de la población le dio el triunfo electoral a Trump? Hasta hace poco se decía que fueron los votos de los obreros frustrados del *Rust Belt* que se engancharon al discurso nacionalista y proteccionista, pro industrial, de Trump. En otro análisis se plantea que Trump le debe el triunfo al voto de la población llamada «blanca» que refleja el «miedo» que le tiene ese sector a las etnias afronorteamericana y mexicana. Según Krugman,

si no pueden ganar con los problemas (económicos) tratarán de ganar con otra cosa... y sabemos lo que será: en todo EE.UU. los electores se ven bombardeados con anuncios republicanos que muestran a gente asustada de la piel morena. En Texas, incluso, Ted Cruz piensa que un video en el que aparece el candidato opositor, Beto O'Rourke, diciendo cosas perfectamente razonables a un público de afro-norteamericanos ayudará a su campaña para senador.

Krugman concluye que los estudios de las elecciones de 2016 demuestran, claramente, que el resentimiento racial y no la «ansiedad económica» fue lo que le dio la victoria a Trump. Disentimos con esta conclusión.

### **¿Qué dicen los chinos?**

Según Yu Yongding, el gobierno del presidente Trump, ha basado su decisión de imponer aranceles comerciales a China y arriesgar una guerra comercial, ampliamente catastrófica, en un informe que no resiste el escrutinio. La decisión, parece clara, se tomó antes incluso de que el informe fuera escrito. Yu es miembro de la Academia China de Ciencias Sociales.

El informe de la sección 301 de EE.UU. destaca cuatro áreas que considera perjudiciales para su país. Por un lado, la transferencia de tecnología, por el otro, la tasa de retorno. Además, las inversiones chinas en el exterior y, por último, el robo cibernético.

*Transferencia de tecnología:* Yu señala que «las empresas extranjeras se han mostrado más que dispuestas a ingresar en su mercado, en particular por el trato preferencial que se le brinda a la inversión directa. Por cierto, durante décadas, empresas extranjeras y nacionales por igual han aceptado voluntariamente la estrategia china de “acceso de mercado a cambio de tecnología”, que requería que los inversores extranjeros importaran tecnología avanzada a cambio de entrar al mercado chino».

*Tasa de retorno:* Yu agrega que un informe del Banco Mundial de 2006 puso la tasa promedio de retorno para las multinacionales extranjeras en China en el 22%. Según un informe compilado por el Consejo de Conferencias de Empresas Mundiales, la tasa promedio de retorno sobre el capital para las multinacionales norteamericanas en China en 2008 fue del 33%. «Nadie puede decir que las empresas extranjeras se vieron obligadas a operar en el mercado chino. El argumento de que las empresas estadounidenses han sido forzadas a transferir su tecnología a China carece así de relevancia».

*Inversión china en el exterior:* Las acusaciones del informe de la Sección 301 respecto de la inversión china en el exterior —a saber, que China utiliza «capital del gobierno y redes de inversores sumamente opacas para facilitar las adquisiciones de alta tecnología en el exterior»— son igualmente endebles. El Instituto Norteamericano de la Empresa informa que, de 2005 a 2016, las empresas chinas hicieron 202 inversiones, incluidas fusiones y adquisiciones, en EE.UU. Solo 16 de ellas —por un total de 21 000 millones de dólares— fueron en sectores de tecnología. Los inversores chinos gastaron mucho más que eso —94 000 millones de dólares— en bienes raíces en Estados Unidos entre 2013 y 2016.

*Cibernética:* La cuestión final planteada por el informe de la Sección 301 se relaciona con el robo cibernético de PI y de información comercial sensible que, según EE.UU., es perpetrado por el gobierno chino. El informe reconoce que desde 2015 —cuando China y EE.UU. acordaron que ninguno «realizaría o respaldaría intencionadamente robo cibernético de propiedad intelectual, incluidos secretos comerciales u otra información comercial confidencial para ventajas comerciales»— la cantidad de incidentes detectados de espionaje cibernético chino ha declinado.

«Los pagos de honorarios y regalías por parte de China por el uso de tecnología extranjera se han disparado en los últimos años, alcanzando casi 30 000 millones de dólares el año pasado, casi cuatro veces más que en los últimos diez años».

China puede hacer mucho para mejorar su acatamiento de las normas de la OMC, especialmente en lo que concierne a abrir su sector de servicios financieros y fortalecer las protecciones de propiedad intelectual (PI).

Pero las cuestiones relacionadas con el comercio deberían abordarse dentro del marco de la OMC y Estados Unidos tendría que utilizar los mecanismos de resolución de ese organismo para abordar sus quejas.

Yu concluye que «la guerra comercial de Trump no logrará obligar a China a abandonar su aspiración de ponerse a la altura de las economías avanzadas. China está dispuesta a librar una guerra de desgaste. Desafortunadamente, ambas partes —así como el resto del mundo— incurrirán en grandes pérdidas en el proceso».

### **¿Cambiará EE.UU. su estrategia fracasada en América Latina?**

EE.UU. y la actual administración de Trump apoyan la llamada ola conservadora que ha derrocado alrededor de una decena de gobiernos progresistas. Desde Honduras en 2007 hasta Brasil en 2017. Al mismo tiempo, ha declarado amenazas a su seguridad nacional a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

El capital norteamericano es cada vez más dependiente de la mano de obra barata que abunda más al sur de su frontera, en México y en el triángulo norte de Centro América. En la segunda mitad del siglo XX desestabilizó la economía agraria mexicana y estranguló su industrialización para crear una enorme masa de trabajadores informales —sin empleo y sin tierra— que optó por migrar a EE.UU.. Con igual insistencia logró desarticular las economías del norte de Centro América. Provocó guerras, instaló la base militar norteamericana más grande de América Latina en Honduras y desató un tráfico de drogas hacia el mercado norteamericano.

Para complicar aún más el panorama que atañe al sur de la frontera de EE.UU., Washington acusa a China de haber iniciado una táctica comercial para penetrar las estructuras de América latina, sin excluir a México y Centroamérica.

La política exterior de EE.UU. con Trump en la Casa Blanca descansa sobre la consigna de volver a la grandeza del pasado. La política interior pretende regresar a una alianza populista entre una burguesía nacional debilitada y una masa de trabajadores castigada por las políticas globales —relocalización de fábricas y pérdida de empleos industriales—. Mientras tanto, existía cierta incertidumbre con relación a la política de Trump frente a América Latina. Hacia México y Cuba, Washington sigue una línea histórica trazada en función de su política interna: Migración de mano de obra barata mexicana y la cuestión cubana. Con relación a Venezuela, prima el temor en el *establishment* de perder los ricos yacimientos de petróleo.

Aparentemente todo se aclaró a principios de febrero de 2018 con la gira por la región del secretario de Estado, Rex Tillerson. Preparó una agenda a la Doctrina Monroe en preparación de su visita a cinco capitales de la región. El encargado de dirigir las relaciones exteriores de Washington le dio coherencia a los múltiples *tweets* del presidente Trump. En primer lugar, dejó claro que los principios establecidos por EE.UU. hace dos siglos, estampados en la Doctrina Monroe, están vigentes: el hemisferio occidental le pertenece a Washington.

Le envió un mensaje a China: EE.UU. es el único «predador» en la región. Señaló que «América Latina no necesita nuevos poderes imperiales. El modelo de desarrollo que ofrece China es una reminiscencia del pasado. No tiene que ser el futuro de este hemisferio».

En segundo lugar, Tillerson reivindicó el derecho de EE.UU. de intervenir militarmente en la región. El llamado *poder suave* de Barack Obama fue engavetado y salió a relucir el *poder duro*. «En la historia de Venezuela a menudo son los militares quienes se dan cuenta de que no pueden servir a los ciudadanos... e intervienen». Por su lado, el senador Marco Rubio declaró que «el mundo apoyaría a las fuerzas armadas de Venezuela si deciden proteger a las personas y restaurar la democracia mediante la eliminación de un dictador».

En tercer lugar, el secretario de Estado reactivó la OEA y logró aprobar una resolución diplomática contra Venezuela. Le dejó al Grupo de Lima la tarea de agitar la consigna de la intervención militar en Venezuela.

EE.UU. tiene tres planes de contingencia para deshacerse del proceso revolucionario bolivariano. Plan A: Promover un golpe militar desde adentro llamando a un levantamiento del Ejército Bolivariano. Plan B: Movilizar los ejércitos de Colombia, Perú y Brasil —con el apoyo



logístico de Panamá, Holanda y Argentina— para copar las fronteras venezolanas. Plan C: Lanzar a las fuerzas aéreas, navales y terrestres del Comando Sur en un ataque total contra Venezuela.

En Colombia EE.UU. tiene nueve bases preparadas para atacar. Hay dos bases militares del Comando Sur en las comunidades de Vichada y Leticia, en el Amazonas. Estas forman un arco con las de Palanquero y Tolemaida (altiplano). Otras en Malambo (costa atlántica), Apiay y Larandia (llanuras orientales), Saravena (en el río Arauca) y por último, en la Bahía Málaga (costa del Pacífico). Además, en el cerco hay tropas de asalto de EE.UU. en Aruba y Curazao, que opera con la base de Palmerola, Honduras.

En la década de 1970, EE.UU. aplicó el Plan A en Chile, derrocando el gobierno de la Unidad Popular y asesinando al presidente Allende. En la década de 1980, activó el Plan C y el Comando Sur invadió a Panamá poniendo fin al régimen militar del general Noriega. En el siglo XXI introdujo una modalidad nueva dando golpes parlamentarios en Paraguay y Brasil.

Tillerson mostró todas las cartas que tiene en la mano el presidente Trump en su juego con América Latina. Por un lado, la decisión de intervenir, incluso usando la fuerza militar para proteger sus intereses estratégicos (energía). Por el otro, rechazar las intenciones de Pekín de establecer una relación comercial dominante con América Latina. Sin embargo, a Tillerson le faltó presentar la otra mitad de la ecuación: ¿Qué ofrece EE.UU. a cambio? Las oligarquías latinoamericanas dependen de Washington para mantenerse en el poder. En los últimos 200 años exportan mano de obra barata y materias primas al mercado norteamericano y, en cambio, reciben armas y asesoría militar.

En Texas, el secretario de Estado ofreció los valores que supuestamente comparte EE.UU. con la región. No serán suficientes. Las oligarquías de la región tienen que negociar con los otros sectores sociales que también tienen intereses. Todo indica que las relaciones entre ambas regiones se encuentran en una encrucijada: ¿Aprovechará China la coyuntura? ¿Aprovechará América Latina la oportunidad para independizarse? ¿Cambiará EE.UU. su crónica de una estrategia fracasada?

El proyecto de Trump consiste en construir una fortaleza militar en EE.UU. que pueda enfrentar al resto del mundo sobre la base de su economía, su cultura y su poderío bélico.

---

**Bibliografía:**

Samir Amin: «Crisis. Ciclos económicos. Modernidad capitalista». En: <https://es.scribd.com/document/189759182/Crisis-Ciclos-Economicos-Modernidad-Capitalista>.

Bruno Estrada: «El fin del trabajo», *Economistas Frente a la Crisis*, 27 de enero de 2017.

Fernando M. García Bielsa: «La crisis social estadounidense y el “fenómeno” Trump en su justo lugar», *ALAI*, 10 de septiembre, 2018.

Amy Goodman en entrevista a Carol Anderson en *Democracy Now!*

Paul Krugman: «El partido sin ideas», *New York Times* (en español), 27 de septiembre, 2018.

Dani Rodrik: «It's too late to compensate free trade's losers», *Project Syndicate*, junio, 2017.

Rex Tillerson: «El compromiso de EEUU con el Hemisferio Occidental», Panamá, Embajada de EE.UU. (Austin, Texas, 1ro. de febrero, 2018). En: <https://pa.usembassy.gov/es/secretary-tillerson-on-u-s-engagement-in-the-western-hemisphere-2/>.

Helena Trinca: «American elites don't get white working class, says Joan Williams», *The Australian*, 17 de junio, 2017.

Alvaro Verzi Rangel: «Fuertes disputas en las cúpulas política y militar de EEUU: la resistencia a Trump», *ALAI*, 10 de agosto, 2018.

Mark Weiner: «El trumpismo y la filosofía del orden mundial», *Nueva Sociedad*, julio, 2018.

# Nuestra América ante Trump

Leandro Morgenfeld

*leandromorgenfeld@hotmail.com*

Doctor en Historia.

Profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Co-Coordenador del Grupo CLACSO «Estudios sobre Estados Unidos».

## **Resumen:**

Barack Obama, desde 2013, inició una ofensiva para recuperar el dominio estadounidense en América Latina y el Caribe, luego de una década de creciente articulación política entre los 33 países al sur del Río Bravo y del desafío que supuso la participación de China y otras potencias extrahemisféricas en la región. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca supuso un desafío tanto para los gobiernos no alineados con Washington como para aquellos que apostaban a la continuidad de la agenda neoliberal con Hillary Clinton. La prédica xenófoba y antihispana del magnate neoyorquino, la retirada del Acuerdo Transpacífico (TPP), la renegociación del TLCAN y las agresivas declaraciones contra Cuba y Venezuela modificaron el escenario regional, obligando a los aliados de Estados Unidos a recalcular el vínculo con la Casa Blanca. En este artículo analizamos los principales desafíos que enfrenta la región frente a la nueva Administración y los caminos alternativos que se avizoran para Nuestra América.

## **Palabras clave:**

Estados Unidos, Trump, Nuestra América.

## **Abstract:**

*Barack Obama, since 2013, began a campaign to recover the US dominance in Latin America and the Caribbean, after a decade of growth, political*

*articulation among the 33 countries at the South of the Rio Grande, and the challenge posed by the participation of China and other extrahemispheric powers in the region. The arrival of Donald Trump to the White House was a challenge both for those who are not aligned with Washington and for those who bet on the continuity of the neoliberal agenda with Hillary Clinton. The xenophobic and anti-Hispanic speech of the New York billionaire, the withdrawal of the Trans-Pacific Agreement (TPP), the renegotiation of NAFTA and the aggressive declarations against Cuba and Venezuela modified the regional scenario, forcing the allies of the United States to recalculate the link with the White House. In this article, we analyze the main challenges for the region in the face of the new Administration and the alternative paths that are envisaged for Our America.*

**Keywords:**

*United States, Trump, Our America.*<sup>1</sup>

En el contexto de un mundo incierto e impredecible, con una fuerte disputa hegemónica entre Estados Unidos y China,<sup>2</sup> una Unión Europea estancada y con riesgo de disolución, un creciente malestar y rechazo a la «globalización neoliberal» y el ascenso de movimientos y líderes neofascistas, Nuestra América<sup>3</sup> es disputada por los centros imperiales, cuyo apetito se dirige especialmente a los bienes comunes de la tierra que abundan en la región.<sup>4</sup> Los gobiernos de Mauricio Macri, Enrique Peña Nieto, Michel Temer y Pedro Pablo Kuczynski, emblemas

<sup>1</sup> El siguiente artículo es una adaptación de la ponencia «Trump y América Latina: rupturas y continuidades», presentada en el Panel: «Nueva correlación de fuerzas en Estados Unidos» de la III Conferencia de Estudios Estratégicos «Transición hacia un nuevo orden internacional: desafíos, amenazas y oportunidades», organizada por el CIPI, en La Habana, del 11 al 13 de octubre de 2017.

<sup>2</sup> Recientemente, Perry Anderson publicó una obra sobre esta problemática crucial, historizando el concepto de *hegemonía*, tan profusamente aplicado en el campo de las relaciones internacionales: Perry Anderson: *The H-Word: The Peripeteia of Hegemony*, Verso, Londres, 2017. Cfr.: Luiz Albert Moniz Bandeira: *A desordem mundial. O espectro da total dominação*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2016, y Jaime Preciado y Marco Gandásegui (hijo) (comps.): *Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la geopolítica del neoconservadurismo*, ALAS-CLACSO-Universidad de Guadalajara, México, 2017, con foco en cómo esa disputa hegemónica global se manifiesta en América Latina en la era Trump.

<sup>3</sup> Tanto la expresión Nuestra América como América Latina refieren indistintamente en este texto al conjunto de los países de América Latina y el Caribe, es decir los 33 países del continente que no son ni Estados Unidos ni Canadá.

<sup>4</sup> Cfr. Atilio Borón: *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, 2014 Universidad Autónoma de México, 2014, y Mónica Bruckmann: *Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana*, Ediciones Luxemburg/Imago Mundi, Buenos Aires, 2015.

de las derechas *aggiornadas*, pretenden clausurar el llamado «ciclo progresista», derrotar al eje bolivariano y restaurar las políticas que emanaron del *Consenso de Washington*<sup>5</sup> en la *posguerra fría*. Esos gobiernos neoliberales aspiran a clausurar cualquier alternativa popular, en pos de profundizar los esquemas extractivistas y revertir la inédita cooperación y coordinación política latinoamericanas que caracterizó el inicio del siglo XXI, tras el «No al ALCA» en la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005.<sup>6</sup> Abandonaron en sus discursos toda referencia latinoamericanista y apuestan a debilitar a organismos nuevos, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para volver a posicionar a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede no casualmente se encuentra en Washington, a pocos metros de la Casa Blanca. Desde que Barack Obama inició su segundo mandato, en 2013, ensayó una nueva ofensiva imperial, que coincidió con la muerte de Hugo Chávez —el gran líder de la integración alternativa, a partir de la iniciativa que lanzó junto a Cuba en 2004, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)— y la reversión del ciclo de alta demanda y precio de las materias primas. Esa ofensiva, basada en el *smart power*, parecía tener en Hillary Clinton su continuadora «natural».<sup>7</sup>

Sin embargo, el triunfo de Donald Trump en las elecciones del 8 de noviembre de 2016 modificó sustancialmente el panorama geopolítico, generando una conmoción mundial mucho mayor a la del *Brexit*, la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Ambas

<sup>5</sup> El Consenso de Washington correspondía a las políticas impulsadas por el Departamento de Estado norteamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G-7 y los presidentes de los principales bancos y establecía que sólo se otorgarían préstamos a los países periféricos a cambio de: reformas al Estado “que lo minimizaran”, privatización de empresas de servicios públicos, enajenación de las reservas energéticas, facilidades a las inversiones extranjeras, liberalización del sistema financiero, mayor recaudación impositiva y eliminación del déficit, entre otros. Así, de allí en más se utilizaría el endeudamiento para disciplinar abiertamente a los países no centrales.

<sup>6</sup> Julián Kan (comp.): *El No al ALCA diez años después. La cumbre de Mar del Plata y la integración latinoamericana reciente*, editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 2016; Juan Manuel Karg y Agustín Lewit (comps.): *Del No al ALCA a la UNASUR. Diez después de Mar del Plata*, ediciones del CCC, Buenos Aires, 2015.

<sup>7</sup> El llamado *poder inteligente*, fue definido por Joseph Nye como la combinatoria de poder duro y poder blando para vencer, y usado recurrentemente por Hillary Clinton, cuando fue Secretaria de Estado (2009-2013) de Obama. Sobre el origen del término, véase *Foreign Policy*, Estados Unidos, 14 de enero de 2009.

votaciones expresan el creciente rechazo que está generando la globalización neoliberal impulsada desde los centros financieros y el resquebrajamiento del consenso político que se imponía desde las elites de Europa y Estados Unidos. En el crucial año 2016 se consumó el final de ese oxímoron que la filósofa y politóloga estadounidense Nancy Fraser denominó el «neoliberalismo progresista».<sup>8</sup> Mientras líderes xenófobos, de extrema derecha o neofascistas canalizan a su favor el creciente hartazgo social, aumenta la incertidumbre global.<sup>9</sup> Se resquebrajó el consenso global, a tal punto que en las reuniones del G20 previas a la Cumbre presidencial de Hamburgo, Estados Unidos bloqueó las declaraciones pro libre comercio y China pretendió erigirse en la nueva líder de la globalización. En la cumbre de Alemania, Trump quedó en solitario, tras haber anunciado la salida de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Angela Merkel, la anfitriona, debió admitirlo: «Cuando no hay consenso, hay que reflejar el disenso, no ocultarlo».<sup>10</sup>

La elección en Estados Unidos de un presidente abiertamente xenófobo, antiobrero, misógino, negacionista del cambio climático, plutocrático, unilateralista y militarista supone un gran peligro no solo para la mayoría de la población de ese país, sino también para toda Nuestra América. Agredió a México, Cuba y Venezuela y promueve una diplomacia militar que reniega de las instancias multilaterales, lo cual genera niveles de rechazo históricos. Una reciente encuesta internacional del *Pew Research Center*, publicada el 26 de junio, muestra que la imagen del gobierno de Estados Unidos se hundió 15 puntos desde

<sup>8</sup> Nancy Fraser: «The End of Progressive Neoliberalism», *Dissent Magazine*, 2 de enero, 2017. En: [https://www.dissentmagazine.org/online\\_articles/progressive-neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser](https://www.dissentmagazine.org/online_articles/progressive-neoliberalism-reactionary-populism-nancy-fraser).

<sup>9</sup> Existe un amplio debate en torno a cómo caracterizar a los nuevos líderes de extrema derecha que emergieron en Hungría, Polonia, Austria, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Estados Unidos, entre otros países. En una reciente publicación se recogen las diversas opiniones de analistas internacionales como Noam Chomsky, Chantal Mouffe, Ignacio Ramonet, Wolfgang Streeck, Serge Halimi, Judith Butler, Alain Badiou, Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein, entre otros: Pedro Brieger (comp.): *Neofascismo. De Trump a la extrema derecha europea*, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2017.

<sup>10</sup> *El País*, Madrid, 9 de julio, 2017.

<sup>11</sup> «La encuesta del Pew, que ha entrevistado a más de 40 000 personas, revela que una media del 22% de los encuestados confía en que Trump hará lo correcto en materia de asuntos internacionales. Obama se despidió de su mandato con una media del 64% de confianza. En algunos países europeos la caída en este ámbito es estrepitosa: en Alemania cayó del 86% al 11%, en Francia del 84% al 14%, en Reino Unido del 79% al 22% y en España del 75% al 7%. Esta valoración es muy similar a la que

que asumió Trump.<sup>11</sup> Con excepción de Israel y Rusia, en los otros 35 países encuestados cayó la confianza en Washington, y especialmente lo hizo en América Latina. Este contexto —no se cerró la crisis económica internacional que se inició hace una década en Estados Unidos, crece la incertidumbre global, ganan poder líderes y movimientos de ultraderecha, se impugna el discurso neoliberal en los países centrales, se ralentiza el comercio global y se agudizan las disputas hegemónicas— obliga a realizar un balance de lo ocurrido en los últimos años y a plantear cuáles son los principales desafíos para la región y las alternativas para vincularse con un mundo cuyo reordenamiento es incierto y que debe lidiar con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, quien posee algunas características peculiares distintas a las de sus predecesores.

La llegada al poder del magnate neoyorquino, con el rechazo que suscita, supone una oportunidad para enfrentar los nuevos peligros y desafíos recuperando el espíritu de Mar del Plata, es decir la experiencia de una exitosa coordinación y cooperación política regionales, en función de retomar una integración latinoamericana que impugne no solamente la ofensiva neoliberal restauradora, sino que adquiera una perspectiva antimperialista con proyección anticapitalista y socialista. Entre el 10 y el 13 de diciembre de este año se llevó a cabo en Buenos Aires la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que intentó infructuosamente relanzar la ofensiva pro libre comercio en el ámbito multilateral y regional.<sup>12</sup> En marzo de 2018, se realizará la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, lo que supondrá la primera visita del presidente Trump a la región. Poco después, en el segundo semestre de ese año, Argentina será sede de la primera Cumbre Presidencial del G20 que se realizará en la región.<sup>13</sup> En estos dos cónclaves se empezará a definir el rumbo de la globalización neoliberal, y también las relaciones interamericanas.

obtuvo el ex presidente estadounidense, George W. Bush, al final de su gestión en 2008». *El País*, Madrid, 27 de junio, 2017.

<sup>12</sup> Leandro Morgenfeld: «Fracasa la OMC y emergen las alternativas», *Semanario Brecha*, Número 1674, Montevideo, 2017.

<sup>13</sup> El gobierno argentino pretenderá allí ser, junto a los de Brasil y México, los abanderados del libre comercio y de las políticas de apertura favorables a la atracción de inversiones extranjeras. Recientemente, el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón, declaró que piensan invitar a los países del Mercosur y la Alianza del Pacífico, para relanzar el proyecto de un acuerdo de libre comercio que, como analizaremos más adelante, sería una suerte de reedición del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pero sin Estados Unidos ni los países del ALBA (Notimex, México, 13 de julio, 2017).

Si bien nuestro análisis es provisorio y tiene un carácter exploratorio, en tanto Trump es presidente hace apenas un año, ya es posible vislumbrar ciertas tendencias para caracterizar su gobierno, su política hacia el resto del continente y las alternativas que se presentan para Nuestra América.

Trump es más débil lo que muchos vaticinaron. Ganó ampliamente en el colegio electoral, tiene mayoría en ambas cámaras, nombró al noveno juez de la Corte Suprema —el conservador Neil Gorsuch, que ocupa la vacante generada tras la muerte de Antonin Scalia—, los republicanos tienen la mayoría de las gobernaciones, el magnate sigue siendo apoyado por su base electoral y su liderazgo trasvasa las estructuras políticas tradicionales.

Sin embargo, el 8 de noviembre de 2016 obtuvo 2,8 millones menos de votos —nunca otro presidente ganó en el colegio electoral con tanta diferencia en contra en la votación popular—,<sup>14</sup> enfrentó amplísimas protestas desde que asumió, se paralizó dos veces en la justicia el decreto para prohibir entrada de ciudadanos de algunos países con mayoría musulmana —lo cual ocasionó masivas protestas en los aeropuertos—, el reemplazo del ObamaCare por el TrumpCare —una de sus grandes promesas de campaña— fracasó inicialmente en el congreso, y el *affaire Rusia* no cede: debió renunciar el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Michael Flynn, se le pusieron limitaciones al fiscal general Jeff Sessions en la investigación de la «trama rusa», su ex jefe de campaña Paul Manafort y su hijo mayor están hoy en la mira por sus vínculos con Moscú, James Comey, el jefe del FBI, quien había desestimado su acusación de que Obama lo espía y confirmó los avances en las investigaciones por la supuesta intromisión rusa en la campaña, fue finalmente despedido, desatando un nuevo escándalo —debió comparecer en junio ante el Senado—, y hasta su influyente yerno, Jared Kushner, está siendo investigado por haberse reunido en diciembre con el embajador ruso y unos meses antes con una abogada rusa que les habría ofrecido información comprometedor sobre Hillary Clinton. Los encontronazos con líderes europeos en la primera gira internacional de Trump y el anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París provocaron aún más resistencias internas y externas. La decisión

<sup>14</sup> Como las elecciones no son obligatorias en Estados Unidos, y hubo una amplia abstención, no es menor señalar que Trump apenas cosechó la cuarta parte de los votos de los ciudadanos habilitados para votar, lo cual vulnera la legitimidad del sistema electoral estadounidense y de la elección de Trump en particular.



de diciembre de reconocer a Jerusalem como la capital de Israel —y trasladar allí la embajada estadounidense— produjo un nuevo escándalo internacional. El 21 de diciembre, en la Asamblea de la ONU, 128 países rechazaron esta decisión, pese a las amenazas de retiro de ayuda de la Casa Blanca.

Tras un inicio en el que sobreactuó su impetuoso estilo para mostrarse como todopoderoso, Trump debió atravesar sucesivas turbulencias. Ya no sólo existe una resistencia política sino que la batalla se trasladó al campo judicial, a la vez que se agudizó su pelea con los grandes medios de comunicación,<sup>15</sup> y en el Congreso empezaron a aparecer grietas dentro del *establishment* republicano y militar que lo apoya, y ya hay iniciativas para iniciar un juicio político, tanto por los vínculos con el gobierno ruso como por los negocios de su emporio, incompatibles con la presidencia. Los rasgos revulsivos de su personalidad y su carácter iconoclasta generan, además, permanentes escándalos y enfrentamientos con periodistas, artistas y figuras políticas, incluso de su mismo partido. Trump llegó a sus primeros 100 días en la presidencia con apenas un 41% de aprobación e índices históricos de rechazo, los más altos desde que se hacen esas mediciones, en los años cincuenta del siglo pasado.<sup>16</sup> A mediados de julio, a casi 6 meses de haber asumido, el Washington Post y ABC publicaron una encuesta en la que se observa que su aprobación sigue descendiendo, situándose ahora apenas en el 36% —frente al 48% de fuerte desaprobación—, o sea la más baja en 70 años.<sup>17</sup>

En síntesis, esta situación vuelve relevante algo que muchos se plantearon aún antes de que asumiera: ¿podrá Trump completar su mandato? Impulsará el *establishment* su desplazamiento en favor del vicepresidente Mike Pence? Esta caracterización introductoria es necesaria para contextualizar el tema central de este ensayo: las alternativas para las fuerzas políticas y de izquierda en América Latina, frente a Trump. Su triunfo en noviembre de 2016 es, en parte, expresión de la crisis de la hegemonía estadounidense y del creciente rechazo a la globalización neoliberal. Los simultáneos frentes de conflicto que

<sup>15</sup> Sobre el rol de las grandes empresas periodísticas, su cinismo y su superficial crítica al trumpismo, consultar: Silvina Romano: «Efecto Anti-Trump: el triunfo de la ideología hegemónica», en: Jaime Preciado y Marco Gandásegui (hijo) (comps.): *Hegemonía y democracia en disputa*, 2017, ob. cit.

<sup>16</sup> *New York Times*, 26 de abril, 2017.

<sup>17</sup> *Washington Post*, 16 de Julio, 2017.

abrió en sus primeros meses en la Casa Blanca no hicieron sino ahondar la polarización que caracterizó a toda la campaña. No hay que descartar, entonces, la posibilidad de que avance un *impeachment*, para lo cual se requeriría el apoyo de un sector del Partido Republicano. Trump, mientras tanto, se recuesta en su base ultraconservadora —el 24 de febrero fue aclamado en la Conferencia de la Acción Política Conservadora, junto al entonces todavía influyente Steve Bannon—, y en Wall Street, no sólo porque colocó a un ex Goldman Sachs como Secretario del Tesoro, sino por las desregulaciones, las rebajas de impuestos a los ricos (del 35% al 15%) y la reactivación del proyecto de construcción de los oleoductos de *Keystone XL* y *Dakota Access*, tras meses de lucha de pueblos originarios y ambientalistas que se oponían.<sup>18</sup>

En el plano de la política exterior, también hubo novedades y múltiples escándalos por el mal trato a distintos mandatarios, incluso aliados, como el de Australia. Contra lo que muchos auguraban —luego de ciertos coqueteos discursivos con algunos postulados aislacionistas—, Trump ya mostró que no va a ser aislacionista: nombró a prominentes generales en su gabinete y aumentó 9% el presupuesto militar —incrementándolo en 54 mil millones de dólares—,<sup>19</sup> reivindicó a las Fuerzas Armadas cada vez que pudo, atacó a China vía *Twitter*, bombardeó Yemen el 29 de enero, impulsa el expansionismo de los asentamientos ilegales en territorio palestino, recibió con honores al ultraderechista Netanyahu, quien pone en duda la solución de los dos Estados, amenazó a Irán, arrojó la *Mother of All Bombs* en Afganistán, envió un portaaviones a Corea del Norte y agredió a Venezuela incluyendo al vicepresidente de Maduro en la lista de promotores del narcotráfico y recibiendo en la Casa Blanca a la esposa de Leopoldo López, incluso antes que a cualquier mandatario regional.<sup>20</sup> Más que reducir el intervencionismo a escala global, Trump pretende reimponer el unilateralismo, en detrimento

<sup>18</sup> Para un análisis crítico de su gabinete de millonarios, militares y ultraconservadores, consultar: Jake Johnson: «The Militarization of U.S. Policy on Latin America Is Deepening Under Trump», *Foreign Policy In Focus*, 15 de junio, 2017. En: <http://fpif.org/the-militarization-of-u-s-policy-on-latin-america-is-deepening-under-trump/>.

<sup>19</sup> BBC, 27 de febrero, 2017. La Cámara de Representantes aprobó finalmente un presupuesto militar récord, de 696 500 millones de dólares, 28 000 millones más que el que había solicitado la Administración Trump, que ya era 54 000 millones superior al del año anterior. *Russia Today*, Moscú, 16 de julio, 2017.

<sup>20</sup> Sobre la actual política exterior de Trump, y las posibilidades de una deriva militar de las actuales tensiones en curso, consultar: Pablo Pozzi: «¿Se viene la guerra?», *Huellas de Estados Unidos*, N. 12, Buenos Aires, abril, 2017, pp. 2-5.

del multilateralismo y de una conducción imperial más colegiada.<sup>21</sup> Como sus antecesores, sigue pregonando el excepcionalismo y la idea de que los estadounidenses son un pueblo elegido, diferentes al resto. Una muestra cabal de ello se produjo recientemente, cuando anunció, cumpliendo una promesa de campaña, que Estados Unidos no sería más parte del Acuerdo climático de París, que había fijado metas en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, siendo ese país, junto a China, los más contaminantes.<sup>22</sup>

Alentó inicialmente la distensión con Rusia, para enfrentar a China, intentando, en sentido inverso, lo que promovió Henry Kissinger en los años setenta para profundizar la grieta entre Moscú y Pekín. Menospreció a la Unión Europea y calificó a la OTAN como una alianza obsoleta, aunque luego el vice Pence, en gira europea, matizó estas consideraciones. Cuando participó en la cumbre de mandatarios de la OTAN, exigió a los demás países que aumentaran el presupuesto militar, generando rispideces con sus socios europeos. Su lema, *America First*, significaría que no está más dispuesto a pagar los costes de ser el gendarme planetario. Si Europa y Japón quieren la *protección* militar estadounidense, argumenta Trump, que paguen por ello —en concreto, les exige que aumenten significativamente sus presupuestos militares—. Esto podría implicar una renegociación del vínculo con sus aliados, que ya se empezó a manifestar en la cumbre de la OTAN de mayo.<sup>23</sup>

En el presente artículo analizamos cuál es la política de Trump hacia la región, qué rupturas y continuidades hay en relación a las anteriores Administraciones y cuáles son las alternativas para los países latinoamericanos, de cara a las próximas batallas del 2018: la Cumbre de las Américas en Lima y la reunión de mandatarios del G20 en la Argentina.

Nuestro análisis se enmarca en uno de los debates más importantes de los últimos años, sobre los cambios geopolíticos que se están produciendo en el presente siglo: ¿Hay una mutación en ciernes hacia un sistema multipolar? ¿La decadencia del imperio americano es tan amplia como se estima? ¿El siglo XXI es el de la hegemonía china? ¿Puede haber otra guerra mundial o Estados Unidos y China están condenados

<sup>21</sup> Para una crítica a su «estrategia de seguridad nacional», consultar Andrew J. Bacevich: 2017 «Trump's security strategy prepares for a «long war» without end», *The Boston Globe*, 21 de diciembre, 2017.

<sup>22</sup> *New York Times*, 1ro. de junio, 2017.

<sup>23</sup> *Le Monde*, París, 26 de mayo, 2017.

a acordar una conducción colegiada?<sup>24</sup> ¿Qué carácter tienen los conflictos armados de los últimos años? ¿Cómo se van a procesar las tendencias y confrontaciones entre las principales potencias?

### **México, Venezuela y Cuba: tres países en la mira de Trump**

Para analizar la política de Trump hacia América Latina tenemos que observar, especialmente, tres países que son blanco de sus ataques: México, Venezuela y Cuba. Trump utiliza a los hispanos como chivo expiatorio y los humilla para acumular prestigio político en el frente interno. México es el gran perjudicado, desde el punto de vista económico, político e ideológico. La nueva Administración también intenta revertir la distensión con Cuba iniciada hace dos años por Obama.<sup>25</sup> En las últimas semanas, la presión fue contra el gobierno venezolano:

Cada una de estas intervenciones prepotentes y casi siempre humillantes, muestran un panorama altamente crítico para la Revolución Bolivariana. Estados Unidos alimenta a la oposición más violenta y, como en Siria, la califica de «moderada». Mira a un costado cuando jóvenes de ultraderecha arremeten contra todo lo que tienen a su alcance en las llamadas «guarimbas» pero ponen el grito en el cielo cuando el gobierno venezolano toma medidas necesarias y lógicas contra esos abusos. Finalmente, visto el accionar de Trump frente a Siria, bombardeando territorio soberano sirio, poco se puede esperar de lo que este dinosaurio fascista pueda efectivizar en Latinoamérica de bueno. Por lo pronto, Cuba y Venezuela están en su diana, y solo falta saber cuándo se decidirá a apretar el gatillo.<sup>26</sup>

México, como consecuencia de haber firmado el TLCAN/NAFTA hace casi un cuarto de siglo, es económicamente más dependiente que nunca de Estados Unidos. Se ve afectado por razones comerciales, por

<sup>24</sup> El reconocido analista Immanuel Wallerstein tiende a descartar un potencial enfrentamiento hostil entre ambas potencias: «En cualquier caso, la danza oculta entre China y Estados Unidos –la no declarada búsqueda de una sociedad– permanecerá siendo la actividad geopolítica en el sistema-mundo de las décadas venideras. Todos los ojos deberían estar puesto en esto. De un modo o de otro, China y Estados Unidos terminarán siendo socios». (Immanuel Wallerstein: «China y Estados Unidos: ¿socios?», *La Jornada*, México, 28 de enero, 2017).

<sup>25</sup> Néstor García Iturbe: «Cuba-EE.UU. después de enero de 2017», *Revista de Estudios Estratégicos*, no. 04, primer semestre, CIPI, La Habana, 2017.

<sup>26</sup> Carlos Aznarez: «Trump y Latinoamérica: Con Cuba y Venezuela en la mira», en: Claudio Katz y otros: *Trump y su impacto en la región. Reflexiones sobre la situación económica mundial y sus perspectivas*, Fundación Rosa Luxemburgo-EDI, Buenos Aires, 2017, pp. 23-24.

la presión de Trump para repatriar inversiones estadounidenses en las maquilas mexicanas, por el endurecimiento de los controles fronterizos y por las amenazas de cobrar impuestos a las remesas que millones de mexicanos envían periódicamente a sus familias. Además, de acelerarse las deportaciones, esta afluencia poblacional generaría una presión extra para el mercado laboral, aumentando potencialmente la tasa de desocupación. Producto de esas agresiones, y en medio de una profunda crisis interna, México se debate sobre su futuro.<sup>27</sup>

Cuando hace más de una década argumentábamos por qué había que rechazar el ALCA, poníamos como ejemplo lo perjudicial que estaba siendo el TLCAN para la economía mexicana. A partir de la firma de ese acuerdo, México disminuyó las tarifas arancelarias con Estados Unidos y Canadá —también lo hizo con otros países con los que también estableció acuerdos comerciales—, en detrimento del resto de los países, que debían enfrentarse a las tarifas de la *nación más favorecida*.<sup>28</sup>

Como señalaba ya en ese entonces el economista mexicano Arturo Huerta González,

Las políticas de apertura comercial y financiera, así como el NAFTA, al igual que el ALCA y el AMI se inscriben en la misma estrategia impulsada por EUA para ampliar su esfera de influencia a nivel mundial y en especial hacia América Latina. El ALCA es un avance del proceso de localización en el que estamos, es llevar el NAFTA hacia el resto de los países del área. Lo que ya existe en muchos países del Área, se pretende con el ALCA profundizar tales políticas y asegurar su irreversibilidad. América Latina y el Caribe están en desventaja competitiva frente a EUA, por lo que la prosecución de las políticas de liberalización económica y el ALCA vendrían a destruir más la planta productiva, industrial y agrícola, a acelerar los niveles de extranjerización, de desempleo y de vulnerabilidad de nuestros países.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Recientemente, José Gandarilla, Cecilia Nahón y el autor del presente trabajo discutieron sobre esta problemática en la sede de CLACSO, en un panel titulado «México, entre Estados Unidos y Nuestra América en la era Trump» (Buenos Aires, 4 de abril de 2017), realizando un diagnóstico muy crítico de las consecuencias económicas y sociales del NAFTA para la población de ese país. Gandarilla expuso allí la crisis del sistema político desatada a partir de la humillante posición de Peña Nieto hacia Trump. Consultar también: Jaime Estay: «Los mega acuerdos y sus amenazas para América Latina», *América Latina en Movimiento*, N. 40, 2016.

<sup>28</sup> CEI en base a datos de *Trade Policy Review* de México 2002.

<sup>29</sup> Arturo Huerta González: «El ALCA: Política de EUA para subordinar y dominar a América Latina», *Paradigmas y utopías. Revista de reflexión teórica y política del Partido del trabajo. ALCA: Imperialismo neoliberal*, N. 3, diciembre/enero, México, 2002, pp. 51-52.

La economía de México, al igual que la de la mayoría de los países centroamericanos, es fuertemente dependiente de la estadounidense, lo cual genera una incidencia particular en este tipo de acuerdos. El gobierno mexicano se transformó, además, en el *portavoz* latinoamericano del ALCA.<sup>30</sup>

En términos generales, puede concluirse que, si bien la apertura comercial, la privatización y la desregulación en México favorecieron a parte de su sector exportador, se produjo la desaparición de muchas cadenas productivas, se entregó el sistema bancario y financiero a los inversores extranjeros (pasaron a controlar el 90% del mismo), en las maquiladoras aumentó significativamente el componente importado, se produjo el colapso del campo frente a la «invasión» de productos agrícolas estadounidenses y se incrementó fuertemente el trabajo informal y «flexibilizado», la miseria y la pobreza, entre otros motivos, por la quiebra de casi 30.000 pequeñas y medianas empresas y la desestructuración de la pequeña producción agrícola. El NAFTA significó, para México, profundizar e institucionalizar las políticas económicas impulsadas por el llamado *Consenso de Washington* y un obstáculo para acercarlo a Latinoamérica y alejarlo de su poderoso vecino del norte. Hoy el 80% de las exportaciones se dirigen hacia Estados Unidos —por eso impactó tan negativamente el triunfo de Trump en la economía y en la moneda—, más de 5 millones de campesinos debieron abandonar la actividad agrícola —muchos de ellos son los inmigrantes indocumentados que Trump promete deportar—, México importa maíz de Estados Unidos, aumentó la pobreza a más del 55%, no hubo una equiparación salarial con México y Estados Unidos —pese a las promesas, la brecha se ahondó— y el país vive, además, una catástrofe social, con más de 170.000 muertos, producto de un espiral de violencia descontrolada, asesinatos a periodistas y dirigentes políticos y una militarización de la vida cotidiana sin precedentes<sup>31</sup>.

Ante las amenazas de Trump de salir del TLCAN —producto del fuerte déficit comercial bilateral que le genera a Estados Unidos—, o renegociarlo en términos aún más perjudiciales para México, algunos analistas, incluso en México, pretenden maquillar ese acuerdo y mostrar

<sup>30</sup> El entonces presidente mexicano, Vicente Fox, jugó en Mar del Plata el patético rol de defensor de Bush.

<sup>31</sup> Se estima que hubo más de 170 000 muertes violentas desde que Felipe Calderón inició la «guerra contra el narco» en 2006. Ver informe especial en: <https://elpais.com/especiales/2016/guerra-narcotrafico-mexico/>.

que el país latinoamericano sacó provecho del mismo. En una reciente obra de Tom Long,<sup>32</sup> hay un capítulo específico dedicado a las negociaciones para acordar y luego ratificar el TLCAN. El eje del mismo es mostrar cómo, durante la presidencia de Carlos Salinas de Goltari, México recalculó su interés nacional, tras la crisis de la deuda de 1982, y se focalizó en garantizar el libre mercado, atraer inversión extranjera y profundizar los vínculos comerciales con Estados Unidos, para lo cual la firma de un TLC pasaba a ser un objetivo primordial. Long detalla cómo el gobierno de ese país se involucró en los asuntos domésticos de su poderoso vecino del Norte, y hasta hizo un intenso *lobby* en el congreso, cuando debió ratificarse el tratado, con apoyo de parlamentarios demócratas y republicanos. Más allá del «éxito» que supuso para Salinas de Goltari la puesta en funcionamiento de este acuerdo, Long reconoce al final del capítulo que el TLCAN, a pesar de las promesas, no catapultó a México al «Primer Mundo». Identificar el «interés nacional» mexicano con el del gobierno neoliberal de Salinas de Goltari, como hace ese autor, lleva a realizar un análisis demasiado benevolente del NAFTA y de la subordinación de la política exterior de ese país a Washington. Algo similar puede mencionarse respecto al Plan Colombia, otro de los casos que analiza Long. Quizás sea demasiado simplista señalar que las clases dominantes latinoamericanas sean una mera «correa de transmisión» o un instrumento de la dominación imperial, ya que poseen sus propios intereses, no siempre coincidentes totalmente con los de la metrópoli. Pero eso no implica, de ningún modo, que no operen en forma asociada. Así, mostrar que en estos cuatro casos la iniciativa la tuvieron mandatarios latinoamericanos, no alcanza para concluir que el Tratado de Libre Comercio no fue funcional a los intereses del gran capital estadounidense y perjudicial para las mayorías populares en México. O que la militarización que se desplegó con el Plan Colombia no fue impulsada por el Pentágono para profundizar la hegemonía estadounidense no sólo en ese país, sino en el resto de la región. O sea, falta indagar hasta dónde los intereses imperiales determinan cuál es el margen de acción y la suerte de estas iniciativas latinoamericanas.

La llegada de Trump a la Casa Blanca provocó un impacto en México, el país donde el magnate estadounidense tiene peor imagen. Peña

<sup>32</sup> Tom Long: *Latin America Confronts the United States. Asymmetry and influence*, Cambridge University Press, New York, 2015.

Nieto, a través del hoy canciller Luis Videgaray, intentó un acercamiento humillante, que llevó al gobierno mexicano a niveles históricos de impopularidad en 2016. Frente a esta situación, y teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de 2018, parecen abrirse dos caminos alternativos para México. O negocia bilateralmente, en una posición de debilidad, las condiciones de su sometimiento a Trump, o recupera una mirada autónoma, volcada a América Latina, e inicia un proceso de redireccionamiento de su inserción internacional y su política exterior, que le permitan ampliar sus márgenes de maniobra.

El discurso agresivo contra Venezuela por parte de Trump apareció ya en la campaña presidencial. Se refirió al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Recibió en la Casa Blanca, antes que a ningún otro mandatario latinoamericano, a Lilian Tintori, la esposa del opositor Leopoldo López.<sup>33</sup> Esa retórica injerencista fue acompañada de iniciativas concretas. Si ya Obama había tomado medidas extremas contra Venezuela,<sup>34</sup> el nuevo mandatario las profundizó. Incluyó a Tarek el Aissami, vicepresidente de Nicolás Maduro, en la lista de perseguidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.<sup>35</sup> Este ataque diplomático fue respondido enérgicamente por el gobierno venezolano, quien acusó a Trump de continuar con las maniobras desestabilizadoras e injerencistas de Obama. Poco después, el jefe del Comando Sur, Kurt W. Tidd, compareció ante el Comité de Servicios Militares del Senado estadounidense, señalando que la inestabilidad en Venezuela afectaba a toda la región, repitiendo el latiguillo de que a través de ese país ejercían su influencia Rusia, Irán y China en América Latina. Sectores poderosos en Washington instan a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense a realizar un *lobby* en la OEA para sancionar a Venezuela aplicándole la Carta Democrática Interamericana. Ante esta situación, que rememora la sufrida por Cuba en la Conferencia de Cancilleres americanos de Punta del Este de enero de 1962, el gobierno del país caribeño optó por anunciar su salida de esa organización, caracterizada

<sup>33</sup> BBC, Londres, 16 de febrero, 2017. Una semana después, el 24 de agosto, haría lo propio con el presidente peruano, el primer mandatario latinoamericano en visitarlo en Washington.

<sup>34</sup> Firmó una orden ejecutiva, el 9 de marzo de 2015, en la cual declaró a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional» estadounidense. Esta iniciativa fue repudiada por diversos gobiernos latinoamericanos en la VII Cumbre de las Américas, que se reunió en Panamá en abril de ese año. De todas formas, Obama volvió a prorrogar esa disposición al año siguiente.

<sup>35</sup> Telesur, Caracas, 13 de febrero, 2017.



por el Che Guevara como un «ministerio de colonias» de Estados Unidos.<sup>36</sup>

El rol del gobierno estadounidense es muy claro en este punto. Se intenta generar una situación económica y social explosiva, para justificar una suerte de intervención regional humanitaria.

Ya desde 2016 distintos gobiernos de derecha vienen intentando aislar a Venezuela. Macri y Temer promovieron la suspensión de Venezuela del Mercosur, luego de negarle la presidencia pro-témpore. Trump apoya las iniciativas de Luis Almagro para que la OEA le aplique las sanciones previstas en la Carta Democrática Interamericana. Así se observa el rol subordinado a Washington de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú, entre otros. Sin embargo, hasta ahora no han logrado su cometido —fracasó ese intento en la Reunión de Consulta de cancilleres, realizada en el marco de la Asamblea General de la OEA en Cancún, del 19 al 21 de junio—, aunque las presiones y la situación política en Venezuela es sumamente frágil.<sup>37</sup>

El caso de Cuba quizás es el más ilustrativo y elocuente de la política de Trump hacia la región. El viernes 16 de junio, desde Miami y en un acto que pareció más propio de la época de la *guerra fría*, el presidente estadounidense puso un freno en el proceso de deshielo con Cuba iniciado en 2014 por Obama. Rodeado de lo más rancio del anticomunismo, desplegó un agresivo discurso paternalista e injerencista. ¿Qué alcances y límites tiene el (nuevo) giro en la relación con la isla? ¿Cuáles son las causas del abandono de este «legado» de Obama? ¿Cuál fue la respuesta cubana? ¿Cómo va a impactar hacia adentro de Estados Unidos y en las ya de por sí complejas y tirantes relaciones con América Latina y el Caribe?

En primer lugar, vale la pena analizar el qué y el cómo del anuncio de la nueva política de Trump hacia Cuba. El acto realizado en Miami atrasó al menos un cuarto de siglo. El nuevo presidente estadounidense apeló a una retórica agresiva y más propia de la *guerra fría*. Rodeado de lo más retrógrado del exilio cubano, anunció el fin del acuerdo Obama-Castro y firmó el *Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba*, con las

<sup>36</sup> Por razones de espacio, dejamos de lado el análisis del papel poco decoroso desempeñado por Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

<sup>37</sup> Telesur, Caracas, 19 de junio, 2017.

nuevas directivas hacia la isla. En síntesis, los cambios que establece son los siguientes: restringe los viajes turísticos, complicando la obtención de permisos —en los primeros cinco meses del año, 250 000 estadounidenses viajaron a Cuba, lo mismo que en todo el 2016—; reafirma el bloqueo económico, comercial y financiero que hace más de medio siglo intenta asfixiar a la isla; limita los viajes educativos con fines no académicos, que tendrán que ser grupales —prohíbe los viajes individuales autodirigidos— y limita las actividades económicas con empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias —básicamente, con el Grupo de Administración Empresarial (GAESA)—. Sin embargo, no rompe las relaciones diplomáticas, ni cierra la embajada en La Habana —reabierto hace dos años—, ni coloca de nuevo a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, ni limita el envío de remesas, ni prohíbe los vínculos económicos con el sector cuentapropista de la isla, ni modifica los acuerdos migratorios, ni reinstala la política de pies secos, pies mojados derogada por Obama el 12 de enero de 2017, que admitía a los cubanos que pisaran suelo estadounidense.

Más allá de que algunas de las medidas generarán complicaciones económicas en Cuba, lo más grave es el tono. El acto, de fuerte contenido simbólico, se realizó en la Pequeña Habana, en el Teatro Manuel Artime, justamente denominado así en honor del contrarrevolucionario que fuera el jefe civil de la Brigada 2056, aquella que invadiera la isla en Playa Girón, en abril de 1961 («Es un honor estar en un teatro que lleva el nombre de un verdadero héroe del pueblo cubano... Estamos muy honrados de que nos acompañen los asombrosos veteranos de la Bahía de Cochinos», dijo Trump). El presidente estadounidense habló luego del vice Mike Pence, el gobernador de La Florida Rick Scott, el senador de origen cubano y ex precandidato republicano Marco Rubio<sup>38</sup> y el representante Mario Díaz-Balart (un día antes, este diputado había declarado: «Trump no está con los que reprimen al pueblo

<sup>38</sup> Trump reunió junto a él a los más prominentes críticos de la distensión iniciada por Obama. El máximo exponente de los opositores a los anuncios de Obama fue, en diciembre de 2014, Marco Rubio: «El presidente Obama», escribió en *Wall Street Journal*, «dejó claro que si tomas como rehén a un americano y estás dispuesto a mantenerlo durante un tiempo suficientemente largo, no sólo lograrás que tus prisioneros salgan de las cárceles de Estados Unidos, como los tres espías cubanos, sino que obtendrás concesiones políticas duraderas de EE.UU.» (Marc Bassett: «Los líderes republicanos y algunos demócratas acusan a Obama de dar aire a los hermanos Castro sin contrapartidas», *El País*, Madrid, 19 de diciembre, 2014). En un sentido similar se expresó Ileana Ros-Lehtinen, la ultraconservadora representante por Florida, quien criticó duramente a la entonces Subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, cuando compareció ante el congreso para debatir sobre las negociaciones con Cuba.

cubano como estaba Obama»<sup>39</sup>). Calificó al sistema político isleño como una «dictadura» y desplegó un discurso agresivo, que se emparenta con su irrespetuoso mensaje de noviembre pasado, cuando falleció Fidel Castro. Ante las mil personas que colmaban el teatro, declaró: «No queremos que los dólares estadounidenses vayan a parar a un monopolio militar que explota y abusa a los ciudadanos de Cuba y no levantaremos las sanciones hasta que se liberen los presos políticos». Se refirió al gobierno de La Habana como el «brutal régimen castrista» y destacó que «haremos cumplir el embargo». El acto fue la puesta en escena del retorno a la política agresiva que desplegaron sin éxito Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush Jr. y Obama, al menos en su primer mandato.

¿Por qué la vuelta a una retórica más propia de la guerra fría? ¿Por qué reivindicar el fracasado bloqueo, repudiado cada año en forma casi unánime en la ONU —en la última Asamblea General, 191 países exigieron su levantamiento, y sólo Estados Unidos e Israel se abstuvieron—? ¿Por qué insistir con una política que genera rechazo no sólo en la población estadounidense en general —según un sondeo de *The New York Times* de 2016, el 62% de la población estaba de acuerdo con el nuevo enfoque de Obama hacia Cuba— sino de los propios cubanoamericanos —el 70% de los cubanoamericanos de Miami apoyaban la normalización, mientras que el apoyo al bloqueo había caído a un 37%, en comparación con el 84% de 1990—? La principal causa del giro tiene que ver con la política interna de Estados Unidos. En primer lugar, es una «devolución de favores». Trump, como ya mencionamos, modificó su anterior posición frente al deshielo para obtener el apoyo del *establishment* cubanoamericano, que le permitió ganar en la Florida, por un margen muy estrecho.

Pero la escenificación del trato duro con Cuba también responde a sus actuales necesidades políticas, en dos sentidos. Trump fue el presidente menos popular en sus primeros 100 días, al menos desde que esto se mide por primera vez en los años sesenta del siglo pasado. Cosecha altísimos niveles de rechazo, enfrenta movilizaciones de mujeres, trabajadores, estudiantes, investigadores, ecologistas, inmigrantes y pueblos originarios. Sufrió importantes reveses políticos —para imponer su veto migratorio, para aprobar el TrumpCare, para financiar el muro con México— y enfrenta el RusiaGate, que involucra a importantes

<sup>39</sup> Citado en *Página/12*, Buenos aires, 18 de junio, 2017.

funcionarios de su entorno y amenaza con obstaculizar o interrumpir su presidencia a través de un *impeachment*. Sin embargo, conserva el apoyo de sus votantes, aunque estos representaron apenas el 27% del padrón. Ese es el sentido de este tipo de puestas en escena: reforzar su base política, atacando todo lo que sea considerado parte del «legado» de Obama —y, el deshielo con Cuba, sin dudas era un componente central del mismo—. Exhibe una supuesta fortaleza hacia adentro, abroquela a sus seguidores ultraconservadores, y a la vez proyecta una imagen hacia afuera que refuerza su disposición a actuar de manera unilateral, sin tener en cuenta lo que opine la comunidad internacional: no le importa lo que diga la ONU sobre el bloqueo.

Claro que, cuando hablamos de cómo la política interna condiciona su política exterior, también nos referimos a cuestiones menos transparentes: Trump necesita el apoyo de su ex rival interno Marco Rubio, quien integra la Comisión de Inteligencia del Senado, que es la que investiga si Rusia intervino en las elecciones del año pasado en connivencia con el magante. Una semana antes de los anuncios sobre Cuba, ante esa comisión compareció James Comey, el ex jefe del FBI, expulsado por Trump pocos días antes. Rubio intercedió en el Senado para que Comey aclarara que Trump «no se encontraba personalmente bajo investigación».<sup>40</sup> La posición de este senador será clave para determinar el futuro de la investigación sobre la trama rusa. Como se ve, no solo en América Latina hay una estrecha relación entre política exterior y política interior, a pesar de lo que plantean los acrílicos defensores de la «gran democracia» del Norte. En síntesis, el acto en Miami tuvo el triple objetivo alejar la atención mediática del *affaire* Rusia, que había alcanzado su clímax por esos días, consolidar la base de apoyo republicana y devolver el favor electoral de los cubanoamericanos de Florida.

Ante el virulento discurso de Trump, la respuesta cubana, no se hizo esperar. A través de un texto publicado en el *Granma*, se dio a conocer un documento en el que se sostiene que los Estados Unidos «no están en condiciones de darnos lecciones» y se cierra del siguiente modo: «Como hemos hecho desde el triunfo del 1° de enero de 1959, asumiremos cualquier riesgo y continuaremos firmes y seguros en la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible».<sup>41</sup> Allí se señala que las nuevas medidas que

<sup>40</sup> *El Nuevo Herald*, Miami, 9 de junio, 2017.

<sup>41</sup> *Granma*, La Habana, 16 de junio, 2017.

refuerzan el bloqueo están destinadas al fracaso, como ocurrió con las sucesivas sanciones aplicadas desde 1962, y que no lograrán el objetivo manifiesto de debilitar a la Revolución ni doblegar la resistencia del pueblo cubano. Rechazando la utilización de Trump de los derechos humanos como excusa para atacar a Cuba, se señala en ese documento: «Asimismo son motivo de preocupación las violaciones de los derechos humanos cometidas por los Estados Unidos en otros países, como las detenciones arbitrarias de decenas de presos en el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo en Cuba, donde incluso se ha torturado». <sup>42</sup> No fue la única respuesta: «Este tipo es tan bruto que, mientras lo observaba, Bush Jr. me parecía Shakespeare». <sup>43</sup>

Pocas semanas antes, durante la Feria del Libro de La Habana, el poeta Roberto Fernández Retamar ya había planteado la necesidad de enfrentar a Trump y solidarizarse con México:

Trump no es una fatalidad. Hay una derecha activa en América Latina. Hace más de 10 años empezó una etapa muy positiva para nuestros países. En Brasil hubo un golpe de Estado contra Dilma (Rousseff), triunfó la derecha en Argentina y habrá elecciones en Ecuador; debería ser el Stalingrado de América donde se inició la derrota del ejército nazi y ojalá en Ecuador se detenga el avance de la derecha. (...) Está surgiendo una resistencia a Trump en el seno de Estados Unidos. Con Trump se ha caído la máscara del imperialismo estadounidense. Trump es el continuador de muchas cosas negativas en la política de ese país y el muro es una cosa monstruosa. (...) México representa mucho para nosotros, es un país entrañable. Estamos seguros de que encontraremos una forma de detenerlo. Nosotros hemos hecho frente a 11 presidentes de Estados Unidos; Trump es uno más, muy vociferante, muy sexista, pero uno más. <sup>44</sup>

Esta agresividad registró un nuevo capítulo hacia fines de septiembre. Tras denunciar un supuesto «ataque sónico» contra diplomáticos estadounidenses apostados en La Habana, <sup>45</sup> el 29 de septiembre la

<sup>42</sup> Ídem.

<sup>43</sup> Citado en: Juan Manuel Karg: «Ajedrez norteamericano», en *Página/12*, Buenos Aires, 17 de junio, 2017, p. 21.

<sup>44</sup> Citado en *La Jornada*, México, 19 de febrero, 2017, p. 13.

<sup>45</sup> Si bien no se acusó al gobierno cubano, el Departamento de Estado lo responsabiliza por no cuidar los diplomáticos estadounidenses.

Administración Republicana resolvió reducir al mínimo la misión diplomática en la isla. Hizo volver a 21 diplomáticos, congeló el otorgamiento de visas a cubanos y recomendó que sus ciudadanos no viajaran a Cuba. El 3 de octubre, además, resolvió expulsar a 15 diplomáticos cubanos que cumplían funciones en la embajada en Washington. El secretario de Estado, Rex Tillerson, quien aclaró que de todas formas no se rompían las relaciones diplomáticas, explicó: «La decisión se tomó por la incapacidad de Cuba de dar los pasos apropiados para proteger a nuestros diplomáticos de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención de Viena».<sup>46</sup>

Cedió así, una vez más, ante el poderoso senador Marco Rubio, quien aplaudió esta medida: «La embajada de los Estados Unidos en La Habana debería ser reducida a una sección de intereses y debemos estar preparados para considerar medidas adicionales contra el régimen de Castro si estos ataques continúan».<sup>47</sup>

La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. En conferencia de prensa, ese mismo día en La Habana, el canciller Bruno Rodríguez declaró: «El gobierno de Estados Unidos, con estas acciones políticamente motivadas e irreflexivas, es el responsable del deterioro presente y probablemente futuro de las relaciones bilaterales».<sup>48</sup> Este nuevo incidente, instigado por el lobby cubanoamericano de Florida, es una muestra más de la hostilidad de la Casa Blanca con toda Nuestra América, y seguirá socavando la ya alicaída imagen de Trump en la región.

### **Los dos caminos frente a Trump: subordinarse o enfrentarlo**

Trump está concitando un amplísimo rechazo internacional, como ocurrió con Bush, o peor: «La mala imagen global de Trump, peor a la que pintan las encuestas dentro de Estados Unidos, quedó plasmado en un sondeo del Centro de Investigaciones Pew, un *think tank* de Washington, que se realizó en 37 países, incluidos siete en América latina, entre ellos, la Argentina. «La confianza en el presidente Donald Trump es particularmente baja en América latina. En ningún país de los siete que encuestamos más de dos de cada diez personas dicen que tienen confianza en el presidente. Es tan baja como en los países europeos»,

<sup>46</sup> Citado en *Página/12*, Buenos Aires, 4 de octubre, 2017.

<sup>47</sup> Ídem.

<sup>48</sup> Ídem.

resumió a *La Nación* Jacob Pushter, uno de los investigadores del Centro Pew que trabajó en la encuesta. Un 13% de los argentinos confía en el liderazgo global de Trump, quien llegó a lo más alto del poder político recostado en una plataforma xenófoba y nacionalista, y el mantra «Estados Unidos, primero», pilar de su presidencia. Un 82% piensa que es arrogante; un 78%, intolerante, y siete de cada diez lo consideran «peligroso».<sup>49</sup> En junio se conoció la noticia del aplazamiento de la visita de Trump a Londres, para evitar las múltiples protestas callejeras que se estaban organizando.<sup>50</sup> El rechazo que suscita Trump es bastante homogéneo en la región. Se destaca México, pero también alcanza a la Argentina, a pesar del alineamiento del presidente Macri, quien viajó a la Casa Blanca a visitar a Trump el 27 de abril. Esto, como veremos más adelante, puede implicar un problema para Estados Unidos: cuando se dirija a la VIII Cumbre de las Américas, en Lima, o a la Cumbre presidencial del G20, en Buenos Aires, a los gobiernos derechistas de esos países les será complicado evitar movilizaciones de protesta. No es lo mismo aparecer sonriente frente al carismático Obama, que frente al revulsivo Trump. El «fantasma» de Mar del Plata (2005) —pero también el recuerdo de las protestas que debieron enfrentar Nixon (1958) y Rockefeller (1969)— recorrerá la región cuando Trump nos visite en 2018.

Nuestra América atraviesa una hora incierta, en el que se avizoran dos caminos. O se imponen los gobiernos derechistas, que están dispuestos a asumir un rol subordinado frente a la Casa Blanca, aún si quien la ocupa temporalmente sostiene un discurso xenófobo, antihispano y crítico de los acuerdos de libre comercio, o se construye una alternativa superadora, en oposición a la prepotencia injerencista y militarista que impulsa la principal potencia imperial. El dilema es crucial para las fuerzas de izquierda, populares y progresistas de Nuestra América. Ante la ofensiva imperialista es crucial y urgente construir una alternativa superadora, que vaya más allá de la mera posición defensiva frente al avance del capital transnacional más concentrado.

A lo largo de la historia, las políticas de Estados Unidos hacia el sur del continente, desde que abandonaron las invasiones abiertas con

<sup>49</sup> *La Nación*, Buenos Aires, 27 de junio, 2017.

<sup>50</sup> *The Guardian*, Londres, 11 de junio, 2017.

<sup>51</sup> Carlos Escudé: *Principios de Realismo Periférico. Una teoría argentina y su vigencia ante el ascenso de China*, Lumiere, Buenos Aires, 2012.

*marines* en pos de la *buena vecindad*, se nutrieron de dos componentes: ofrecimientos y amenazas. Promesas de ayuda financiera, concesiones comerciales, inversiones e intercambios académicos convivieron históricamente con amenazas, desestabilizaciones, sanciones económicas y apoyos a militares golpistas. Así, para conseguir aprobar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947, se prometió una suerte de *Plan Marshall para América Latina*. Para lograr los votos que permitieran expulsar a Cuba de la OEA, se lanzó la Alianza para el Progreso. Luego del fracaso del endurecimiento de las sanciones económicas contra Cuba en la década de 1990 —resistidas heroicamente por el pueblo cubano y rechazadas por casi todos los países del mundo—, Obama optó por la distensión y por promover el comercio, el turismo y la radicación de inversiones estadounidenses como un mecanismo para penetrar en la isla y forzar los cambios que Washington anhela hace más de medio siglo.

Como ocurrió en todo el siglo XX, hoy conviven los ofrecimientos —acuerdos de libre comercio, inversiones, asistencia financiera—, con las amenazas para quienes confronten con los intereses de Washington: red de bases militares de nuevo tipo, desestabilización de los gobiernos bolivarianos, espionaje contra presidentes latinoamericanos, presión a través de las grandes corporaciones de prensa, financiamiento a grupos opositores a través de ONGs, quita de beneficios comerciales. Estados Unidos necesita restablecer la legitimidad e influencia que supo tener la OEA en la posguerra, una institución que fue, la mayor parte de las veces, funcional a sus estrategias de dominio y ordenamiento regional.

Los movimientos sociales y las fuerzas políticas populares de la región advierten, mayoritariamente, esta nueva ofensiva imperialista, que aprovecha las debilidades del bloque bolivariano para reintroducir la agenda neoliberal. Retomar la integración desde abajo, aquella que hace casi una década logró derrotar el ALCA, parece uno de los caminos a privilegiar para resistir este nuevo embate. En esa línea, es hora de avanzar en la integración autónoma, por fuera del mandato de Estados Unidos, y con una agenda propia.

En 2005 estaba prevista la entrada en vigencia del mayor proyecto estratégico de Estados Unidos para consolidar su hegemonía regional: el ALCA. Sin embargo, fue en Mar del Plata, sede de la IV Cumbre de las Américas, donde esa iniciativa fue enterrada para siempre. El ALCA respondía a la necesidad de Estados Unidos de ejercer un dominio más



acabado. Para lograr consolidar su amplio *patio trasero*, precisaba avanzar en el viejo proyecto de unión aduanera y, fundamentalmente, obturar cualquier proceso de integración alternativa como el Mercosur o el Pacto Andino. No es casual que el ALCA fuera lanzado en el marco del Consenso de Washington (1989) y cuando Brasil y Argentina, los *gigantes* del sur, estaban iniciando un proyecto de unión sudamericana. El ascenso de Hugo Chávez en Venezuela, su radicalización política y su insistencia en retomar el viejo proyecto de Bolívar, a partir de la propuesta del ALBA-TCP, encendieron una luz de alarma en el gobierno estadounidense. Más aún cuando, en la XV Cumbre Iberoamericana (2005), se anunció la futura incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Como en los últimos dos siglos, la capacidad de Estados Unidos para establecer un dominio sobre América Latina dependía de que no se constituyera una integración regional independiente y autónoma de los mandatos de la potencia del norte. El ALCA hubiera sido un instrumento fundamental para abortar esa alternativa y para aislar a Venezuela y Cuba, consolidando la dependencia de los países latinoamericanos.

Este proyecto respondía también a la necesidad de Estados Unidos y sus capitales más concentrados de competir con los otros bloques económicos y/o políticos. Estados Unidos, con el ALCA, pretendía contrarrestar el proceso de conformación de bloques en Europa y Asia, estableciendo un área donde su hegemonía no se viera desafiada. Por su creciente déficit comercial y fiscal y por su excesivo endeudamiento, Estados Unidos necesitaba revertir ciertas tendencias económicas de los últimos años. Los sectores financieros, los grandes exportadores y las empresas estadounidenses más concentradas pretendían terminar de apropiarse de un área históricamente disputada con Europa, consolidando la supremacía del dólar y frenando el avance de nuevas potencias, como China, que venían posicionándose en la región.

El estancamiento en las negociaciones para establecer este tratado de libre comercio no se explica solamente a partir de las contradicciones entre diferentes grupos de interés al interior de cada uno de los países americanos y de la reticencia de Estados Unidos a recortar sus subsidios agropecuarios, sino también por la creciente oposición política en América Latina: cambio de signo de los gobiernos de distintos países latinoamericanos, sublevaciones populares, creciente movilización anti-ALCA (Foro Social Mundial, Alianza Social Continental, Cumbres de

los Pueblos), y surgimiento de un proyecto de integración alternativa, en torno al ALBA, tomado como bandera por los movimientos sociales latinoamericanos. Cuando se estaban dificultando las negociaciones para liberalizar el comercio interamericano, Brasil impulsó la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), luego fue reemplazada por la UNASUR.

La derrota definitiva del ALCA se produjo en la IV Cumbre de las Américas, el 4 y 5 de noviembre de 2005. Allí se expresaron, en principio, dos bloques. Por un lado, los países que firmaron la propuesta de declaración apoyada por Estados Unidos, que planteaba avanzar para concretar este acuerdo de libre comercio. Por el otro, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, que se unieron para forzar una declaración final dividida —mientras que 29 países apoyaron la primera, 5 firmaron la segunda—. Sin embargo, y pese al intento de diversos actores por presentar la postura de estos cinco países como un sólido bloque antiimperialista que defendía los intereses de las mayorías populares latinoamericanas, en realidad había diferencias entre las posturas de Venezuela —con el apoyo cubano, clave en la construcción de la resistencia— y de los por entonces cuatro miembros plenos del Mercosur. Mientras que el país caribeño planteaba la necesidad de una abierta confrontación con Estados Unidos, tanto Brasil como Argentina, al igual que en la Organización Mundial del Comercio (OMC), pretendían en las negociaciones continentales presionar para que Estados Unidos —y a nivel global también Europa y Japón—, disminuyeran los subsidios y protecciones a sus productores agropecuarios, logrando así una liberalización más radical del comercio internacional. Si se les exigía la apertura de sus mercados internos, planteaban los representantes brasileños y argentinos, era indispensable que hubiera una contraprestación: que se abrieran los mercados europeos y estadounidenses para las exportaciones —mayoritariamente primarias o agroindustriales— de estos países.

Después del traspie en Mar del Plata, Estados Unidos debió ajustar su estrategia y optó por avanzar con los TLC bilaterales, negociados en forma individual con los gobiernos afines. Quedó como tarea para un nuevo presidente, Obama, intentar reconstruir los lazos con la región. Pero América Latina pareció darse un nuevo objetivo: avanzar en la siempre postergada integración regional, por fuera del mandato y control de Washington.

Sin embargo, acechan hoy nuevos peligros. Avanza la Alianza del Pacífico —tres de cuyos países habían confluído en 2016 el TPP, un resabio del ALCA impulsado por Estados Unidos y gobiernos aliados—, con una impronta neoliberal. Por otra parte, algunos gobiernos de la Unión Europea, como el de España, quieren arribar a un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, y encuentran ahora interlocutores en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, poniendo en peligro la propia viabilidad del bloque del sur. Asimismo, China negoció acuerdos económicos bilaterales con los países de la región, profundizando un esquema extractivista, que históricamente, ahondó la dependencia regional. Aun cuando el TPP esté hoy en crisis, tras la salida de Estados Unidos, la amenaza persiste ya que los otros once signatarios pretenden mantenerlo.

La histórica estrategia de fragmentar la unidad latinoamericana, aún vigente, enfrenta serios desafíos. El ALBA, como proyecto de integración alternativa, y la UNASUR y la CELAC, como herramientas de coordinación y concertación política entre los países de Nuestra América, supieron ser una de las manifestaciones de la menguante hegemonía estadounidense. Superar la concepción del *realismo periférico*,<sup>51</sup> re-nuente a confrontar con la principal potencia por los costos económicos que supuestamente acarrearía, es el desafío principal de las clases populares de los países de la región. Es hora de concebir otro tipo de integración, inspirada en los ideales bolivarianos, pero pensada como estrategia de real autonomía e independencia, en el camino hacia la construcción de otro orden económico-social a nivel mundial.

A gobiernos derechistas, como los de Macri, Temer o Peña Nieto —o el ahora reelecto Sebastián Piñera—, impulsores de los tratados de libre comercio y de la apertura económica indiscriminada, alinearse con el impopular Trump les hará pagar un costo político interno alto. Nuestra América debe avanzar con una agenda propia, descartar las estrategias aperturistas y subordinadas a Estados Unidos. El fracaso de las socialdemocracias europeas y del Partido Demócrata en Estados Unidos, que a pesar de su prédica progresista implementaron el ajuste neoliberal, tiene que ser una lección para las fuerzas populares y de izquierda. O se avanza con una crítica radical y se construyen alternativas, o la impugnación a la globalización neoliberal será aprovechada por los líderes neofascistas.<sup>52</sup> Los países del ALBA, en tanto, parecen

<sup>52</sup> Los buenos resultados electorales obtenidos recientemente por Bernie Sanders, Jean-Luc Melenchón y Jeremy Corbyn muestran la necesidad de profundizar un discurso crítico, en vez de optar por variantes centristas.

haber registrado esta situación y salieron en marzo a criticar las iniciativas xenófobas de Trump y proponer diversas medidas para contrarrestarlas.<sup>53</sup>

Posiciones como las de Macri son un peligro para desarrollar una perspectiva de integración regional más autónoma. Parecen haberse consolidado en los últimos meses, pero enfrentan serios desafíos internos y también externos. Como señalamos más arriba, alinearse con alguien como Trump tiene un enorme costo para las derechas gobernantes. Trump es un líder neofascista que está siendo enfrentado por mujeres, inmigrantes, afroamericanos, latinos, musulmanes, estudiantes, ecologistas, sindicatos, organismos de derechos humanos y la izquierda en Estados Unidos. Propone más poder y presupuesto a las fuerzas armadas, rebaja de impuestos a los más ricos, ataca a los sindicatos y pretende horadar los derechos laborales y cualquier regulación medioambiental —el anuncio de su salida del Acuerdo de París, por ejemplo, le granjeó duras críticas dentro y fuera de Estados Unidos—. No tiene nada de progresista y cualquier comparación con los llamados *populismos* latinoamericanos es improcedente: «Para construir una resistencia latinoamericana desde la izquierda hay que confrontar con Trump, creando vínculos de solidaridad con los manifestantes de Estados Unidos. Es poco realista fantasear con una alternativa global a Trump liderada por el Papa Francisco. En la batalla contra el exponente del imperio hay que apuntalar proyectos anticapitalistas. Es la única forma de recuperar conquistar y preparar caminos hacia la igualdad social».<sup>54</sup>

En 2016, en Argentina, se repudió la visita de Obama, que coincidió con el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Hubo que soportar el enorme embelesamiento de la prensa hegemónica local para con la familia Obama: cubrieron sus actividades como si se tratara de una estrella internacional de rock. Con Trump, la situación no será igual. Si sobrevive a las iniciativas para realizarle un juicio político y todavía es presidente a mediados de 2018, visitará la Argentina para asistir a la Cumbre Presidencial del G20. Allí va a enfrentar en las calles concentraciones similares a las que se produjeron en Mar del

<sup>53</sup> El domingo 5 de marzo se reunió en Caracas la XIV Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP y allí se tomaron diversas medidas para enfrentar la hispanofobia de Trump.

<sup>54</sup> Claudio Katz y otros: *Trump y su impacto en la región. Reflexiones sobre la situación económica mundial y sus perspectivas*, ob. cit., p. 15.

Plata, durante la IV Cumbre de las Américas, en noviembre del 2005, con las consignas No al ALCA y fuera Bush de Argentina y América Latina.<sup>55</sup> Antes, de acuerdo a lo que prometió en febrero al presidente peruano, tendrá otro viaje a la región: en marzo estará presente en Lima, en la VIII Cumbre de las Américas.

En síntesis, Trump es un gran peligro —sus iniciativas misóginas, xenófobas, antiobreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una señal de alarma para el mundo entero—, pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar la integración latinoamericana con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista, y al mismo tiempo ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos. Con Trump, a la clase dominante estadounidense, y a sus gobiernos aliados en la región, se les complica desplegar el *imperialismo moral*. Con el actual ocupante de la Casa Blanca, les cuesta mostrar a Estados Unidos como el líder de los organismos multilaterales, que cuida las democracias, el planeta y los *valores occidentales*, respetando las normas de la diplomacia internacional. Como declaró Julián Assange, el líder de *Wikileaks*, si Obama era «un lobo con piel de cordero», Trump es un «lobo con piel de lobo».<sup>56</sup> Expresa descarnadamente el afán de dominio imperial sobre Nuestra América. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Ante los dos caminos posibles, aceptar el dominio colonial, subordinándose a Estados Unidos, o avanzar en la postergada confluencia de Nuestra América, sólo el segundo permitirá una inserción internacional más autónoma, condición necesaria para avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y sin depredación.

Tras la XI Reunión Ministerial de la OMC (Buenos Aires, 10 al 13 de diciembre de 2017), la mirada del mundo volverá hacia la capital argentina en 2018, cuando se realice la Cumbre Presidencial del G20 (30 de noviembre, 1 de diciembre). Tanto los promotores de la globalización neoliberal como los nuevos líderes xenófobos de las potencias centrales defienden a los intereses de las grandes corporaciones. Más «libre comercio» no equivale a más desarrollo, ni a menos pobreza ni a menor desigualdad. Las opciones que nos ofrecen los defensores de la OMC y los críticos como Trump son en realidad funcionales a distintas fracciones

<sup>55</sup> *La Nación*, Buenos Aires, 12 de junio, 2017.

de las clases dominantes de los países centrales. Frente a ese escenario, la salida no es optar por esa falsa disyuntiva, ni limitarse a aceptar meras reformas cosméticas de la OMC, sino avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

El gran desafío, para las izquierdas, los movimientos populares y las fuerzas progresistas, es articular las luchas globales, regionales y nacionales —«pensar global y actual local»—, y ofrecer una alternativa favorable a nuestros pueblos y a la preservación de los bienes comunes de la tierra. La lucha contra los mega acuerdos de libre comercio y la agenda pro corporaciones que promueven las potencias en el G20 es una oportunidad para coordinar con las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, migrantes, LGBT y de derechos humanos que resisten en todo el mundo:

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizarse contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.<sup>57</sup>

Pocos días antes de la llegada de Trump, Merkel y demás líderes del G20, en noviembre de 2018, se realizará también en Buenos Aires el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).<sup>58</sup> Allí se amplificarán los debates que se dieron en el Congreso de ALAS realizado en Montevideo hace dos semanas. Ese encuentro de intelectuales, activistas, dirigentes sociales y políticos será un escenario ideal para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo, para avanzar en la construcción de nuestras agendas alternativas y para seguir construyendo ese otro mundo posible que anhelamos.

<sup>56</sup> *Página/12*, Buenos Aires, 5 de febrero, 2017.

<sup>57</sup> Declaración Final de la Cumbre de los Pueblos, en: [www.fueraomc.org](http://www.fueraomc.org).

<sup>58</sup> Consultar <http://www.clacso.org/conferencia2018/>.

# Regreso al pasado en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba

Luis René Fernández Tabío

*lrferman@cehseu.uh.cu*

Doctor en Ciencias Económicas.

Profesor Titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU), Universidad de La Habana.

## **Resumen:**

Este artículo analiza las condiciones y factores internos y externos, que influyen en la conformación de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y permiten explicar su continuidad y cambio en los primeros dos años y medio de la presidencia de Donald Trump, a partir de documentos oficiales y otras fuentes recientes de especialistas en este campo. Se asume que el actual retroceso en la política de Estados Unidos hacia Cuba, si bien conserva rasgos de continuidad, introduce ajustes que podrían explicarse fundamentalmente por la interrelación de tres contextos: los desafíos internos por los que atraviesa la Presidencia estadounidense, las percepciones sobre la vulnerabilidad cubana, y una más favorable correlación de fuerzas a Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe.

## **Palabras clave:**

Estados Unidos, Cuba, factores políticos, continuidad y cambio, conflicto.

## **Abstract:**

*This article analyzes the conditions and domestic and external factors that influence the conformation of the United States foreign policy toward Cuba during the first two and a half years of the Presidency of Donald Trump, and allow to explain their continuity and change, from official documents, and*

*others sources and contributions presented by others researchers in this field. It assumes that the current setback in US foreign policy toward Cuba, while preserving the continuity trend, could be explained fundamentally by three interrelated contexts: the internal political challenges to the US Presidency; perceptions on Cuban vulnerabilities; and a more favorable balance of forces to the United States in Latin America and Caribbean region.*

**Keywords:**

*United States, Cuba, conflict, political factors, continuity and change.*

## **Introducción**

Un considerable esfuerzo de investigación sobre la conformación de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba ha sido dedicado a la interpretación del conflicto entre los dos países desde la perspectiva histórica y mediante el análisis de documentos desclasificados.<sup>1</sup> Asimismo, se han realizado estudios del problema desde distintos ángulos, entre los que se destacan la seguridad, el conflicto y la cooperación, y las relaciones económicas.

Por momentos parece que el campo de investigación se encuentra agotado y entonces nuevas estrategias políticas retoman viejas formulaciones y reverdecen el debate. Se replantean las interpretaciones de las variables que determinan el proceso de conformación de la política y las características y perspectivas del conflicto. Este artículo analiza las condiciones y factores internos y externos, que influyen en el retroceso de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba desde el 20 de enero de 2017, y hasta mediados de 2019. En ese marco temporal y reconociendo la interacción en los contextos internos y externos de Cuba y Estados Unidos, así como el balance regional de fuerzas, se proyecta el escenario más probable en la política estadounidense hacia Cuba en el corto plazo.

Se plantea como hipótesis para explicar las causas principales del actual retroceso en la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba, la interrelación dinámica de tres contextos: los desafíos políticos internos, dentro del sistema político e ideológico de EE. UU., y en particular los que involucran al propio Presidente; las percepciones sobre la vulnerabilidad cubana, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo e indirectamente

<sup>1</sup>William M. Leo Grande y Peter Kornbluh: *Back Channel to Cuba. The Hidden History of Negotiations between Washington and Havana*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2015; Elier Ramírez y Esteban Morales: *De la confrontación a los intentos de normalización: la política de Estados Unidos hacia Cuba*, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2014.



por los efectos de la guerra económica contra Venezuela; y una más favorable correlación de fuerzas a Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe.

### **Raíces de la política de Estados Unidos hacia Cuba**

Las raíces históricas del conflicto en las relaciones bilaterales se basan en los objetivos fundacionales de los padres de la independencia de ambos países. En el caso de Estados Unidos, con fuertes tendencias expansionistas e imperialistas, desde un inicio consideraron a Cuba como posesión necesaria para sus intereses económicos y de seguridad nacional. Figuras de la talla y significación de Thomas Jefferson fueron muy enfáticos en ese sentido. La más rotunda y divulgada de esas visiones fue la expresada por John Quincy Adams cuando formuló la supuesta ley de gravitación política, por la cual Cuba debía «gravitar hacia la Unión Norteamericana, la cual, por las propias leyes de la naturaleza, no puede rechazarla en su seno».<sup>2</sup>

Para José Martí, el principal ideólogo y organizador de la última etapa de la guerra independentista cubana, la necesidad de alcanzar la independencia de Cuba de España y de Estados Unidos es crucial y representa uno de los objetivos ineludibles de la nación cubana. Es en esa problemática donde reside la esencia del conflicto en las relaciones bilaterales y por ello es tan difícil de solucionar, porque los gobiernos estadounidenses, con distintos discursos y combinación de instrumentos, persisten en su objetivo de mantener a Cuba subordinada de un modo u otro. El tema debatido por el historiador estadounidense Lars Shoultz respecto a una «dominación benevolente», o la alternativa de hostilidad, mantiene vigencia. Lo cierto es que la geografía importa y no podemos dejar de ser vecinos cercanos.<sup>3</sup>

Aunque el discurso de la política oficial de Estados Unidos se modifique, y en ocasiones trate de ocultar sus verdaderos propósitos, al mutar los instrumentos de los más directos a los indirectos y sutiles—evidentes en las vacías referencias a la libertad, la democracia y los derechos humanos—, con mayor frecuencia se reconoce abiertamente el propósito de *cambio de régimen*, a favor de un sistema de economía de mercado y democracia liberal, como condición favorecedora de esa subordinación. Tal combi-

<sup>2</sup> Louis A. Pérez Jr.: *Cuba en el imaginario de los Estados Unidos*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014, p. 51.

<sup>3</sup> Lars Shoultz: *That Infernal Little Cuban Republic: The United States and the Cuban Revolution*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2009, pp. 566-567.

nación pretende, aunque no lo consiga, el sometimiento de Cuba con los mismos financiamientos que se han venido aplicando parasubvertir la realidad cubana, en cumplimiento de lo definido por las leyes estadounidenses anticubanas, abiertamente violadoras de la soberanía e independencia de Cuba, la Torricelli (Cuba Democracy Act of 1992)<sup>4</sup> y la Helms-Burton (Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996)<sup>5</sup>, que rigen la política de Estados Unidos hacia Cuba.

De ahí que los objetivos de mejorar las relaciones sean tan desafiantes y se considere un propósito claramente definido por la diplomacia cubana el respeto de la libertad, independencia y la soberanía de Cuba, en observancia de los principios del derecho internacional y la igualdad de los Estados. A partir de esas premisas se puede avanzar en todo lo que sea posible en las relaciones con los gobiernos de Estados Unidos. En ese mismo sentido, es preciso fijar los límites de la propia posibilidad de un proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba. Dada la naturaleza raigal del conflicto desde sus respectivos intereses nacionales, o se define como una tendencia, o, como lo ha delimitado el liderazgo político e histórico de Raúl Castro, como una convivencia civilizada.

Siendo la esencia de la contradicción entre los dos países tan profunda, en tanto incorporada a las respectivas identidades nacionales, la única alternativa favorable para el bienestar de los dos pueblos, que tienen tanto en común, es el camino de la llamada normalización de relaciones con todas las advertencias necesarias. Se trataría de alcanzar un tipo de relaciones económicas, políticas, ideológicas y culturales, que reconozca las asimetrías, respete las diferencias y permita avanzar los vínculos entre los dos países con beneficios recíprocos para el mejor desarrollo y bienestar de los dos pueblos.

### **Contextos del retroceso en la política de EE. UU. hacia Cuba La política interna de EE. UU.**

La elección de Donald Trump en 2016 alteró el curso de los acontecimientos y el proceso de normalización en las relaciones de Estados Unidos con Cuba iniciado durante los dos últimos años de la presidencia de

<sup>4</sup> U.S. Congress: *Cuban Democracy Act of 1992*. P.L. 102-484, Title XVII. En: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/cda.pdf>

<sup>5</sup> U.S Congress: *Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996*. P.L. 104-114. En: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/libertad.pdf>

Obama, e inició un retroceso en su política hacia Cuba. La causa de esos cambios en las direcciones de la política de Estados Unidos se deben a la agudización de las contradicciones del capitalismo estadounidense en esferas tan sensibles como la composición étnica, religiosa y cultural de su población, y los problemas respecto al incremento de las desigualdades socioeconómicas y la calidad del empleo, en su condición de principal centro imperialista en una larga fase de declinación relativa dentro del sistema de relaciones internacionales.

Las nuevas realidades económicas, sociales y políticas no se corresponden con el sistema establecido, pero se expresan en lo que se ha llamado política de identidad nacional y han sido y están siendo aprovechadas por el actual Presidente para cohesionar su núcleo de apoyo político. La elección de Donald Trump refleja esa nueva inclinación con rasgos de nacionalismo jacksoniano, populismo y neofascismo en una vuelta al pasado, aunque en otras circunstancias.

La administración Trump es consistente en su discurso político en cuanto al proteccionismo comercial, la xenofobia antimigratoria y la hostilidad al multilateralismo —característico del llamado orden liberal de posguerra—, aunque en el campo de las finanzas apoya resueltamente la desregulación al capital, y se opone a todas las políticas ecológicas, para favorecer la explotación de la energía fósil, petróleo, gas, e incluso carbón en áreas protegidas, con vistas al desarrollo de oleoductos aunque afecten el medio ambiente. Numerosos analistas subrayan entre los rasgos de este presidente una enorme ignorancia política, desdén hacia el mundo intelectual y la prensa, y hostilidad hacia el gobierno federal y la clase política estadounidense en general. El presidente y sus cercanos colaboradores han incorporado un lenguaje lleno de estereotipos y comportamiento errático, que rompe con la respetabilidad burguesa, que gana el rechazo del *establishment* político-mediático y lo hace popular en sectores de la población blanca de clase media baja, que se ha sentido marginada y desprotegida.

Una de las principales tendencias en la política exterior de Estados Unidos ha sido la incertidumbre, la volatilidad, e incluso la falta de coherencia en ciertas decisiones de política exterior. Estas parecen responder a aspectos de política interna —demandas de la base electoral de Trump, *Make America Great Again*—, más que a una estrategia basada en opiniones de expertos y cuadros experimentados de la burocracia gubernamental, que pone en un segundo plano las consecuencias a más largo plazo desde el punto de vista geopolítico.

Dicha falta de coherencia se refiere al planteamiento general de la política de Trump, que busca en sentido general ampliar los negocios y crear empleo para la economía interna de Estados Unidos, mientras en su política hacia Cuba actúa en sentido contrario. Aunque la economía cubana no sea de enorme tamaño, sí es significativa e importante para algunos estados de la Unión americana. Al incrementar el bloqueo económico y financiero, reduce las posibilidades de negocios y empleo para Estados Unidos en relación con Cuba. La directiva de política de Trump para Cuba tampoco fortalece la seguridad, pues aunque el gobierno cubano no pretenda retar a Estados Unidos en ese terreno, no cabe duda que el casi abandono de su embajada en La Habana dificulta la colaboración en todas las esferas, incluso en los sensibles temas de la seguridad nacional.

Concretamente en lo que respecta a la formulación de la política de Trump hacia Cuba, se conjugan factores específicos que influyen en sus decisiones. La Isla no es una prioridad entre otros tantos retos mundiales de gran significación como China, Rusia, Corea, Irán, Siria e Israel. Una novedad en la política hacia Cuba resulta de plantearla como parte de su estrategia de seguridad nacional con el objetivo de restablecer su sistema de dominación en Venezuela, Cuba y Nicaragua, de modo que la política hacia Cuba se pone en función de este enfoque con argumentos obsoletos, heredados de la llamada Guerra Fría. Aunque, en un sentido particular, Cuba no salió de ese escenario cuando se daba por terminada en los análisis de relaciones internacionales después de la desaparición de la URSS y el campo socialista europeo.

La administración Trump enfrenta enormes desafíos en política interna que dañan su estabilidad: manifiestan división, falta de consenso entre los funcionarios del propio Ejecutivo, y pugnas con todos los órganos del gobierno, llegando a poner en juego hasta su permanencia en la Casa Blanca con la amenaza del *impeachment*. Estas condiciones han creado un contexto favorable para la influencia de figuras portadoras de políticas extremistas hacia Cuba, que aunque desconocen la realidad cubana, ofrecen respaldo al Presidente ante la avalancha de sus problemas en política interna.

### **Pasos en el proceso de retroceso en la política de Estados Unidos hacia Cuba**

La política de Trump para Cuba se ampara principalmente en el enfoque de las leyes anticubanas existentes en Estados Unidos, que tienen

como pieza clave la Ley Helms-Burton, de 1996. El propósito de reducir el bloqueo y las sanciones que afecten a la economía cubana, parte del supuesto de que es posible en las condiciones actuales retrotraer a Cuba al pasado neocolonial. Formalmente, el documento de política de Estados Unidos hacia Cuba emitido por el presidente Trump se conoce como el Memorando Presidencial para la Seguridad Nacional NSPM-5, titulado «Fortaleciendo la política de Estados Unidos hacia Cuba».<sup>6</sup> Este documento fue dado a conocer el 17 de junio de 2017, aunque no se inició su ejecución hasta el mes de octubre de ese propio año. Existen diferencias de enfoque y percepciones sobre el proceso cubano —no solamente en la calidad de los documentos y su extensión— entre la directiva presidencial de Obama para la política de Estados Unidos hacia Cuba, y el memorando emitido por Trump para destruir el legado de su predecesor. Desde mi perspectiva, la directiva de Obama<sup>7</sup> contiene importantes consideraciones que eventualmente serán parte de la política estadounidense, porque toma en cuenta el fracaso de la política precedente, las actualizaciones internas en Cuba, así como los cambios del balance de fuerzas en la región y en el mundo. La política de Obama tiene alcance estratégico, pone énfasis en los instrumentos de *poder blando* y se proyecta a largo plazo. La política de Trump es coyuntural y de corto plazo, enfatiza los instrumentos de fuerza y demuestra el desconocimiento de sus autores sobre la realidad cubana. Sus propuestas resultan de atender asuntos internos y circunstanciales de la política de Estados Unidos y las pretensiones de reelección de Trump.

Debe advertirse, que el incremento de las medidas de bloqueo e intentos de aislar a Cuba también perjudican al pueblo de Estados Unidos, al privarlo de beneficios económicos, fuentes de empleo y permitir elevar los niveles de protección recíproca de la seguridad nacional sobre las bases de la negociación diplomática y la colaboración. Desde la perspectiva geopolítica y de seguridad nacional, la política de Trump hacia Cuba no solamente dificulta la cooperación en esta esfera, sino que favorece el acercamiento a Cuba de países como China y Rusia,

<sup>6</sup> Federal Register: NSPM-5 «Strengthening the Policy of the United States Toward Cuba», 2017. En: <https://www.federalregister.gov/documents/2017/10/20/2017-22928/strengthening-the-policy-of-the-united-states-toward-cuba>.

<sup>7</sup> The White House: Presidential Policy Directive. United States-Cuba Normalization, October 14, 2016. En: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/14/presidential-policy-directive-united-states-cuba-normalization>.

declarados en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 y otras declaraciones oficiales del gobierno como sus adversarios.<sup>8</sup>

Condiciones internas de Estados Unidos, como la acumulación de contradicciones estructurales generadas por el propio sistema, contribuyeron a la elección de Donald Trump. El Presidente supo interpretar la significación de los referentes políticos, ideológicos y de identidad nacional que se encuentran en los que lo apoyan, pero lejos de aliviar esas contradicciones, la acrecienta. La ambivalencia inicial de Trump respecto a Cuba<sup>9</sup> fue decantada progresivamente hacia posiciones cada vez más duras de reforzamiento del bloqueo y sanciones destinadas a frenar la entrada de ingresos al país por cualquier vía. El Presidente estadounidense, enfrentado a grandes desafíos internos y externos, transa lo que pudiéramos llamar «la carta cubana», por apoyo político interno en el Congreso y cree de algún modo lo que le dicen sus asesores sobre la posibilidad de restablecer la dominación continental derrocando los «regímenes hostiles» de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que atraviesan de conjunto por situaciones difíciles.

La influencia del Senador Marco Rubio, y otros congresistas de origen cubano, constituye un resultado colateral, derivado de la división política al interior de la clase política estadounidense, pero acaba convirtiéndose en una pieza clave en la formación de política exterior hacia nuestra región, como una especie de asesor del Presidente e intermediario con las principales figuras del gabinete encargados de la ejecución de la política exterior. Le sirven de aliados al Presidente ante sus desafíos internos y prometen servir de soporte a las elecciones presidenciales de 2020 a lo que sumarían, en el plano externo, la consolidación de su sistema de dominación hemisférico.

Otras fuerzas políticas y económicas, aunque han sido minimizadas por la avalancha de fuerzas conservadoras del Ejecutivo encargadas de la política exterior, han tratado de moderar infructuosamente el retroceso de la política. Se trata de intereses económicos, políticos y de la seguridad nacional favorables a la mejoría de las relaciones entre los dos países, que se identifican con las posturas de la mayoría del pueblo estadounidense, incluyendo a los cubanoamericanos.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Paul D. Eaton y David L. McGinnis: «The Trump's Critical Cuba Policy», *Politico*, 2017. En: <https://www.politico.com/agenda/story/2017/05/17/trump-cuba-policy-threat-national-security-000442>

<sup>9</sup> William M. Leo Grande: «Which Trump Will Cuba Have to counted With the Hard-Liner the Deal maker», *World Policy Review*, November 16, 2016. En: <http://www.worldpoliticsreview.com/author/william-m-leogrande/>.

<sup>10</sup> Engage Cuba: «The Economic Impact of Tightening U.S. Regulations on Cuba», May 31, 2017. Washington. DC. En: <https://static1.squarespace.com/static/55806c54e4b0651373f7968a/t>

Ciertas instituciones y departamentos de burocracia oficial pueden haber desempeñado una cierta función estabilizadora, tratando al menos de reducir los daños de las propuestas más radicales y agresivas hacia Cuba, pero los famosos contrapesos del sistema político no han logrado cumplir su cometido ante un Presidente muy activo e impredecible. La clave de la cooperación se asocia a las experiencias favorables desarrolladas entre instancias de la seguridad de ambos países, entre militares en el entorno de la base de Guantánamo y entre el FBI y la Seguridad del Estado, si bien estos espacios también son parcialmente neutralizados por las decisiones, del más alto nivel, de aislamiento y bloqueo.<sup>11</sup>

Como se ha evidenciado sobre otros asuntos, en las estructuras burocráticas e institucionales del gobierno de Trump y su propio Ejecutivo —y no solamente en los medios de comunicación más influyentes de ese país—, se expresan opiniones contrarias a las del Presidente. La retórica y la inusual personalidad de Trump y el empleo de los medios sociales para trasladar mensajes, parecen en ocasiones desbordar los frenos institucionales y hasta los balances del gobierno.<sup>12</sup>

La práctica del sistema político estadounidense y la primacía en el ejercicio de las decisiones de la política exterior por el propio Presidente y sus principales figuras en este terreno, parecen corresponder con las características de una Presidencia imperial.<sup>13</sup> Ello también favorece la realización de una política muy agresiva del Ejecutivo, una vez que ubican en las instituciones y organizaciones clave en la formación de la política exterior a figuras como Mike Pompeo, en el Departamento de Estado, John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional, y Marco Rubio en el Congreso —todas con una fuerte tradición guerrerista, intervencionista, de tendencia neoconservadora— se constituye un grupo que evidencia la disposición y capacidad de liderar la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe.<sup>14</sup>

592f36dbdb29d6c96a19e3ea/1496266459829/Economic+Impact+of+Tightening+U.S.+Regs+on+Cuba.pdf

<sup>11</sup> Véase: Rafael Hernández, Jorge I. Domínguez y Lorena Barbería (coord.): *¡Play Ball! Debatendo las relaciones Cuba-Estados Unidos*, 2da. Ed., Ediciones Temas, La Habana, 2017.

<sup>12</sup> Abrams Elliot: «Trump Versus the Government. Can America Get Its Story Straights?», *Foreign Affairs*, January-February, 2019.

<sup>13</sup> Arthur M. Schlesinger Jr.: *The Imperial Presidency*, Houghton Mifflin Co., Boston, 1973, p. 187.

<sup>14</sup> Véase: Rafael González Morales: *Estados Unidos y la «Guerra 4G» contra Venezuela*, Editorial Ocean Sur, 2019, p. 18.

Encajan perfectamente en el propósito de aislar y dañar a Cuba las extrañas enfermedades de causas desconocidas, informadas por el personal diplomático de Estados Unidos en La Habana. Al no tener fundamentos científicos de sus causas, ni mucho menos poder culpar al gobierno cubano en esos incidentes, ni presentar pruebas concluyentes al respecto, no queda otra opción desde la perspectiva del análisis político, que considerarlas pretextos para justificar el casi congelamiento de las relaciones diplomáticas.

Las consecuencias de estas medidas sin duda ponen en peligro casi todos los intercambios, deportivos, académicos, culturales y hasta familiares, incluyendo el proceso migratorio entre los dos países pautado por los acuerdos existentes que garantizaban la concesión de no menos de 20 mil visas de inmigrantes anuales desde 1995. Pero ello ocurre en un contexto distinto.

Las modificaciones de las regulaciones migratorias cubanas favorecen la emigración ordenada y el regreso de los que salen del país por diferentes motivos. Ello no cancela toda la presión migratoria, pero no ocurre en las mismas condiciones. Por lo tanto, la reducción del otorgamiento de visas es mucho menos traumática que en las condiciones anteriores durante las décadas de 1980 y 1990 y no parece lo más probable que sea capaz de generar una crisis interna en la Isla.

En la fase final del gobierno de Obama, poco antes de terminar su segundo periodo presidencial, se firmó un acuerdo con el gobierno de Cuba que cancelaba la interpretación de *pies secos-pies mojados*, como puerta de entrada preferencial de los ciudadanos cubanos a Estados Unidos. Es interesante que Trump no se ha planteado restablecer esa política, que tendría graves consecuencias para la seguridad en las relaciones entre los dos países. Este acuerdo es uno de los ejemplos de continuidad Obama-Trump, y probablemente fue hablado entre el presidente saliente y el entrante como parte de las consultas en la trasmisión de poderes.

Cuba y su proceso revolucionario son considerados un adversario y una fuerza desestabilizadora para el orden que Estados Unidos desea impere en el hemisferio, como se presentó en el Memorando de Seguridad nacional firmado por el Presidente Trump el 16 de junio de 2017. Como tal se observa un énfasis en medidas de bloqueo económico y financiero, y el regreso a una retórica obsoleta de estilo Guerra Fría, muy agresiva e irrespetuosa.

La política de Estados Unidos sigue gradualmente incluyendo nuevas decisiones para recrudecer el bloqueo y afectar lo más posible las



condiciones socioeconómicas del país. El Asesor de Seguridad Nacional, uno de los principales líderes de esta política anticubana del gobierno estadounidense, insiste en que seguirán estudiando la situación para aplicar otras medidas más efectivas para tratar de hacer colapsar a la sociedad cubana. Ello parte del mismo supuesto de que tales condiciones alentarían la oposición al gobierno y eventualmente induciría el cambio de régimen favorable a sus intereses en los países denominados «Troika de Tiranías»: Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Se mantienen los instrumentos de subversión con el mismo nivel de financiamiento aprobado por el Congreso, aunque la administración ha solicitado inicialmente cifras inferiores. En esta esfera participa frente a la USAID los proyectos para Cuba de la Fundación para la Democracia NED (*National Endowment for Democracy*). El aumento en 2018 del financiamiento de la NED a Cuba respecto a lo desembolsado en 2017 pudiera parecer contradictorio con la política oficial de Trump, pero no lo es.<sup>15</sup> Dicho incremento trata precisamente de llenar el vacío dejado por la política actual del Ejecutivo estadounidense, encaminada a disminuir las relaciones con Cuba mediante el recrudecimiento bloqueo, sanciones, aislamiento, calumnias y una embajada casi vacía y disfuncional.

El endurecimiento de la política hacia Cuba se basó inicialmente en el Memorando de junio de 2017 y en las decisiones políticas para prácticamente congelar las relaciones bajo el pretexto de los ataques sónicos, y más recientemente, por responsabilizar a Cuba del fracaso de la política de cambio de régimen expedito en Venezuela. Las posturas más agresivas contra Venezuela y Cuba se dinamizaron y agravaron progresivamente con la designación de John Bolton, un conocido guerrillero, en la función de Asesor de Seguridad Nacional desde abril de 2018 y entre sus más cercanos colaboradores, como el director para la región Mauricio Claver-Carone, un individuo con una amplia hoja de servicios en la actividad política contra Cuba en el Congreso de Estados Unidos.

Nuevas medidas para recrudecer el bloqueo, disminuir las remesas familiares y los viajes, y frenar los flujos financieros y las inversiones se asocian a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton. Esta decisión de Estados Unidos tiene varias aristas. Por una parte busca desestimular las inversiones extranjeras en Cuba —toda vez que Cuba ha declarado su necesidad para el desarrollo del país—, incrementar el riesgo país y con ello el costo del servicio de la deuda cubana y beneficiarse colateralmente

<sup>15</sup> Tracey Eaton, 2019. En: <http://cubamoneyproject.com/2019/03/03/ned/>.

del apoyo político de los cubanos demandantes por sus propiedades nacionalizadas en Cuba, lo que supone un rédito político interno para Trump, con independencia del curso específico de cada uno de estos procesos.

Desde la perspectiva interna de Cuba, las afectaciones económicas reales no se pueden evitar, aunque podrían estimular la eficiencia y acciones e iniciativas compensadoras, dentro y fuera del país, con otros negocios e inversionistas. Contrario a la lógica imperialista, las noticias sobre la activación del Título III de la Helms-Burton sirven de fortalecimiento de la unidad interna en defensa de los intereses del pueblo y el sistema que lo representa. En cualquier parte del mundo, un país agredido y amenazado, genera un apoyo mayor al gobierno y ello no es tomado en cuenta por los defensores de estas políticas intervencionistas en Estados Unidos.

La decisión del gobierno de poner en práctica el Título III y las correspondientes demandas también rompe el acuerdo con la Unión Europea de suspender su aplicación, como se había venido haciendo durante más de veinte años por distintos gobiernos, e incluso por esta misma administración al principio. Esto genera rechazo oficial de gobiernos de sus principales aliados, con amenazas de llevar el caso a un panel de la Organización Mundial de Comercio.

El 4 de junio de 2019 se dan a conocer mayores restricciones a los viajes a Cuba para reducir los ingresos que puedan aportar estas actividades. En los documentos del Departamento de Comercio y el Departamento del Tesoro, se informa sobre la cancelación de los viajes de los cruceros y la categoría de visitas educativas pueblo a pueblo para limitar aún más los tipos de viajes autorizados. Se justifica la cancelación de los nuevos viajes educativos pueblo a pueblo y las licencias para cruceros y otras embarcaciones y aviones privados que visitan la Isla. Se eliminan las licencias para intercambios educativos en la categoría pueblo a pueblo, aunque se permitirán aquellas ya activas. Los detalles y consecuencias específicas se sabrán después, pero puede reducirse el número de visitantes por esta vía en unos tres mil o cuatrocientos mil en un año. Los argumentos que acompañan la decisión insisten en el manido argumento ideológico de que «Cuba es un país comunista» y que «continúa desempeñando una función destabilizadora en el Hemisferio», dando apoyo a los gobiernos adversarios de Estados Unidos de Venezuela y Nicaragua.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> U.S. Department of the Treasury: «Treasury and Commerce implement Changes to Cuban Sanctions Rules», June 4<sup>th</sup>, 2019. En: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm700>.

## **El factor latinoamericano y caribeño**

La política de la administración Trump hacia América Latina y el Caribe, caracterizada en sentido general por un rechazo a la inmigración desde la región, ha abogado por la construcción de un muro y hasta la aplicación de tarifas a las importaciones desde México si el gobierno de ese país no controla el flujo migratorio antes de llegar a su frontera. Ello evidencia poca preocupación por temas de interés para la América Latina y el Caribe, como el desarrollo económico, la reducción de la pobreza, la integración comercial y el mejor acceso al mercado de Estados Unidos, generándose nerviosismo en los gobernantes latinoamericanos y caribeños, incluso de sus principales aliados. Retirada y renegociación de acuerdos de libre comercio, medidas proteccionistas, amenazas y ofensas hacia los nacionales de América Latina y el Caribe completan el cuadro poco alentador.

El ascenso conservador a la mayoría de los gobiernos en países de América Latina y el Caribe, con distintas artimañas, desde el golpe de Estado en 2009 en Honduras a Manuel Zelaya, la manipulación mediática y la judicialización en alianza con fuerzas de Estados Unidos, sumadas a las propias debilidades de los gobiernos de izquierda, centro izquierda y antineoliberales, presentan un balance de fuerzas regionales más favorable a Estados Unidos y sus aliados, respecto a la etapa comprendida entre 1998 y 2008.

La elección de gobiernos derechistas y neofascistas, como el de Mauricio Macri en Argentina, en 2015 y Jair Bolsonaro en Brasil, en 2018, tiene consecuencias regionales por ser dos de los países más grandes, lo que agregado a un segundo mandato de Sebastián Piñera en Chile, configuran un bloque de fuerzas agresivas y hostiles para Cuba. Estos gobiernos de derecha están acompañados por el activismo contrarrevolucionario del Secretario de la OEA Luis Almagro, y constituyen un contexto regional beneficioso para el propósito de Estados Unidos de recomponer su sistema de dominación en América Latina y el Caribe.

El escenario regional es muy complejo y difícil de caracterizar, pero no cabe duda que se agudiza la división y los peligros intervencionistas de Estados Unidos, si bien la elección de Andrés Manuel López Obrador en México marca un signo contrario, con una política exterior asentada en los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía y la no intromisión en los asuntos internos de los países.

El gobierno de Estados Unidos reconoce los cambios favorables a sus intereses operados en la correlación regional de fuerzas, cualesquiera sean las causas, los medios y los factores internos al interior de los países para la salida de gobiernos de «izquierda» de muy variada radicalidad, sustituidos ahora por gobiernos de derecha.

Este nuevo contexto regional lo identifican los estrategas estadounidenses con la actividad intervencionista del llamado Grupo de Lima, Prosur, la mutación en la orientación política de Mercosur y la Alianza del Pacífico. Todo ello lo consideran parte del marco alentador para restablecer la hegemonía de Estados Unidos en la región, una vez que hayan retrotraído los procesos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental Kimberly Breier, subrayó su confianza en «Una Nueva Era en las Américas» y se refiere precisamente a esos cambios favorables que le permiten avanzar sus intereses estratégicos en la región.<sup>17</sup>

### **El factor cubano y las percepciones políticas en EE.UU.**

Las elecciones en Cuba de los nuevos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y finalmente la votación de un nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros del país, concluida en 2018, no fue un acontecimiento menor para las relaciones bilaterales. Representó un proceso de rejuvenecimiento de los dirigentes políticos del país, que aunque ha ido progresivamente avanzando desde los niveles inferiores del gobierno, alcanza ahora su eslabón más alto. Los analistas en política internacional han presentado diversas interpretaciones sobre el significado y perspectivas del proceso, pero lo que resulta importante a este trabajo es que aparentemente ha sido considerado por los oficiales de inteligencia de Estados Unidos como un momento de vulnerabilidad interna de Cuba.

Si se acepta este supuesto, el mismo sería un factor favorable a que se mantuviera una política de presión, fuerza y recrudescimiento del bloqueo a Cuba en los marcos de una administración en Estados Unidos como la actual, esperando que pueda dar resultados con el nuevo gobierno, o se demuestre lo contrario.

<sup>17</sup> Kimberly Breier: *Assistant Secretary, Bureau of Western Hemisphere Affairs Remarks on «A New Era in the Americas» at the 2019 Concordia Americas Summit*, May 13, 2019, Bogotá, Colombia. En: <https://www.state.gov/remarks-on-a-new-era-in-the-americas-at-the-2019-concordia-americas-summit/>.

En condiciones extremas, y si fueran exitosas las medidas contra Cuba para colocar a la sociedad cubana en una profunda crisis, no se descartaría el empleo de la intervención militar directa, aunque ese no sea el escenario más probable por los altos costos que podría ocasionar y porque, no obstante el propio presidente estadounidense sea propenso a las amenazas, no parece tenga motivaciones de involucrarse en un conflicto bélico de grandes proporciones. Sin embargo, de forma inadvertida puede estallar una chispa que inicie la guerra y ello tendría enormes consecuencias para toda la región muy difíciles de predecir.

Por primera vez desde el triunfo de la revolución, el gobierno cubano no está encabezado por un líder histórico del proceso. Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha sido una figura preparada conscientemente para darle continuidad a las transformaciones estratégicas del sistema iniciadas desde por lo menos el año 2011, pero el nuevo gobierno lleva sobre sus hombros la responsabilidad de estabilizar la situación en las actuales difíciles circunstancias, y avanzar todo lo posible a pesar del creciente bloqueo.

Frente al estilo provocativo de Trump, la política cubana mantiene como siempre un rumbo basado en principios y valores. No cae en el juego de reaccionar en el mismo tono a las ofensas irrespetuosas. Plantea continuar las negociaciones bilaterales, cuando existan las condiciones, a partir del respeto mutuo a las diferencias, y construir un diálogo que busque elevar la cooperación en temas de interés común, hasta la exploración de soluciones de aquellos asuntos más complejos para alcanzar una convivencia civilizada para beneficio de las partes, los gobernantes y los pueblos.

En medio del retroceso general de las relaciones bilaterales ocurren acontecimientos alentadores en esferas muy importantes de la colaboración científica, como inversiones en una empresa mixta destinada a la producción de medicamentos de alta tecnología contra el cáncer, desarrollados por la avanzada biotecnología cubana. En septiembre de 2018 se conoció la formación de una empresa mixta enclavada en la Zona de Desarrollo del Mariel (ZDM) entre el Centro Roswell Park sobre el Cáncer de Búfalo, de New York, y el Centro de Inmunología Molecular de Cuba para desarrollar terapias contra el cáncer, a partir de los avances cubanos en este terreno, que eventualmente llegarían al mercado estadounidense. Otro ejemplo reciente ha ocurrido en la esfera del deporte, entre la organización de las grandes ligas (Major League

Baseball, MLB) de Estados Unidos, y la Federación Cubana de Béisbol (FCB), para que los peloteros cubanos de la FCB puedan jugar legalmente dentro de la organización de la MLB con sede en Estados Unidos. Bajo las presiones de los sectores anticubanos del gobierno estadounidense, la OFAC reinterpreto el acuerdo que inicialmente había aceptado y lo canceló, con el consabido pretexto de que la FCB era una dependencia del gobierno cubano y no una entidad independiente dedicada a los fines del desarrollo de ese deporte en nuestro país.

Ello deja el acuerdo considerado por las partes (MLB y FCB) como favorable a la espera de reinterpretaciones en condiciones políticas óptimas dentro de las visiones estratégicas y percepciones del gobierno estadounidense sobre Cuba.

## Conclusiones

El escenario más probable dadas las circunstancias actuales en Estados Unidos, Cuba y el contexto de la correlación regional de fuerzas, al menos hasta las elecciones de 2020, parece ser cuando menos un estancamiento de las relaciones e incluso la continuación del retroceso, de acuerdo a las intenciones de los altos funcionarios de política exterior encargados. Las variables claves son la evolución de la propia situación cubana y cualquier desenlace en el escenario de Venezuela.

La lista negra de empresas cubanas excluidas de todo tipo de relaciones con Estados Unidos y que pueden ser objeto de demandas en cortes de ese país mediante el Título III de la Helms-Burton puede seguir incrementándose; cabe esperar nuevas multas y sanciones por tener relaciones financieras y económicas con Cuba y no se descarta que se restablezca el programa migratorio para favorecer el robo de médicos cubanos en colaboración con otros países.

La OFAC introduce nuevas restricciones a los viajes y cualquier intercambio comercial que genere ingresos a la economía cubana y pueda ser afectado por la política de Estados Unidos se mantiene en el menú de opciones de la política contra Cuba. Ya a principios de junio se cancelaron los viajes de barcos de crucero y aeronaves privadas para estancias temporales, y se eliminaron las licencias para los viajes educativos grupales de la política pueblo a pueblo.

Sin embargo, se deben ir acumulando fuerzas y develarse incentivos a favor de un nuevo ajuste progresivo en la política de Estado Unidos

hacia Cuba, asumiendo el avance de procesos y acontecimientos que pudieran consolidarse como tendencias contrapuestas a las actuales. En realidad, no ha sucedido un cambio interno en Cuba que justifique el retroceso de las relaciones y la situación socioeconómica. A pesar del aumento de las sanciones y medidas para quebrantar la economía debe mostrar resistencia e incluso apreciarse algunos avances en algunos sectores. El contexto internacional para Cuba es favorable con China, Rusia y otros países, incluso algunos aliados de Estados Unidos que no están dispuestos a contribuir con el bloqueo e incluso aprecian la actual política como una oportunidad para consolidar sus relaciones con la Isla en medio de los retos.

Internacionalmente la activación del Título III ha generado el rechazo político de gobiernos aliados de Estados Unidos. Países de la Unión Europea, como España, o incluso Canadá han reiterado su rechazo a esa ley, así como a su ilegalidad. Al mismo tiempo han señalado la disposición de apoyar a sus inversionistas en las demandas que pudieran enfrentar.

En la práctica, tal proceso es ilegal de acuerdo al derecho internacional y podría ser nuevamente objeto de demanda en el marco de la Organización Mundial de Comercio.

Las demandas que se van presentando en Estados Unidos contra empresas cubanas no tienen efecto directo. La Constitución cubana, las leyes sobre inversiones extranjeras y en particular la ley cubana actúa en su defensa y sanciona a los que se incorporen a esos procedimientos.

El objetivo de la aplicación de ese título va dirigido a frenar el flujo de inversiones hacia Cuba y a incrementar el riesgo país y por lo tanto el costo de los créditos que se puedan asumir. Aunque esas medidas sin duda van a perjudicar adicionalmente a la economía cubana y agravar en alguna medida la situación socioeconómica del pueblo, no cabe esperar una situación que haga colapsar el gobierno o generar el tan ansiado por Estados Unidos «cambio de régimen». El incremento del bloqueo, las sanciones de todo tipo y las medidas para reducir los intercambios, disminuir las remesas, reducir los viajes y los aportes del sector del turismo perjudican desproporcionadamente al pueblo, incluyendo la actividad de negocios y empleo del sector privado, frenan los ritmos de crecimiento y desarrollo del país, pero no logran hacerlo colapsar.

Como factores que deben favorecer el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en los próximos años, puede delinearse un escenario que supondría un cambio favorable a la política estadounidense de *engagement* con Cuba, y que privilegie el llamado poder blando, tendencia que se vería fortalecida si las condiciones socioeconómicas y políticas en la Isla se dinamizan y se consolida su estabilidad.

De momento el escenario cubano de 2018 y 2019 no es de crisis, pero tampoco se aprecia el dinamismo económico necesario y puede hablarse de un estancamiento. Tampoco puede descartarse una crisis económica en 2020, aunque su gravedad sea menor que la ocurrida a principios de la década de 1990.

Aunque el restablecimiento del servicio de la deuda potencialmente favorece la posibilidad de recibir nuevo financiamiento, de momento hay que pagar, y los ingresos por exportación son insuficientes para cubrir todas las necesidades. El balance del sector externo es muy tenso. Mantener una cuenta corriente del balance de pagos positivo conlleva una mayor exigencia y eficiencia económica. Por esa razón el gobierno ha llamado a un esfuerzo superior en las exportaciones y restringir las importaciones a los rubros imprescindibles.

Se ha calculado que el bloqueo económico y financiero ha representado pérdidas por ingresos del país superiores a los 4 mil millones de dólares en 2018 y la cifra para 2019 debe ser superior. Asimismo, se considera oficialmente que el comportamiento de la economía en 2019 mantendrá esas difíciles condiciones, aunque con un crecimiento en el torno al 1,5% del Producto Interno Bruto. No obstante, el resultado final puede ser menor.

En el terreno político el escenario presenta importantes desafíos, el relevo en el liderazgo político apenas ha comenzado, y el país realizó una reforma constitucional, que fue sometida a debate nacional y recibió muchos criterios en todas direcciones. La misma fue probada mediante referendo, lo que significó un respaldo a la institucionalidad política y al sistema socialista cubano.

Las respuestas del gobierno cubano ante las agresiones verbales o ante determinadas decisiones políticas contra Cuba o sus aliados han sido basadas en principios reconocidos del derecho internacional, rechazando las injerencias del gobierno de Estados Unidos con firmeza y dignidad, pero sin caer en la trampa del discurso incendiario, violento



y ofensivo. En esos términos se ha reiterado la disposición de abordar todos los asuntos de la agenda bilateral por la vía diplomática. Al mismo tiempo se ha rechazado las agresiones contra Venezuela y manifestado el apoyo cubano al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, rechazándose abiertamente las acciones golpistas contra su gobierno.

En la continuidad y el cambio de la política, las percepciones desempeñan una función fundamental en el curso de las relaciones bilaterales. Las mismas se basan en apreciaciones del país emisor sobre los efectos o resultados en el país receptor y lo que cabe esperar de ellas en un plazo determinado, así como los instrumentos más adecuados para cumplir sus objetivos. Aunque los factores internos son un componente principal en la política exterior estadounidense, cada vez se aprecia una interrelación más dinámica e intensa entre los intereses internos en la formación de la política exterior y los del contexto internacional, tanto a escala regional y subregional como mundial. El caso de la política de Estados Unidos hacia Cuba no es una excepción. Hasta las elecciones de 2020 la política de Estados Unidos hacia Cuba será influida por las evaluaciones que se hagan al respecto por parte de los asesores de Trump, que pueden cambiar, dado las discrepancias con el Presidente, como ha ocurrido con bastante frecuencia.

Como ha demostrado la historia reciente, las principales fuerzas y condiciones que favorecieron las decisiones anunciadas a finales del 2014 respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, tienen un referente fundamental en la situación interna de Cuba y el momento político interno por el que atravesaba la administración demócrata de Obama en sus dos últimos años en la Casa Blanca en el contexto regional y mundial. Dado que se asume que los componentes esenciales del conflicto entre los dos países no desaparecen, tampoco los intereses estratégicos y objetivos de las partes involucradas; se modifica el discurso de la política estadounidense, el marco estratégico o de Gran política en que se expresa, la proporción en los distintos instrumentos empleados, y el modo en que se despliega su política hacia Cuba en los distintos planos, bilateral, regional y global.

El diseño de la política de Estados Unidos hacia Cuba conserva los elementos del enfoque dual; a saber, la llamada política de dos carriles incorporados desde la aprobación de las principales leyes anticubanas: Torricelli (1992) y Helms Burton (1996). En tal sentido domina en la

tendencia actual una continuidad ajustada hacia un aumento de los instrumentos de fuerza, el llamado poder duro, sobre la comunicación, la negociación y el diálogo.

Como elemento novedoso, la política se encuadra en un enfoque estratégico regional y global, que coloca a la política hacia Cuba en una dimensión regional y en el marco de una especie de nueva guerra fría, en que una llamada «Troika de Tiranías», compuesta por Venezuela, Cuba y Nicaragua son prioridad en un enfoque articulado por las relaciones entre estos países y su incidencia en el plano regional. Sin embargo, ello no debe conducir al error de pensar que el poder inteligente ha sido eliminado totalmente, sino que se acomoda en la retaguardia a la sombra del discurso agresivo de Trump.

El cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos en 2018 le permitió a los demócratas recuperar la Cámara de Representantes, pero no el Senado. Ello condiciona el ajuste de la política de Estados Unidos hacia Cuba por un Congreso dividido, por lo que la posición del Ejecutivo y Trump, y los agresivos miembros de su equipo de política exterior, como el Secretario de Estado Mike Pence y el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, resultan decisivos y claramente desfavorables a un mejoramiento de las relaciones con Cuba. Una ruptura o al menos fractura o diferencia entre las interpretaciones de Trump, Bolton y Pence, en correspondencia con la evolución de la situación con Venezuela, o las tensiones en Irán, pueden ajustar esa política y colocarla en un segundo plano en las prioridades globales. El transcurso del tiempo, los resultados de la política y las consecuencias estimadas de las mismas en términos electorales pueden modificar la, aunque manteniendo las direcciones fundamentales observadas hasta mediados de 2019.

Dada la complejidad de los problemas observados en el contexto interno, tanto de Estados Unidos como de Cuba, la evolución del golpe de Estado continuado contra Venezuela, así como otros importantes desafíos para el gobierno estadounidense en otras latitudes y el balance regional de fuerzas, se espera la continuidad del conflicto bilateral a los niveles actuales, e incluso su empeoramiento, con pocos vaivenes, hasta después de las elecciones presidenciales del 2020.

# Aprender de un progresismo al siguiente

Nils Castro Herrera

*nils.castro@gmail.com*

Doctor en Letras.

Politólogo y escritor panameño

## **Resumen:**

Al final de siglo XX, la pasada ofensiva progresista vino tras el desplome del socialismo y el marxismo soviéticos, y del fracaso del auge neoliberal. Una crisis político ideológica coincidió con un alza de la decepción política y el descontento social. Agrupaciones progresistas ganaron elecciones y tomaron del gobierno (no el poder) en varios países y aumentaron influencia en otros. Millones de latinoamericanos mejoraron sus condiciones de vida y la región recuperó soberanía y autodeterminación.

Pero la gran burguesía y la derecha conservaron su poder económico y mediático, y el respaldo imperialista; renovó su discurso y, como era de prever, orquestaron su contraofensiva. Esta tuvo más éxito donde los gobiernos progresistas fueron más vulnerables. No vale achacar los reveses del progresismo solo al poder mediático y la perfidia del capital y las derechas. Es necesario y oportuno hacer asimismo un examen crítico de los errores y falencias de los liderazgos progresistas, que las derechas supieron explotar.

Ahora los gobiernos de derecha vuelven a repetir pasados abusos y errores, y a provocar grandes disgustos sociales. Se vislumbra otra próxima ofensiva progresista, a que toca prever y articular. Los pasados 15 años de experiencia progresistas ofrecen abundante material para un balance autocrítico de sus falencias, a fin de erradicar su posible

repetición y consolidar los aciertos que la pasada oleada progresista también tuvo. El artículo hace una revisión panorámica de los errores más característicos, y de las propuestas que podrán contribuir a que esa próxima ofensiva progresista sea más eficaz, ambiciosa y sostenible.

**Palabras clave:**

Crisis ideológica, ofensiva neoconservadora, fracasos neoliberales, progresismo, gobierno, poder, nueva derecha, contraofensiva reaccionaria, errores, deficiencias, vulnerabilidades del progresismo, autocrítica, nuevos disgustos sociales, nueva oportunidad progresista, pensar nuevos objetivos, preparar nuevas fuerzas adicionales.

**Abstract:**

*At the end of 20th century, the last progressive offensive came after the collapse of the sovietic socialism and marxism, and the failure of the neoliberal boom. A politico ideological crisis coincided with a rise in social unrest and political disappointment. Progressive groups won elections and took Government (not power) in several countries and increased influence in others. Millions of Latin Americans improved their living conditions and the region regained sovereignty and self-determination.*

*But the big bourgeoisie and the right retained its economic power and media, and the imperialist backing; they renewed their speech and, as expected, they orchestrated a large counter-offensive. This was more successful where the progressive Governments were most vulnerable. It is not worth to blame the setbacks of progressivism only to the media and the right and the perfidy of the capital. It is necessary and appropriate to also make a critical examination of errors and shortcomings of progressive leadership, the rights were able to exploit.*

*Now the Governments of right are repeating again past abuses and errors, and to cause great social distress. Another upcoming progressive offensive, which is forecast and articulate in sight. 15 years of progressive experience offer abundant material for a self-critical assessment of its flaws, in order to eradicate its possible recurrence and consolidate the successes the last progressive wave also had. This article makes a panoramic review of the most typical errors and proposals, that may contribute to this next progressive offensive to be more effective, ambitious and sustainable.*

**Key words:**

*Ideological crisis, neoconservative counter-offensive, neoliberal fiascos, progressivism, Government, power, new right, reactionary counteroffensive, errors, deficiencies, vulnerabilities of progressivism, self-criticism, new social trouble, new progressive opportunity, thinking new objectives, prepare new additional forces.*

Los acontecimientos pronto han demostrado que lo que hoy llamamos *progresismo*—fenómeno político que, según las particularidades de cada país, a inicios de este siglo brotó en varias latitudes de América Latina— no fue un simple «ciclo» ni ha concluido. Y que tampoco fue mero efecto de un cambio en la cotización de las materias primas. La evolución de nuestros pueblos es más compleja que eso; su comportamiento político no oscila según los vaivenes del comercio mundial, pues las relaciones entre economía y sociedad no son tan pueriles.

Como recordamos, al inicio los años 90 del siglo XX, la acometida neoconservadora promovida por Margaret Thatcher y Ronald Reagan se potenció con el derrumbe soviético. Eso, además de forzar un viraje de las políticas económicas que prevalecían, impuso un *tsunami* ideológico que unas izquierdas divididas y perplejas mal pudieron enfrentar. No obstante, ni esas políticas ni los efectos culturales de aquel *tsunami* han finalizado. La crisis global que emergió en 2008 desenmascaró al neoliberalismo, pero sin que todavía hayamos creado las propuestas suficientes para remplazarlo.

Con ello, en menos de diez años, las prácticas neoliberales ya habían causado daños e inconformidades populares suficientes para levantar protestas y movimientos políticos que dieron pie a una significativa marea progresista. Este fenómeno, más expresivo de un vasto repudio que de nuevos proyectos factibles, animó los primeros tres lustros del siglo XXI, incluso allá donde no pudo elegir gobiernos. Y donde sí lo consiguió, además de realizar destacados avances contra la pobreza y la inequidad, produjo significativos progresos de la autodeterminación nacional y la solidaridad en nuestros países.

Obviamente, al lograrlo aún en tiempos de crisis de las izquierdas y restauración de la democracia liberal, no contaban todavía con bases sociales, político culturales y organizativas tan desarrolladas como para emprender *revoluciones* factibles y sustentables. Caso por caso, eso

deparó oportunidades para acceder al gobierno, más que para tomar el poder. Y por el lado opuesto, las élites locales, aunque forzadas a ceder la administración del gobierno, pudieron hacerlo sin perder sus recursos económicos fundamentales.

Aun así, durante ese período millones de latinoamericanos salieron de la marginalidad y adquirieron ciudadanía, empleo, educación y salud, y sus naciones alcanzaron mayor dignidad. Patrias y gentes pudieron ensayar nuevas expectativas. Incluso sin revoluciones propiamente dichas, esa era una agenda de izquierda. Fue peor que ingenuo suponer que los progresos sociales y políticos alcanzados en esos años pudieran repetirse sin causar, a su vez, una fuerte contra ofensiva del imperialismo y de las élites de cada país.

Con sobrados respaldos económicos, socioculturales y mediáticos, la derecha tuvo condiciones y tiempo para recomponer objetivos, reactualizar métodos y reconstruir imagen, ya no solo para volver a Palacio a recuperar hegemonía, sino para emprender un *roll back* más ambicioso: revertirlas conquistas populares cedidas desde los años 50 a la fecha. De la estructuración y fines de ese contraataque ya me ocupé entonces.<sup>1</sup>

### **¿Quién nos hace vulnerables?**

Pero no todos los éxitos después conseguidos por la contraofensiva reaccionaria se pueden achacar enseguida a las artimañas y al poder financiero y mediático de las derechas, ni al patrocinio y la coordinación del imperialismo. Estos son factores reales, pero no suficientes para explicar sus éxitos. Los reveses de ese progresismo deben atribuirse asimismo a las permisividades, omisiones y errores de sus propios liderazgos y gobiernos, que con frecuencia minusvaloraron la indispensable coparticipación crítica de sus partidos y de las organizaciones

<sup>1</sup> Consultar, por ejemplo: «¿Quién es la «nueva» derecha?», en *ALAI* del 14-4-2009; «Una coyuntura liberadora... ¿y después?», en *Rebelión* del 23-7-2009; «Una liberación por completar», en *ALAI* del 17-8-2009; *La brecha por llenar*, premio del concurso Pensar a contracorriente, La Habana, febrero de 2010; «El reto de las izquierdas latinoamericanas», en *Rebelión* del 27-4-2012; «¿Por qué y para qué son progresistas estos gobiernos?», en *Rebelión* del 20-7-2012; «Las disyuntivas progresistas y la contraofensiva de las derechas», en *Rebelión* 1-12-2014; «La contraofensiva de las élites dominantes», en *ALAI* del 2-12-2013; «La contraofensiva de las derechas y las opciones de las izquierdas», en *Rebelión* del 5-11-2014; «Combatir errores y sumar nuevas fuerzas», en *ALAI* del 24-10-2016 y «Convertir indignación social en militancia política», en *ALAI* del 14-11-2016.

populares, y relegaron el diálogo y el acuerdo con las comunidades locales.

Poco útil es atribuir el consiguiente reflujo del apoyo popular tan solo al poder económico, la vileza moral y el peso de los medios de comunicación de la clase dominante, y el respaldo de sus mentores foráneos: estos recursos han sido tan eficaces como se lo facilitan las deficiencias de los liderazgos que con esas fallas y errores los hicieron más vulnerables.

Entre estos, los errores en política económica. El primero, característico de los procesos más radicales: apelar a un rápido incremento del gasto social y del consumo popular para resolver sus principales urgencias, con una celeridad muy superior al crecimiento de la producción y la productividad, así como de la mejora de la eficiencia institucional y la capacidad de obtener nuevos recursos económicos, con las conocidas consecuencias de desabastecimiento, deuda y pérdida del valor efectivo de los salarios. Acelerar el desarrollo nacional — el de las fuerzas productivas— es costoso; exige formar recursos humanos, asimilar tecnologías, crear infraestructuras. Eso exige exportar recursos valiosos para adquirir insumos caros, en mejores condiciones de intercambio, o contar con potente ayuda foránea.

Sin embargo, en la presente coyuntura, el error de política económica que los críticos destacan con mayor aspereza es el de haber justificado o hasta propiciado el extractivismo. Se responsabiliza a los gobiernos progresistas de valerse de las empresas extractivas —mineras, agrícolas u otras— como fuentes de ingresos para resolver necesidades sociales e inversiones en infraestructura y desarrollo. Y se los acusa de hacerlo sin restringir sus actividades con las necesarias fiscalizaciones, penalidades y compensaciones por los daños socioambientales que generen.

No obstante, la crítica al extractivismo, tal como algunos articulistas suelen auparla, también puede exhibir la frivolidad de una moda y conducirla a disparates. La extracción de materias o productos sin elaborar es una actividad común a muchas economías de distinto signo. La primera cuestión es si la política económica de cada país busca incrementar el valor agregado de esos productos mediante su transformación por empresas y trabajadores nacionales, y conforma a objetivos y normas nacionales, o si favorece un saqueo colonial o neocolonial que exporta esos recursos primarios para procesarlos en el extranjero.

¿Esa extracción contribuye a desarrollar y valorizar la respectiva economía y sociedad nacionales, o solo es un modo de explotar su mano de obra barata y reproducir el subdesarrollo del país? Es decir, si las autoridades nacionales vigilan que la previsión, regulación y control de las actividades extractivas se conceden y efectúan garantizando los menores daños ambientales y su mejor compensación y restauración, así como la debida protección y provecho para las comunidades aledañas y los sectores nacionales afectados.

Esta exigencia siempre ha estado entre las principales reivindicaciones de los movimientos de liberación nacional y de las izquierdas en general. Con una conocida excepción: mientras prevaleció el modelo soviético —incluida su variante maoísta— primó el afán por forzar a toda costa el crecimiento económico, con devastadoras consecuencias en materia ambiental, hasta el colapso de ese modelo. Pero, aun así, el estalinismo no fue un pecador solitario, puesto que ni el liberalismo clásico ni el neoliberalismo han sido inocentes en esa misma práctica, que prosiguen por motivos mucho peores.

De hecho, nada justifica el dislate de atribuirle al actual progresismo una índole fatalmente extractivista, ni alegar que la izquierda y el progresismo son diferentes porque la primera se opone a esa práctica, mientras que cometerla es un atributo constitutivo del progresismo. Como tampoco el simplismo economicista de suponer que el progresismo obedeció a un ascenso del precio internacional de las *commodities* y su supuesta extinción a que este bajó; *ergo*, que no resurgirá hasta que estas vuelvan a encarecerse.

Antes bien, durante gran parte del siglo XX y lo que va del XXI, el progresismo —como noción incluyente vinculada a las luchas por la liberación nacional y el desarrollo social— ha sido la manifestación más visible de las izquierdas latinoamericanas. Y ahora, una vez depurado de las deficiencias de su pasada ofensiva regional, hay sobrados motivos para prever que volverá a serlo. Esa anterior experiencia no fue la primera ni la única en que las izquierdas han cometido errores.

Para evitar que estos se repitan, una de las mejores aportaciones de sus críticos será idear mejores modos de que los próximos gobiernos progresistas o revolucionarios puedan resolver el imperativo de financiar su lucha contra el subdesarrollo, y solucionar necesidades populares, sin recurrir a formas nocivas de obtener los recursos indispensables para conseguirlo.



Dado que consolidar un gobierno nacional liberador, y proyectar sus posibilidades hacia objetivos de mayor alcance, exige tanto superar el atraso como asegurar el desarrollo humano y material de las fuerzas productivas, Fidel Castro dedicó al tema gran parte de su pensamiento. Eso incluyó proponer y debatir estrategias y opciones de combate al subdesarrollo, así como formas de concertación y cooperación entre los países del Tercer Mundo para cambiar las injustas condiciones del comercio y el financiamiento internacionales, en defensa de los intereses de sus pueblos, incluso sin que las diferencias de régimen político fueran obstáculo para colaborar por ese objetivo común.

En el caso concreto de Cuba, ese reto, desde el primer momento, fue extraordinariamente dificultado por el bloqueo estadounidense. En la primera época de la Revolución, el respaldo económico y militar soviético fue importantísimo para resistir y abrirse camino. Pero actualmente los procesos liberadores, progresistas o revolucionarios de otros países no pueden contar con aquel tipo de solidaridad. Así, su capacidad real para adquirir recursos tecnológicos y económicos para el desarrollo ahora es una dificultad adicional de sus posibilidades reales, y tan grande, que sus críticos más severos eluden mencionarla.

### **De nueva cuenta, la mesa está servida**

Mientras los pueblos viven su historia no para de producirse, y en estos tiempos el lapso entre sus sucesivos momentos se acorta. La anterior ofensiva y hegemonía conservadora duró decenios, la actual no acaba de ocurrir y ya empezó a desintegrarse. Antes, el aguante popular demoró unas décadas en agotarse; ahora en Argentina, Brasil o Chile, nuestros pueblos demoran menos en discernir y protestar. Si ponemos atención, ya se oye bullir la próxima ofensiva progresista, sin que la presente ola reaccionaria haya concluido sus propósitos. ¿Pero estamos listos para comprender e inspirar a esa próxima ofensiva?

Para lograrlo, la experiencia de los tres lustros progresistas con los que el siglo XXI latinoamericano se inició debe discutirse examinando todas sus aristas, y es preciso hacerlo con autocrítica responsabilidad. Más que para imputar responsabilidades personales, para sacar conclusiones sustantivas sobre cómo prever, castigar y erradicar tales deficiencias, e imprimirle más robusta y eficaz consistencia ética, política y estratégica a nuestra participación en la próxima ofensiva popular,

no apenas para agregar más diagnósticos, sino enfocándose en proponer mejores opciones para vencer los anteriores problemas y los que ahora quepa prever.

Entre otras, hay fallas que ya es habitual señalar pero que reclaman mayor análisis. Una, la insuficiencia y hasta el abandono del trabajo político y organizativo que siempre debe sustanciar cada gestión administrativa de las izquierdas, no solo en el ámbito laboral y sectorial, sino igualmente en el barrial y comunitario, *que es donde habitan, conviven y votan los pobres y sus familias.*

Otra, el acomodamiento y hasta la permisividad con los vicios del poder burocrático, que llegan al extremo de admitir indicios de corrupción en algunos dirigentes devenidos en funcionarios, desacreditando así la calidad moral de la organización y del proceso políticos que ellos representan. Y aún más, reducir unos partidos y movimientos surgidos de la rebeldía, la lucha y la creatividad política, a la mera condición de aparatos reelectorales. Incluso hasta hacerlos «comprender» arreglos con operadores de la política tradicional, a despecho de los principios cuya práctica nos hace gente de izquierda y nos diferencia como tales.

La corrupción es un vicio políticamente asimétrico: salvo ocasionales excesos, en la derecha es parte de una vieja cultura que se da por sentada. Pero a la izquierda se la elige para combatirla, y tolerarla entre sus filas constituye una afrenta que pone en entredicho los demás valores que la gente le reconoce a los dirigentes de una organización progresista. En la izquierda, sin importar la magnitud del delito, sus implicaciones políticas le dan trascendencia y, aunque el castigo sea mayor, el conjunto del liderazgo demora en recuperar el necesario liderazgo moral.

Asimismo debe condenarse la bobada política de suponer que, si un gobierno progresista cumple su deber elemental de solucionar demandas populares, sus beneficiarios automáticamente le concederán una interminable gratitud de electores cautivos. Resolver los problemas de la gente no es un favor, sino la misión de los funcionarios. Es idiota suponer que cumplirla supone un contrato electoral: si el voto popular echó a la anterior administración porque esa incumplía sus deberes, esto no conlleva que los electores pasan a creerse deudores de quien sí los realice.

Al revés, son los funcionarios —mucho más si asumen la tarea a título de progresistas o revolucionarios— quienes a diario deben volver a ganar la confianza ciudadana. En política electoral, son los funcionarios quienes siempre están en deuda, pues el pueblo cada vez tendrá nuevas demandas pendientes. *Los electores no votan para atrás sino hacia adelante*: no sufragan por lo que ya se resolvió, sino fiándole cierta confianza temporal a quien se compromete a solucionar lo que falte. Quien recibe ese voto asume el deber de honrar este compromiso para seguir mereciendo la confianza.

Aun así, dicho compromiso no concluye al entregar soluciones, sino al *darles sentido perdurable*. Su adecuada interpretación, uso y mantenimiento deben reproducirse más allá del acto de entrega. Lo que también requiere promoverla conciencia y organización que aseguren un buen aprovechamiento y preservación de lo recibido. La entrega solo culmina cuando sus beneficiarios se asuman como sus responsables y cuidadores. Esa conciencia y organización participativa —y no una vasalla gratitud— es lo que da significado político a los beneficios entregados.

Uno se hace revolucionario porque se indigna frente a una realidad injusta y decide contribuir a cambiarla. Por consiguiente, la integridad ética es la principal exigencia de la condición de revolucionario. Aún más que la astucia o la habilidad de maniobra, que algunas veces también han servido para encubrir al oportunismo o la pérdida de integridad moral.

El proyecto revolucionario es estratégico, no coyuntural. En este sentido, en ocasiones más vale perder solos que ganar mal acompañados, si con esto robustecemos la identidad, el ascendiente político y el liderazgo sociocultural que deben diferenciar a la opción revolucionaria.

Ahora, mientras los loros bizantinos olvidan los procesos de emancipación nacional y popular, y especulan sobre «ciclos», progresismos, reformas o revolución, otra ola de protestas sociales ha empezado a rodar. Los disparates de Macri, Bolsonaro, Piñera y sus similares mesoamericanos vuelven a exhibir las incompetencias, fracasos y abusos de las viejas o «nuevas» derechas como supuesta alternativa.

Como señala Joao Pedro Stedile, aunque Bolsonaro use todo el tiempo toda la represión y el amedrentamiento, y libere todas las fuerzas reaccionarias presentes en la sociedad, para dar toda la libertad al capital

con un programa neoliberal, esa opción es inviable, no da cohesión social y no resuelve los problemas concretos de la población. Eso, continúa Stedile, aunque complazca a los bancos agrava las contradicciones y genera un caos social que lleva a los movimientos sociales a retomar la ofensiva.<sup>2</sup>

Los despropósitos neoliberales causan inconformidades populares que, a su vez, demandan liderazgos y proyectos confiables. La sólida votación obtenida por Gustavo Petro, las expectativas que ya levantan frentes como Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo y una izquierda reencauzada, así como la aplastante victoria electoral de López Obrador, están entre sus nuevas manifestaciones palpables.

Al propio tiempo, en Washington DC los dislates de un paquidermo arrogante evidencian que el sistema de dominación imperial continúa perdiendo capacidad para proveerse de visión, eficacia y liderazgos estratégicos.

Así pues, *de nueva cuenta* la mesa de las condiciones objetivas suficientes para comenzar *otra* ofensiva progresista está servida. Una ofensiva que no solo es de segunda generación sino distinta, mejor dotada de experiencias, ideas y expectativas. Con lo cual el asunto ya no radica en si los procesos progresistas, de liberación nacional o con vocación socialista han amainado o concluyeron, sino en cómo corresponde liderar sus próximas aspiraciones, para que en las nuevas circunstancias su acometida sea más abarcadora y asuma objetivos sostenibles de mayor alcance.

¿Cuánto hemos aprendido de nuestra pasada experiencia? ¿Cómo actualizar, compartir e instrumentar sus lecciones en las actuales circunstancias? La anterior ofensiva progresista brotó en unas condiciones socioculturales que las izquierdas afrontaron no solo fragmentadas, sino también aún sin madurar una comprensión de las causas de la crisis del modelo soviético, ni de sus propios puntales políticos e ideológicos, como tampoco del cambio de las circunstancias internacionales, ni de las opciones que estas podían deparar.

En aquella coyuntura fue posible captar el voto, más que la adhesión, de unos pueblos exasperados, pero aún cohibidos, por la sombra de la hegemonía imperial y las recientes dictaduras. Y por eso, culturalmente inhibidos de aspirar a mayores expectativas, aún percibidas

<sup>2</sup> Consultar: Joao Pedro Stedile: «Tenemos que retomar el trabajo de bases», *Brasil de Fato*, 30 de octubre de 2018.

como riesgosas. En tales condiciones, ese crédito electoral posibilitaba acceder al gobierno, no al poder.<sup>3</sup>

En contraste hoy, en vísperas de otra ofensiva progresista, toca asumir dos misiones previas, ante una situación que ya no es la misma. Por una parte, colaborar con amplia parte del pueblo —con la diversidad de sus comunidades concretas— para superar rezagos político culturales y organizativos, tanto en el sector laboral como en sus asentamientos locales. Por otra, ofrecer nuestras propuestas como parte del esfuerzo para superar la fragmentación conceptual y política de las izquierdas. Es decir, promoviendo vías de diálogo y cooperación para juntar fuerzas y hacerle camino a nuevas posibilidades, no solo proponiéndose ir más lejos, sino articulando las fuerzas necesarias para lograrlo.<sup>4</sup>

Es malsano ignorar la pluralidad que dinamiza a cada pueblo y clase social embrollando el concepto de unidad con el de su acepción monolítica. Como asimismo equiparara los sujetos políticos y sus vanguardias con escuadrones militares, extrapolando una metáfora didáctica de tiempos de la guerra civil en Rusia. Es indispensable apreciar las diversidades, una vez que la unidad es un proceso que se construye entre diferentes, dado que sin diferencias no haría falta construirla.

Mientras se dejan alargar discrepancias, las contraposiciones resaltan sobre todo lo que haya en común. Sin embargo, entre corrientes de izquierda y progresistas la mayoría de las veces será más —y de mayor rango estratégico— lo que ellas comparten, aunque se deje de reconocer. Esto resalta lo acertado de la propuesta de empezar por poner sobre la mesa los respectivos proyectos y hallar en qué campos coinciden —con lo cual no pocos prejuicios irán descartándose—.

<sup>3</sup> Una parte de las izquierdas entró al Órgano Ejecutivo, al elegir Presidente sin ganar la mayoría en los comicios parlamentarios, estatales y municipales, ni influencia en el Órgano Judicial, tal como unos 30 años antes ya había ocurrido con Salvador Allende y la Unidad Popular.

<sup>4</sup> Entre las izquierdas todavía pesa una mala forma de discutir, en la que el debate no busca desarrollar ideas sino descalificar al contrincante. Hace falta diferenciar tiempos y objetivos. Marx contra Proudhon, Engels ante Dühring o Lenin frente a Kautsky respondieron a otra circunstancia: la de tres polemistas geniales en el momento de zanjar puntos críticos de una decisión estratégica. Su ejemplo no vale para dirimir controversias tácticas, ni mucho menos para suplir la falta de mayores argumentos. Lamentablemente, luego del siglo XIX —y en particular en períodos de descomposición política como el estalinismo, el maoísmo y sus secuelas— no faltan publicistas más dados a denigrar a posibles interlocutores que a generar conocimiento y propiciar cooperaciones.

No es necesario lograr unidad en cada uno de los aspectos conceptuales y propuestas, sino allí donde ya es posible coordinar colaboraciones. Como proceso que es, la unidad *se construye haciendo camino al andar*, pues al propiciar acercamientos donde ya cabe cooperar, se amplían las posibilidades de coincidir en otras áreas y perspectivas. La fertilidad de la estrategia *frenteamplista* consiste en que se empieza por lo mínimo esencial y las convergencias crecen en tanto se lucha en común por objetivos que lo ameriten, sin que las diferencias obstruyan la marcha. Lo que asimismo es prueba de buena fe.

### **Para abrir camino**

En tiempos en que prevalecía el marxismo dogmático, una de las primeras lecciones de Fidel Castro y la Revolución cubana fue sobre la efectividad de la acción y la experiencia conjuntas como medio para producir organización y pensamiento compartidos. El Movimiento que salió a la luz el 26 de julio de 1953, se inició tras convocar a jóvenes honestos y patrióticos —martianos— con base en una condición, sin detenerse a discriminar su pluralidad de ideas políticas y orígenes sociales. La condición moral mínima de estar dispuestos a tomar las armas contra la dictadura para erradicar la política corrupta, hacer efectiva la independencia nacional y erigir una democracia socialmente comprometida. Propuesta que poco después sería argumentada en *La historia me absolverá*, un proyecto de liberación y desarrollo nacionales. Desde esa condición inicial, combatir juntos y compartir las vicisitudes populares sustentó la formación ideológica de esos jóvenes y de la mayor parte del pueblo cubano, más que cualquier evangelio doctrinario.

Doctos analistas hoy calificarían ese proyecto de reformista, desarrollista, socialdemócrata o progresista, dictaminando que no pasa de proponer un adcentamiento del capitalismo, no una propuesta revolucionaria. Pero en su condición de proyecto de liberación nacional, ese del Moncada se fundó en poderosas convicciones patrióticas y de solidaridad social, y tuvo gran capacidad de convocatoria no solo por sus argumentos, sino también por el ejemplo cívico de sus militantes. Proyecto que, a partir de 1959, avivado por su rápida ejecución y por el hostigamiento norteamericano, en vísperas de Playa Girón hizo posible darle piso popular efectivo a la vocación socialista emanada de su matriz nacional liberadora y desarrollista.

Esa experiencia debe recordarse ante los encabezados con que algunos hoy pontifican sobre el progresismo latinoamericano. Califican este fenómeno latinoamericano y actual apelando a clichés estáticos y excluyentes como los de *reforma* o *revolución*, o de intención *antineoliberal* o *anticapitalista*, que reducen el análisis a las taxonomías con que la lógica formal disecciona *un objeto* aislado y estático. Y así eluden la fatiga de discernir e interpretar la red de contradicciones con que la lógica dialéctica opone y asocia una diversidad de factores, en el trabajo de comprender y explicar *un proceso*.<sup>5</sup>

En la actual situación de las naciones latinoamericanas y su contexto continental y global, somos parte activa de una transición histórica distinta de la confrontada en 1962 cuando la II Declaración de La Habana, o durante la retracción, crisis y derrumbe del modelo soviético, o bajo la ofensiva neoconservadora y el apogeo del neoliberalismo, o en medio de la primera oleada progresista despertada por Hugo Chávez. No pocas veces, los esquemas o clichés verbales que en uno o más de esos períodos parecieron útiles para entenderlo no son apropiados para comprender las potencialidades de otro. En situación están modificadas, los anteriores modos de concebir y alcanzar las metas deseadas pueden dejar de ser eficaces, y tocará calificarlos con otros adjetivos.

Para abrirle camino al otro futuro posible, durante esta transición no solo es deseable y necesario ir más allá que en la anterior oportunidad, sino indispensable articular y formar las fuerzas requeridas para emprender camino, ampliarlo y sostenerlo. En la inminencia de esta nueva marea de inquietudes populares, urge capacitar esas legiones, al tiempo que luchar para revertir la contraofensiva de la derecha y discutir qué objetivos proponernos al recuperar iniciativa, y cómo avanzar a corto y mediano plazos en esa dirección, con los destacamentos sociales que efectivamente lo pueden hacer posible.

Son estas fuerzas reales quienes determinarán cuánto y hasta adónde se puede hacer y sostener en la práctica política, no los juegos de palabras más sofisticados, ni menos una campaña de caza y lapidación de presuntos reformistas. Las indignaciones organizadas de la gente atizan el acontecer mejor que las exhibiciones verbales, donde algunos articulistas malgastan sus pericias intercambiando sentencias

<sup>5</sup> Al fin y al cabo, reforma y revolución no son dos puntas incompatibles de una disyuntiva estática, sino polos de una interrelación dialéctica, así como la lucha contra el capitalismo comienza por derrotar a su extremo neoliberal.

y entierros políticos en vez de aportar ideas que resuelvan problemas y despejen caminos.

Porque si de fuerzas se trata, hay que formarlas. Por lo pronto, tal como Frei Betto resume esta perspectiva, antes de que se haga tarde «solo le queda a la izquierda volver al trabajo de base, organizar a las clases populares, promover la alfabetización política del pueblo».<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Ver Sergio Ferrari, entrevista a Frei Betto: «Volver al trabajo de base, promover la alfabetización política del pueblo», en *Sur y Sur*, 22 de agosto de 2018.



# Cambios políticos recientes y disputas estratégicas en las relaciones de América Latina con Estados Unidos

Darío Salinas Figueredo

*dario.salinas@ibero.mx*

Doctor en Sociología.

Profesor-investigador emérito de la Universidad Iberoamericana, México.

Yissel Santos González

*yisselsantos87@gmail.com*

Becaria CONACYT en el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas  
de la Universidad Iberoamericana, México.

## **Resumen:**

Este estudio aborda el juego de tendencias y contratendencias conservadoras en el actual escenario político regional. Al hacerlo, sostiene que el impulso transformador del progresismo se enfrenta a severas amenazas y notorias reversiones que han profundizado los niveles del conflicto. Sin embargo, la disputa por la conducción de los procesos políticos se encuentra abierta. Ninguna experiencia se desenvuelve al margen de las políticas estadounidenses. Su incidencia es decisiva en algunos casos, como en Venezuela o Cuba, a tal punto que ponen en tensión el frágil equilibrio de las relaciones hemisféricas y geopolíticas. En ese encuadre, el actual gobierno de México no llega al escenario latinoamericano, como a veces se afirma, después del llamado «ciclo progresista». Por el contrario, es parte de ese denso flujo transformador, frente al modelo de sociedad neoliberal en descomposición que, a pesar de la crisis profunda que le aqueja, sigue funcionando como si tuviera una salud de roble.

**Palabras clave:**

Hegemonía, conflictos políticos, progresismo, relaciones hemisféricas, política intervencionista, neoliberalismo, relaciones internacionales.

**Abstract:**

*This study addresses the game of trends and conservative counter-tendencies in the current regional political scenario. In doing so, it is argued that the transformative drive of progressivism faces severe threats and notorious reversals that have deepened the levels of conflict. However, the dispute over the conduct of political processes is open. No experience unfolds outside of US policies. This incidence is decisive in some cases, as in Venezuela or Cuba, to such an extent that they put in tension the fragile balance of hemispheric and geopolitical relations. In that framework, the current government of Mexico does not reach the Latin American stage, as is sometimes affirmed, after the so-called «progressive cycle». On the contrary, it is part of this dense transforming flow, in the face of the model of a decomposing neoliberal society that, despite of the profound afflictive crisis it continues functioning as it were a strong health system.*

**Keywords:**

*Hegemony, political conflicts, progressivism, hemispheric relations, interventional policy, neoliberalism, international relations.*

**El punto de vista analítico**

Desde América Latina y el Caribe, en medio de un complejo juego de tendencias y poderosas contratendencias conservadoras en el escenario reciente, puede plantearse que se han profundizado los niveles del conflicto y la disputa por la conducción de los procesos políticos. Aunque la realidad hemisférica no ignora que la tradicional política estadounidense hacia la región se encuentra severamente cuestionada, desde el punto de vista de su credibilidad, los hechos sugieren la presencia de una reconfiguración de fuerzas que le favorecen y cuya vinculación con los objetivos estratégicos del capitalismo parecen haberse reactualizados.

El impulso transformador del progresismo se enfrenta a notorias reversiones. Esta idea, inserta en la trayectoria de una discusión inconclusa, no es antojadiza. Una sucesión de fenómenos adversos la pueden avalar,

entre los que destacan la derrota del Frente para la Victoria en Argentina y la del Gran Polo Patriótico para las parlamentarias en Venezuela, respectivamente, en el 2015. La pérdida en Bolivia del referendo para la reelección de Evo Morales y el *impeachment* golpista en Brasil que destituye a la presidenta Dilma Rousseff, ambos episodios ocurridos durante 2016. En Colombia, ese mismo año, el plebiscito convocado para validar los acuerdos de paz no resulta airoso para quienes bregaron por el fin del conflicto armado. Poco después, la sorpresiva traición política, en Ecuador, del candidato presidencial de la Alianza País después de los comicios presidenciales de 2017 y la derrota electoral del Farabundo Martí en El Salvador en enero de 2019. Este cuadro adquiere su punto de mayor gravitación con la crisis en Venezuela, agravada sistemáticamente por las mismas hostilidades que comenzaron a deteriorar las condiciones construidas hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sus alcances tendenciales ponen en peligrosa tensión el frágil equilibrio de las relaciones hemisféricas y geopolíticas.

La afirmación de que la política norteamericana frente al proceso global del capitalismo se ve afectada por una crisis de hegemonía ya resulta casi trivial. Sus expresiones han dado lugar a una importante línea de reflexión.<sup>1</sup> Sin embargo, actualmente el asunto de fondo no está precisamente en esa constatación, sino en la necesidad de conocer mejor la capacidad disponible para reorientar su deteriorado liderazgo. Mientras tanto, parece más estimable suponer que nos encontramos ante nuevas condiciones del poder hegemónico. Si esto es así, y para observar sus implicaciones en la región, es importante el ejercicio de distinguir entre las definiciones que van articulando la política bajo la administración republicana y las posibilidades reales de instrumentar sus objetivos estratégicos en el dinámico balance de fuerzas a nivel global.<sup>2</sup>

### **Los cambios políticos: dinámicas y límites**

El panorama político y social que se desprende de la historia actual está lejos de las esperanzas democráticas y transformadoras que

<sup>1</sup> Noam Chomsky: *Hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos*, Ediciones B, S.A., Barcelona, 2016.

<sup>2</sup> Darío Salinas Figueredo: «América Latina y el Caribe ante los desafíos de la crisis global», en: M. N. Ruiz Uribe (coord.): *América Latina en la crisis global. Problemas y desafíos*, México Instituto Universitario Internacional/CLACSO/ALAS/Universidad de Tijuana, México, 2013.

movilizaron a millones de ciudadanos. Desestabilizar procesos, retrotraer los logros antineoliberales y derrotar la marcha de las transformaciones democráticas y populares pautan el sentido de las trincheras políticas e ideológicas conservadoras, desde las cuales se proyectan en los espacios nacionales los planes de la derecha que cuentan con la disposición extrema de la política estadounidense. Es este el escenario de confrontación y de disputas en el que se despliegan dinámicas conexas con lo regional y hemisférico, reordenando a su turno las piezas de los recursos multilaterales. Reexaminar este escenario actual resulta ineludible. En ese ejercicio la mirada reflexiva sobre el pasado reciente es clave en la disputa por el presente.

La izquierda, tal vez midiendo desde un comienzo su propia fuerza, valorando ponderadamente la capacidad del adversario, buscó una acumulación prudente en la construcción de un proyecto de cambio. Desde el primer triunfo electoral de Hugo Chávez hasta prácticamente toda la primera década del presente siglo, podemos encontrar una línea continua de iniciativas, pugnas y políticas encaminadas desde las reformas antineoliberales. En su núcleo de articulación transformadora no fue un objetivo la recuperación de los bienes nacionales incluyendo decisiones de nacionalización, estatización y la transformación de las relaciones estructurales de la propiedad. En la medida en que esto fue así, el resultado político es parte del carácter que asume la evolución del progresismo.

La problemática hace referencia a la dialéctica de la acumulación en cuanto a la posibilidad de construcción de una fuerza con sentido estratégico. Lo que prevaleció fue la defensa de la justicia social, la restauración de los derechos sociales y el desarrollo de una política distributiva importante, con lo cual todas las experiencias estuvieron marcadas por la decisión general de devolverle al Estado un papel de mayor centralidad desde el punto de vista de la regulación frente a la preponderancia del mercado. La pugna entre la hegemonía del espacio mercantil, habida cuenta de sus grandes intereses y la reconstitución de la esfera pública, dibujó la tónica de la política. Por esa senda, los procesos políticos se fueron distanciando, en grados diversos, de las políticas neoliberales en cuyo desarrollo concreto unas experiencias avanzaron más que otras. Con todo, la dinámica del cambio político se había incubado, proyectando sus benéficas tendencias hacia un cuestionamiento importante de aquellas concepciones conservadoras de integración, seguridad y cooperación hemisféricas.

El tránsito, acorde con este itinerario general de lucha, ocurrió a través de la reapropiación social de la opción electoral como camino para legitimar el contenido de las transformaciones. Los resultados disponibles, con el beneficio del tiempo transcurrido, contienen insumos importantes para valorar los alcances y a la vez los límites de los logros dentro de la institucionalidad vigente. Lentamente fue quedando un saldo que dice relación a la distinción entre la corrección de las políticas neoliberales y la permanencia prácticamente intacta del poder político en sus fundamentos estructurales e institucionales, lo cual abre interrogantes de significación sobre el sujeto político desde el ángulo de su capacidad estratégica para impulsar y defender un proyecto alternativo.

La derecha, en sus diversas expresiones, ha sabido diagnosticar las debilidades del progresismo, así como el peso específico de la izquierda en él, y en esa medida pudo frenar la evolución del proceso de transformación e incluso revertirlo. Pero no solo eso. Aunque hayan sido derrotadas electoralmente, siempre supieron mantener su accionar de clase desde la oposición. Sus fuerzas siempre han sabido manejar esa conjunción de capacidad y recursos del poder para bloquear la gestión del cambio promovida gubernamentalmente por el progresismo. Si esto fue así y frente a la hipótesis del desgaste de la política progresista, conviene preguntarse de qué estaba hecha esa política.

### **Notas críticas sobre un escenario regresivo**

Estas experiencias políticas, aunque sean diferentes en sus circunstancias específicas, pertenecen a una coyuntura de crisis del proceso de lucha pautado de un modo general por la impronta antineoliberal y del impulso de propuestas para la integración regional sin subordinación.<sup>3</sup> Desde estos ángulos de interés, la perspectiva nos coloca frente a la problemática de los niveles de confrontación.

Coincidente con el inicio de la administración de Barack Obama (2009), puede situarse el momento constitutivo que pauta el inicio de las reversiones políticas. Es decir, el desarrollo de una estrategia orientada a desmontar lo que se ha construido a partir de 1998, justamente cuando se produjo aquel primer triunfo electoral de Hugo Chávez en

<sup>3</sup> D. Salinas Figueredo (coord.): *América Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integración*, UNAM-Universidad Iberoamericana, México, 2016.

Venezuela, bajo cuya benéfica tendencia se eligieron y hasta se reeligieron propuestas gubernamentales de corte antineoliberal. A contrapelo de los golpes tradicionales, de propinar derrotas sangrientas al movimiento popular para imponer dictaduras cívico-militares, con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, 2009 y 2012 respectivamente, se inauguraba un nuevo formato para instrumentar estrategias contrarrevolucionarias. Por esa misma senda, en Brasil se produjo en el 2016 la destitución de Dilma Rousseff mediante el montaje de un golpe de Estado parlamentario judicial mediático. En términos de los objetivos fundamentales en pugna, el fracasado golpe de 2002, contra la Revolución Bolivariana, fue asimilado por la derecha y la política estadounidense profundamente involucrada en el sentido de que la «vía tradicional» había perdido su eficacia.

A la cadena de abruptos reveses políticos y la rápida involución de las conquistas sociales, le siguen procesos de criminalización, judicialización, persecución e incluso de eliminación de dirigentes sociales. La amañada condena que truncó la candidatura de Lula, los procesos judiciales contra Rafael Correa y Cristina Fernández en curso, la construida orden de captura contra Jorge Glas o el asesinato de Berta Cáceres en Honduras son un ejemplo, entre otros, de la forma en que se despliegan combinadamente los nuevos recursos del giro conservador.

Este es el trasfondo que hay que estudiar para entender lo que subyace al debate que bajo la llamada «restauración conservadora» se ha desarrollado en la región,<sup>4</sup> y que no es otra cosa que el proceso en su fase de desacumulación de fuerzas del progresismo. Aquí se asoma un ángulo primordial desde el cual se puede visualizar la problemática que hace a la capacidad de defender los avances y el sentido de los cambios. La cuestión se dirige, antes que nada, a la valoración de aquella construcción de la conciencia en el desarrollo de los diversos momentos del proceso y el sujeto portador de esa conciencia en la lucha bajo invocaciones democráticas y populares de amplio espectro. A esto se añade el hecho comprobado de que ciertos comportamientos electorales en la región sugieren que las decisiones de votar no se relacionaron siempre con una voluntad de elegir, sino de castigar conductas políticas que generaron expectativas y luego frustraciones. Sirve de referencia

<sup>4</sup> A. Serrano Mancilla: *La huella invisible de la restauración conservadora*, CELAG, 2018. En: <https://www.celag.org/huella-invisible-restauracion-conservadora/>.

reflexiva, aunque no únicas, el resultado de los escrutinios de Chile en 2017 y de Argentina en 2015, cuando en ambas experiencias la mayoría social no pudo o no quiso conformar un entendimiento de unidad electoral en favor del progresismo.

La contraofensiva conservadora en curso no ignora este complejo entramado donde confluyen factores vinculados a la conciencia social, la organización de la política y, en definitiva, la capacidad de acumular fuerzas. Ellos avanzaron no solo porque tienen sus objetivos definidos y la disponibilidad de fuerzas estructurales, políticas, comunicacionales y aliados poderosos. Avanzaron en su contraofensiva porque pudieron hacerlo y la capacidad de las fuerzas progresistas no fue suficiente para impedirlo. La eficacia que logran en la disputa y la modificación de la balanza política se explica fundamentalmente a partir de las debilidades del progresismo.

Diversos y complejos son los factores comprometidos en esa disputa. De todos ellos, hay uno que puede considerarse entre los decisivos, porque reúne el complejo ámbito de las percepciones que compromete los niveles de la «conciencia posible» y que a la postre se traducen en comportamientos concretos. Colocado este registro de preocupación bajo cierta perspectiva, se puede pensar que la oleada del progresismo, que atraviesa actualmente un momento de reflujo, sugiere que el cambio antineoliberal avanza hasta donde la conciencia antineoliberal lo vino posibilitando.

Afirmación dinámica con la que de ninguna manera se minimiza la densidad de los desafíos que implica desmontar la hegemonía neoliberal. Su basamento teórico e ideológico no se encuentra solo en la economía. Por lo tanto, luchar contra sus políticas siendo importante no es suficiente. Su capacidad de enraizamiento es mucho mayor, toda vez que en la experiencia de nuestros países podemos constatar que ha permeado hábitos y costumbres, pensamientos, prejuicios y comportamientos, definiendo a la postre formas culturales de importantes capas de la sociedad, muchas de las cuales al beneficiarse del carácter redistributivo de las políticas sociales no necesariamente estaban comprometidas con un proyecto de transformación.

Desde el pensamiento crítico surgen desafíos importantes en la perspectiva de una mejor comprensión de la estructura de clases que ha propiciado el desarrollo de esta sociedad de mercado y la constelación ideológica que se ha ido conformando en coexistencia con la dinámica

de su complejidad. Hay segmentos sociales que pertenecen al mundo de los excluidos que votan por candidatos promovidos por la derecha, o estratos socioeconómicamente marginales cuyo imaginario colectivo fue alimentado por el espejismo del consumo o la desconfianza en la política predominante. Otros alegan abiertamente su disposición de incorporarse a la modernización neoliberal. En un examen más cuidadoso desde la sociología electoral, a esto se añade la preocupación por comprender mejor la recurrencia de la conducta abstencionista que afecta a porciones importantes del electorado latinoamericano, especialmente aquel grupo etario que integra a la juventud. Desde la experiencia de procesos progresistas la relación entre el «sentir» de la sociedad y la capacidad política para articular, convencer, convocar y sumar sigue siendo un asunto crucial. Cómo se produce la relación entre participación y representación en sistemas políticos históricamente excluyentes es una problemática relevante para la izquierda.

El manejo de los núcleos desde los cuales se mueven las expresiones de malestar o descontento constituye un desafío de proporciones insospechadas. Es un hecho, más que comprobado, que todo germen de desafección social con la política es estimulado por la derecha, sin desconocer que hasta el descontento puede ser provocado para luego culpar a los gobiernos progresistas por los efectos que ocasiona. Es exactamente allí donde su poderosa maquinaria comunicacional, instrumentada a través de portentosas y articuladas campañas nacionales e internacionales, se moviliza para deslegitimar y desestabilizar, aprovechando al máximo los errores e insuficiencias, que con enorme capacidad ha sabido capitalizar una vez conformada la situación que lo permita. Ejemplos significativos a este respecto, aunque no son los únicos, pueden ser rescatados de las experiencias recientes de Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y Nicaragua.

Si algo va arrojando la experiencia de los procesos más avanzados es que el neoliberalismo es mucho más que un conjunto de políticas económicas y sociales.<sup>5</sup> Es mucho más que un conjunto de variables macroeconómicas. Desde los gobiernos electoralmente triunfantes y que se opusieron con diversos grados de radicalidad a ese modelo de sociedad, aplicaron políticas diferentes cuyo impacto ha logrado

<sup>5</sup> D. Harvey: *Breve historia del neoliberalismo*, trad. Ana Varela Mateos, Ediciones Akal, Madrid, 2007; J. Estay y otros: *El neoliberalismo y su crisis. Causas, escenarios y posibles desenvolvimientos*, Heinrich Böll Stiftung/Arcis/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Santiago, 2012.



corregir de manera importante el contenido de las políticas. El positivo cambio que se introdujo en el sentido de la producción y en la esfera de la distribución ha generado una recuperación social significativa en el campo del acceso al consumo, lo cual aparece asimilado en términos de las conquistas en favor de los derechos sociales que conciernen a la condición ciudadana.<sup>6</sup> La dinámica, así como los componentes de sus luchas ha reactivado el papel de los movimientos, ampliando y profundizando su turno los ámbitos de su incidencia,<sup>7</sup> en una región donde el capitalismo se ha caracterizado por acumular históricamente problemas sociales no resueltos.

Donde hay demanda social desprotegida siempre hay un derecho que reivindicar. Sin ser la única, la experiencia de Brasil bajo los dos periodos del gobierno de Lula, a este respecto, puede considerarse paradigmática por sus extraordinarios logros sociales. Sin embargo, la relación entre estas políticas y el proceso de construir una ciudadanía con capacidad de articularse a la acción gubernamental deja interrogantes importantes sobre la consistencia del proceso, especialmente en el tramo en que se produjo aquella concertada dinámica que desembocó en la caída de Rousseff. No se ha podido observar en esa crítica coyuntura una disponibilidad movilizadora. Tampoco la capacidad para resistir el impacto del *impeachment*, y menos para evitarlo. No se puede olvidar que esta referencia tiene un asiento social de descanso: fueron un poco más de cincuenta y cuatro millones de electores brasileños, que en los escrutinios entregaron su confianza para que triunfara el gobierno, y que no tuvieron ante la regresión conservadora la capacidad de traducir ese *quantum* en una correlación activa y suficiente como para generar la respuesta social requerida por el conflicto con desenlace adverso. Aunque esto pueda darse por sabido, después de todo parece indispensable volver a replantearse la relación entre lucha electoral y lucha política. Conviene volver a observar, allí donde hubo, lo que acarrea el peso de la lógica electoral, peor aun cuando en los hechos se asume los espacios de legalidad sin visualizar sus límites, como si fuera sinónimo de «congruencia democrática», asunto crucial cuando compromete directamente a la izquierda en las

<sup>6</sup> M. Favela y D. Guillén: *América Latina. Los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares*, CLACSO, Buenos Aires, 2009.

<sup>7</sup> G. Pleyers: *Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas*, CLACSO, Buenos Aires, 2018.

coaliciones progresistas. Varios reveses están vinculados a la sobrestimación de la lucha dentro de la institucionalidad del Estado frente a la lucha que se desenvuelve en lo social no estatal.

La experiencia de Venezuela, vista desde el Proyecto Bolivariano, en su tránsito por una senda similar, aunque en un registro diferente por su grado de organicidad, arroja saldos sociales altamente transformadores si consideramos la participación ciudadana y el compromiso político con el proyecto. Este proceso aporta importantes referentes para estudiar los vínculos entre participación popular y poder político, así como la movilización de los recursos de la política para sumar fuerzas y neutralizar los afanes de la derecha. En su desarrollo se puede advertir un giro sustantivo en ese empeño común, unos con mayor visibilidad que otros, de los gobiernos progresistas en la construcción de una nueva ciudadanía con capacidad de politizar su participación desde la sociedad de cara al Estado.

Llegado a este punto es conveniente volver la mirada hacia ese ángulo desde el cual se puede apreciar la distancia entre el discurso y los hechos y para repensar hasta dónde se han transformado los factores que intervienen en las relaciones de poder. Las políticas aplicadas provienen de un campo de disputa entre la esfera mercantil y la esfera pública. Había que encarar a este respecto la disyuntiva entre más consumidores o más ciudadanos, frente a la cual no basta con invocar la emergencia de una nueva pluralidad. El punto pasa por repensar cómo dentro de ese abanico, de riqueza y diversidad social, se va construyendo un sujeto político provistos de una nueva conciencia.

Siendo una conquista importante la aplicación de una política distributiva de la riqueza socialmente generada, lentamente fue quedando claro a la vez que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no genera por sí sola una conciencia antineoliberal. Un lugar fundamental de este cambio se ha venido conformando desde las nuevas orientaciones políticas para el uso del excedente. Esto fue importante, aunque no haya indicios sustantivos de cambio en el patrón productivo que siguió atado, por regla general, al ciclo exportador y la demanda externa.

Sin esa cualidad en la construcción de la conciencia, difícilmente las conquistas lograrían ser determinantes para gravitar de modo sustancial en la trayectoria del cambio y, más aún, en la capacidad para defenderlas. Se trata de un dato económico con implicancias políticas,

porque supone mutaciones de fondo en el modo de pensar. Esa dimensión es estratégica, porque supone una confrontación decisiva en el campo de las ideas con las cuales se construye la política. Si esto es así, hay que recapitular el movimiento de las tendencias y contratendencias que se configuran en torno a los grandes objetivos en disputa.

Desde estas preocupaciones hay que volver la mirada hacia Brasil. Importantes intereses aquí han sido derrotados en sendas jornadas electorales desde el 2002 hasta el 2014. La existencia de un nuevo bloque en el ejercicio gubernamental del poder no iba ser fácilmente asimilado por la clase dominante brasileña. Hoy puede verse con cierta nitidez que el cálculo estratégico para instrumentar la involución no ha sido repentino. La derecha sabe que los resortes institucionales fundamentales del Estado y el poder económico están intactos. Maneja con destreza la diferencia entre ganar elecciones y controlar el poder, pero sobre todo sabe leer el movimiento real de la conciencia ciudadana. He aquí un colosal desafío, completamente vigente, para pensar desde la política latinoamericana en la perspectiva de profundizar la comprensión del proceso político regional y sus condiciones. Sus coordenadas conceptuales replantean el debate entre gobierno y Estado, la relación entre coalición electoral y alianza estratégica, la relación entre Estado y sociedad y, en última instancia, la disputa por la hegemonía.<sup>8</sup>

Las nuevas formas que asumen los golpes y las involuciones políticas que acarrearán pueden considerarse, entonces, verdadera pieza para una teoría política contemporánea. En su desenvolvimiento podemos referenciarlos para un mejor análisis que supone el ejercicio de identificar las dimensiones en que se constituye la disputa por la conducción de la política. Su riqueza y los factores movilizables puede incluso anticipar alguna de sus expresiones para abordar procesos y escenarios. Tal sería la experiencia de México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cuando avanza en el desarrollo de sus políticas y se visualiza la gran problemática que supone transformar la portentosa mayoría electoral —inusitada para nuestro tiempo— y el incuestionable mandato que de allí se deriva en fuerza política para construir y defender las transformaciones comprometidas. Posibilidad de enormes

<sup>8</sup> L. Oliver: *Transformaciones recientes del estado integral en América Latina. Críticas y aproximaciones desde la sociología política de Antonio Gramsci*, Universidad Nacional Autónoma de México/Ediciones La Biblioteca, México, 2016; M. Roitman Rosenmann: *Las razones de la democracia. Poder político, orden social y realidad económica*, Ediciones Sequitur, Madrid, 1998.

proporciones, así como de desafíos de igual magnitud en términos de construir, sumar y articular fuerzas que le otorgue la capacidad para impulsar el cambio que va a depender, más que de un sistema de partidos en crisis, seguramente, en gran medida de la figura del ejecutivo cuyo liderazgo político viene desde mucho antes. El gobierno de la denominada «cuarta transformación» no llega en diciembre de 2018, como a veces se dice, después del «ciclo progresista» en América Latina. Es parte de ese denso flujo transformador frente a un modelo de sociedad en descomposición que, a pesar de la crisis que le aqueja, sigue funcionando como si tuviera una salud de roble. Un eje fundamental, distintivo del programa de gobierno inscrito en el mandato electoral del primero de julio en México, es la lucha contra la corrupción cuya dinámica en todas las esferas de la política y sus instituciones se ha convertido en sistema constitutivo del modelo neoliberal y su reproducción.

Esta forma de colocar el estudio sirve para pensar las experiencias actuales desde un ángulo de preocupación mayor. Porque hoy todos los procesos que se han construido están en peligro, no por el mal llamado «fin de ciclo progresista» o «fin del giro a la izquierda»,<sup>9</sup> sino más bien por ese complejo movimiento de tendencias y contratendencias, de avances y reflujos que se advierten en los procesos de cambio frente a la dominación neoliberal y porque en esa trayectoria haya cambios en las correlaciones tanto en los países como en la región. Tampoco se explica solamente por el impacto adverso de la crisis económica y financiera que cerró la llamada «bonanza primario-exportadora». Tampoco por la política injerencista de EE.UU. que no constituye en sí misma una novedad, sino por lo que está ocurriendo allí donde se produce la reflexión, el diagnóstico político y la acumulación real de fuerzas en la franja progresista y particularmente en el seno de la izquierda.<sup>10</sup> Si nos atenemos a los saldos disponibles, a la manera de un esquemático balance, podríamos decir que el modelo bajo el influjo de políticas progresistas ha experimentado correcciones importantes, pero el núcleo duro del poder neoliberal sigue vivo.

<sup>9</sup> M. Torrico (ed.): *¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y políticas públicas*, FLACSO, México, 2017.

<sup>10</sup> Roberto Regalado: *La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética*, Ocean Sur, México, 2012; E. Sader: *El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana*, CLACSO/Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2010.

Los gobiernos que se han conformado con el apoyo de coaliciones de fuerzas diferentes y que al coincidir en la proyección de objetivos programáticos han conseguido imponer su hegemonía justamente cuando sus propuestas obtuvieron, más allá de los escrutinios, consensos movilizados importantes en la sociedad. Es ese el momento de la política cuando la diversidad social, desde su desencanto, enojo o frustraciones acumuladas, logró colocarse en disposición de movimiento y de lucha en un sentido transformador, es decir, con la identificación de sus adversarios, todo lo cual, en su medida y de acuerdo con las características del país, sirvió para los entendimientos, las coincidencias, las coaliciones y las alianzas en la tarea de sumar fuerzas. A su medida, acorde con las circunstancias nacionales, esta colocación en disposición de articulación para el movimiento pertenece a lo que se ha dado en caracterizar como la fase de acumulación antineoliberal. Subyace al dinamismo de este fenómeno político una larga y multiforme experiencia que dibuja un arco de avances sociales que va desde el Caracazo de 1989, pasando por la guerra del agua en Bolivia, la lucha del movimiento sin tierra en Brasil, el levantamiento zapatista del 1994, entre muchas otras expresiones de lucha, hasta ese momento andino de crisis política en que una poderosa rebelión ciudadana produjo la destitución del presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez en 2005. Sin este cúmulo de luchas y experiencias sería muy difícil tratar de comprender la conformación de los gobiernos progresistas y el carácter de sus liderazgos.

### **Dialéctica de la acumulación**

En la densidad de ese juego de tendencias y contratendencias, un momento primordial de la acumulación fue aquel en el cual la concertada política regional le puso en diciembre de 2005, en Mar del Plata, un freno a las pretensiones hegemónicas estadounidenses de instalar en todo el continente el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Notable coyuntura en la que se pudo dimensionar la profundidad del cuestionamiento a las concepciones conservadoras de integración, seguridad y cooperación, fundadas en los valores del mercantilismo neoliberal y la subordinación regional. Las grandes coincidencias construidas a partir de criterios multilaterales, de defensa de la soberanía para el tratamiento de los desafíos

comerciales, políticos y diplomáticos comunes se encuentran plasmadas de allí en adelante en el impulso de propuestas diferentes, como la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el Proyecto del Banco del Sur y el Consejo Sudamericano de Defensa junto con otros proyectos de gran envergadura como PETROCARIBE. A este rediseño estratégico regional pertenece la clausura del puesto militar norteamericano en la Base de Manta por el gobierno ecuatoriano en 2009. Heredera del Grupo de Río, que consolidó su fisonomía con la incorporación de Guyana, Haití y un poco más tarde Cuba, la denominada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en la Riviera Maya en 2010, culminó con el consenso de todos los países de la región en la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la Cumbre del 2011.

La experiencia venezolana desde la instalación del gobierno de Hugo Chávez en 1998, pasando por conquistas similares en Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay, hasta el triunfo del Farabundo Martí en la contienda del 2009, son hitos de un itinerario de referencia para pensar en la articulación de la política progresista. Dos hechos distintos pero significativos en ese proceso de acumulación son el golpe de Estado en el 2002, que fue frustrado por la unidad de las fuerzas del chavismo, y la victoria electoral de Lula ese mismo año en Brasil.

Es la suma articulada de disposiciones sociales lo que explica el movimiento del progresismo y la capacidad política para modificar la situación y que tuvo su ratificación en una cadena de triunfos electorales importantes. Asimismo, cuando se ha perdido esa capacidad de incidir desde lo social en la política, imprimiendo un contenido de lucha a las demandas y las expectativas, las fuerzas que habían construido se fueron resquebrajando o segmentando, debilitando su unidad de movimiento con lo cual las coaliciones y alianzas políticas se tornaron vulnerables.<sup>11</sup> Algo de esto ha sucedido, por ejemplo, en Argentina cuando el peronismo y las fuerzas de izquierda abrieron espacios que no tardaron en propiciar condiciones favorables para su derrota electoral después de 12 años de liderazgo del movimiento kirchnerista. El gobierno del Partido de los Trabajadores, en Brasil,

<sup>11</sup> H. Ouviañas y M. Thwaites Rey (comp.): *Estados en disputas. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*, Ediciones desde abajo-Bajo Tierra Ediciones Quimantú-CLACSO, Buenos Aires, 2019.

igualmente se debilitó después de que, desprovisto de la movilización de masas que inicialmente impulsó y que no desarrolló a la altura del conflicto que no dejaba de crecer, en aras de pretender probablemente una base mayor de alianzas políticas con algunas fuerzas de dudosa congruencia, y que no tardaron en desestabilizarlo generando las condiciones para impensados sucesos regresivos.

Estas experiencias contienen la didáctica de que el soporte de las coaliciones para conquistar gobiernos y mantener escrutinios favorables es un proceso coincidente pero diferente al proceso estratégico de acumulación de fuerzas. Esto puede resultar más ilustrativo cuando, como en muchos casos, prevalece el peso de un liderazgo en el campo progresista que por sí solo, más allá de su congruencia y capacidad, no conlleva necesariamente la construcción de un proceso articulado de acumulación desde partidos y movimientos. En ambos niveles, gubernamental y no gubernamental, se dinamizan complejos procesos de disputa en torno a la conquista y la capacidad de defender los procesos de transformación. Legitimar por tanto un gobierno progresista, que cuenta con el consenso de los gobernados, no significa legitimar de antemano los poderes del Estado desde los cuales operan las fuerzas de la clase dominante.

Paraguay, Brasil y Ecuador, siendo procesos diferentes, muestran en su momento de regresión un común denominador. Nos referimos al accionar político de sus respectivos vicepresidentes y el tejido de intereses adversos que representaron en el tablero de las coaliciones de gobierno. Podríamos entender por qué la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos apareció involucrada en el espionaje realizado contra Brasil. También por qué la presidenta Dilma Rousseff, por ese motivo, suspendió su visita de Estado programada a Washington para aquel 23 de octubre de 2013. Sin embargo, desde cualquier punto de vista resulta incomprensible cómo se pudo sostener a un vicepresidente como Temer, desde el 2010, sabiendo tal vez todo lo que representaba desde el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y más allá incluso de esa organización. Para la derecha, el gobierno estadounidense y la Organización de Estados Americanos, después de todo, la destitución de la presidenta de Brasil se produjo dentro del marco constitucional del Estado. Hay momentos en que esa legalidad aparece como garante de toda la sociedad, pero cuando el proceso avanza y los factores del poder advierten amenazas, sus

instituciones no tardan en asumir la defensa de la clase dominante. Definir esa frontera en medio de la confrontación será siempre un desafío para las fuerzas progresistas.

En Paraguay, en la forja del «golpe parlamentario», del 12 de junio de 2012, el vicepresidente Federico Franco no ha sido una figura secundaria si se considera la estrategia de exacerbar o crear conflictos en la disputa política. Tal es el caso, poco discutido, cuando la intención del Pentágono en su afán de asegurar una base en territorio paraguayo y la promoción de proyectos para la cooperación en materia de seguridad no contó con la anuencia del gobierno de Lugo. Fue al ministro de defensa Luis Bareiro Spaini a quien le cupo la responsabilidad de encarar aquella delicada situación en cuyo desarrollo se ha visto enfrentado a un juicio político en el que aparecen los indicios del accionar de Liliana Ayalde, la entonces embajadora estadounidense acreditada en Asunción, portadora en esa coyuntura de una larga historia de injerencias y quien conocía de los afanes de la derecha parlamentaria de destituir al presidente. La provocada renuncia de Bareiro fue parte del proceso de desestabilización que incluyó la horrorosa masacre de Curuguaty. Más tarde, el accionar del vicepresidente, otra vez como parte de la trama siniestra del golpismo, adquiere un peso singular cuando su partido, el Liberal Radical Auténtico, se constituyó en impulsor del juicio político que culmina, como es sabido, en el «golpe parlamentario» contra Fernando Lugo.

Un elemental acercamiento a la coyuntura ecuatoriana es suficiente para situarnos de inmediato frente al fenómeno político de la traición. Traición a la mayoría que logró conformarse cuando votó por un candidato que enarboló su campaña electoral como continuador de la Revolución Ciudadana. No se sabe a ciencia cierta cómo se produjo su mutación o si se trata de alguien que siniestramente estuvo agazapado esperando el momento para el zarpazo. De cualquier modo, es un error no haber sabido que esto podía ocurrir. No hay que olvidar que Lenin Moreno durante su campaña ha dado muestras de aparente congruencia con las realizaciones del gobierno de Correa, pero una vez en la presidencia inició sin dilación un giro radical para instrumentar una política completamente diferente. Hoy está más que claro que se trata de restaurar los factores tradicionales del poder político en el Ecuador y garantizar el retorno de la política de Washington en las decisiones fundamentales de la política en el país. De ser así,



¿cuál es el propósito? Varios, pero el más importante es el objetivo estratégico de cerrar el paso a toda opción progresista en Ecuador y de aniquilar a la izquierda en el país. La anulación a Julian Assange de su carta de ciudadanía y el asilo que tenía legalmente en la Embajada Ecuatoriana en Londres es muestra paradigmática de las proyecciones de la traición.

Sea de todo esto lo que fuere, lo cierto es que la conducta del «segundo de abordó» en la función ejecutiva, por sus ligámenes con la derecha y el peso decisivo de los factores externos en la cadena de la dominación se convirtió en un formidable peldaño para escalar la operación de la restauración conservadora dentro de la misma institucionalidad y con sus recursos constitucionales.

Siguiendo el sentido de la línea reflexiva hasta aquí hilvanada, conviene volver a preguntarse sobre el trasfondo de estos procesos recientes de derechización. Los triunfos de estas fuerzas están más relacionados con las debilidades del progresismo que a la consistencia social de sus propuestas antineoliberales. Mayor peso analítico adquieren los errores del progresismo, que las cualidades propias de la derecha. Si se revisa cuidadosamente el contenido de las políticas que comenzaron a aplicar los gobiernos de Brasil, desde el golpe de 2016 y el de Argentina desde el mismo día en se impuso por la mínima de menos de tres puntos porcentuales en las elecciones de 2015, no difieren de las aplicadas durante los claros periodos neoliberales de Fernando Henrique Cardoso y Carlos Saúl Menem, respectivamente. Aunque las ciudadanías de estos países han identificado dramáticamente sus desafíos actuales, no está claro si disponen de las condiciones para remontar en lo inmediato las articulaciones políticas requeridas. Esto explica la arrolladora victoria de la expresión electoral más radical de la derecha agrupada bajo la candidatura de Jair Bolsonaro que constituye un capítulo del golpismo. Si nos atenemos al peso social de las invocaciones ideológicas, la aparentemente desaseada campaña conservadora en favor del orden y el disciplinamiento tuvo una indiscutible eficacia en la conducta electoral frente a esa otra convocatoria construida desde el significado golpista del *impeachment*.

Todo esto ha venido ocurriendo sin necesidad de que la derecha, donde ha llegado al gobierno, se haya visto ante la imperiosa necesidad de ofrecer una plataforma cualitativamente diferente de la que ya hemos conocido frente a los problemas sociales y políticos que cruzan a

nuestros países. Casi sobra decir que el neoliberalismo no ha resuelto ninguno de los problemas que se ha propuesto atender. Su sistema político no ha demostrado capacidad alguna para absorber y resolver los conflictos sociales. A esto se añade una dimensión que, sin ser nueva, en la actualidad adquiere una notable visibilidad: la corrupción gubernamental y política prevaeciente que, por regla general, es apreciada como un engranaje sin el cual su sistema político no puede funcionar.

Sin embargo, a la luz de los resultados disponibles no se puede subestimar su capacidad de rearticulación. En la disputa, que sigue su curso, por la dirección de los procesos no escatima ninguna forma de lucha. El abanico de recursos puede ser muy amplio. Desde el movimiento concertado para activar la maquinaria del fraude y la corrupción hasta el uso combinado de la coerción y la compra de conciencias de segmentos sociales empobrecidos. En el acervo de las experiencias mencionadas se localiza, México 1988 y la reedición del fraude electoral del 2006, el golpe de 2002 en Venezuela, el intento de reversión institucional en Bolivia de 2008 y Ecuador en 2010, las construcciones de ropaje judicial para la inhabilitación política de Lula de 2018, y una cauda de procesos de desestabilización en desarrollo con los peores escenarios. Son todos referentes de los procesos de cambio y sus desafíos democráticos. Es más, estos antecedentes son muestras de la capacidad disponible en el acervo de los recursos institucionales y políticos de la derecha, cuyo accionar encuentra sus correspondientes ligámenes con la disposición coadyuvante y a veces francamente impulsora de la política estadounidense hacia la región.

### **Estados Unidos, Venezuela y Cuba**

El actual mandatario estadounidense cumple satisfactoriamente con todos los requisitos ideológicos de un ejecutivo reaccionario, que explicita de manera asombrosa su voluntad política, generalmente desde posiciones de fuerza, como la construcción de muros, visados discriminatorios, oleoductos contaminantes o apelando a declaratorias de emergencia nacional, y que para llegar a la oficina oval no requirió de un ejercicio democrático fundado en el principio de mayoría. Es difícil encontrar en la historia norteamericana un similar, es decir, otro mandatario que haya enfrentado tanto rechazo durante

su campaña y luego ya bajo su investidura como presidente. Pero hay algo fundamental que no debe desmerecerse: él encarna una estructura de poder, la preferencia de la clase dominante y la confianza del sistema político norteamericano en esta coyuntura.

Casi sobra insistir que el principal objetivo de la actual administración es encarar la crisis de hegemonía para recuperar la primacía de Estados Unidos. Ello supone el reordenamiento de su dominación global, que no se instrumenta obviamente desde las normas de convivencia internacional, ni desde el respeto por los acuerdos multilaterales de cooperación que son considerados simplemente un obstáculo. Su prioridad consiste en doblegar a China para lograr la apertura del mercado asiático en favor de los bancos y proveedores estadounidenses, así como reforzar la preponderancia de Wall Street. La proclama de preparar a Estados Unidos para «ganar guerras» y la sistemática exhibición de su poderío bélico tienen como destinatario a todas las franjas del mundo que no se subordinan o que mantienen un sentido de independencia frente a sus propósitos y políticas. *America first* quiere decir *Only America*. Significa que solo ella puede ser portadora de los intereses del capitalismo global. Esa base ideológica le sirve de sostén para atribuirse el derecho de intervenir, directa o indirectamente, allí donde sus intereses se consideran amenazados, sin que importe, por supuesto, la índole de los convenios multilaterales comprometidos ni las leyes internacionales.<sup>12</sup>

Desde tales propósitos hay que entender su preocupación por Rusia en la competencia estratégica que viene desde mucho antes, habida cuenta de sus complejas implicancias geopolíticas. Su agresión a Siria hace parte de esa pretensión y se vincula con su afán de reforzar una estrategia de alianza explícita con Turquía, cuya posición no le allana el camino deseado, así como con Arabia Saudita e Israel que son sus acompañantes en la misma senda, sin perder de vista el empeño declarado por generar el desarme atómico de Irán, Corea del Norte y la pretensión arrogante de subordinar a Europa a través de un mayor financiamiento de la OTAN. Es en este encuadre, obligadamente apretado, el lugar analítico donde hay que estudiar la estrategia estadounidense y sus alternativas cuando se debate entre sus pretensiones

<sup>12</sup> J. Hernández Martínez: «Rearticulación del consenso y la cultura política en Estados Unidos. Reflexiones e hipótesis sobre la «era Trump»», en C. Castorena *et al.* (coord.) *Estados Unidos contra el mundo. Trump y la nueva geopolítica*, CLACSO-Siglo XXI Editores, México, 2018.

hegemónicas globales fundadas en la visión unipolar frente al desenvolvimiento inexorable de un diseño multipolar en curso.<sup>13</sup> Esta pugna, que es mucho más que un conflicto entre visiones, no tiene un desenlace predecible, lo cual no significa que no pueda ser estudiada, porque estamos ante un proceso que anticipa tendencialmente la conformación de varios polos provistos de determinados poderes de decisión.

¿Tiene que ver todo este movimiento de fuerzas y reposicionamiento ideológico con América Latina y el Caribe? Más allá de las apariencias y el contenido explícito de los documentos oficiales, sí tiene que ver y mucho. En lo más inmediato resulta benéfico para la región todo contrapeso frente el hegemonismo norteamericano, pero no estamos ante una disyuntiva que supondría hipotecar soberanía, desarrollo y seguridad. Además, por el peso de la historia habremos de considerar que Estados Unidos nunca ofrece retribuciones significativas a cambio de la simple adhesión subordinada. El endurecimiento de la política estadounidense confirma la continuidad de que nuestra región sigue siendo un escenario en disputa. Venezuela vive y padece diariamente el resultado de ese choque. Cuba por su lado experimenta el retroceso de la tímida, aunque importante herencia de Obama, por el redoblado bloqueo y las amenazas que se extienden explícitamente hasta Nicaragua. La actual administración norteamericana se ha empeñado por convertir a México en una experiencia didáctica sobre cómo se puede controlar la inmigración y renegociar desde la asimetría los convenios comerciales. No obstante el ligero cambio de tono después del triunfo de AMLO y ante la reorientación distante de la subordinación de su política exterior, esa pretensión se mantiene vigente.

Someter a Cuba es parte de una antigua historia en el registro de los objetivos de la política norteamericana, en cuyo itinerario la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo es una muestra muy elocuente. No es este el lugar para revisar cómo esa pretensión se vuelve historia contemporánea desde Eisenhower hasta Trump, doce sucesivas administraciones que han sido congruentes en la aplicación de sanciones económicas, comerciales y financieras, acuerdos con una política constante de agresión ideológica, militar y mediática. Una verdadera guerra que combina todo tipo de acciones, abiertas y encubiertas, con el

<sup>13</sup> G. Pérez-Gavilán et al. (coord.): *La geopolítica del Siglo XXI*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2017.

propósito de aislar a Cuba y el objetivo estratégico de doblegar el sentido de autodeterminación en que se sustenta su sistema político desde el triunfo de la revolución.<sup>14</sup>

En Venezuela el golpismo intenta articular el despliegue de todas las formas de lucha, bajo el objetivo de complementar el sabotaje de la economía, el desabastecimiento inducido con violencia callejera y provocaciones diplomáticas. Ante la fragilidad de la oposición interna para articular una estrategia consistente, en todo ello la iniciativa estadounidense resulta crucial. El gobierno bolivariano resiste con maniobras institucionales, desde una lectura cuidadosa de los acontecimientos y con el uso balanceado de los recursos políticos disponibles a la medida de las correlaciones, los cambios en la situación y las tácticas de la agresión evitando la confrontación directa. Pero todo indica que la situación de guerra persistirá, parte de la son la aplicación unilateral de sanciones económicas y las medidas de bloqueos que afectan severamente la economía del país.

El interés norteamericano sobre Cuba conlleva una dimensión hemisférica. Eso explica por qué el recrudecimiento del bloqueo a Cuba se produce en un contexto de ataque frontal a la soberanía y la institucionalidad de Venezuela. La mirada de inspiración monroísta se encuentra plenamente reinstalada. En efecto, en la argumentación oficial China y Rusia están comprometidas con la «dictadura» en Venezuela y buscan expandir —se dice— los vínculos militares y la venta de armas en toda la región. Los Estados democráticos del hemisferio —es decir, aquellos que hacen de la subordinación la forma de cooperación— tienen un interés compartido en enfrentar las amenazas a su soberanía.<sup>15</sup> En la misma cita de marras se afirma que en Venezuela y Cuba, los gobiernos se aferran a modelos autoritarios izquierdistas anacrónicos —la traducción es nuestra— que continúan engañando a su pueblo. Que las invocaciones construidas carezcan de verificabilidad no importa mucho. La importancia estriba en que anticipan una decisión en la conducta de la política estadounidense. Es así como bajo el argumento de la «injerencia» cubana en Venezuela, tampoco comprobada, Estados Unidos aprovecha para realinear el campo de sus incondicionales bajo la estrategia de recuperar incidencia

<sup>14</sup> R. Sánchez-Parodi: *Cuba-USA. Diez tiempos de una relación*, Ocean Sur, México, 2011.

<sup>15</sup> The White House: *National Security Strategy*, Office of the Press Secretary, Estados Unidos, 2017, p. 51. Fecha de consulta 22 de mayo de 2019.

política en aquella franja de países que se resisten a su hegemonía hemisférica. El recurso argumental contiene las huellas de las pretensiones hegemónicas, por lo que en estricto sentido no constituye una novedad. A contrapelo de lo que ocurre bajo el influjo del chavismo que permite una mejor comprensión del proceso revolucionario cubano, en la narrativa del norte se busca construir la imagen de una isla sin futuro, en bancarrota, que no hace más que exportar su experiencia y otro «régimen represivo», «cubanizando el chavismo» para boicotear el sentido de la solidaridad entre países y pueblos.<sup>16</sup> La prolongación de esa línea desvirtuadora de los procesos de integración explica la realineación de fuerzas impulsada por la OEA que aparece bajo el llamado Grupo de Lima que, sin ser estrictamente homogéneo, ha realizado una labor de coro diplomático funcional a los requisitos de la desestabilización y la intervención contra Venezuela promovida por Estados Unidos.

El trabajo bilateral que condujo hacia la reanudación de las condiciones para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siempre estuvo presente la agenda hemisférica. Desde el interés norteamericano esto ocurrió sobre la base del reconocimiento de una política que ha fracasado en su intento por cambiar el régimen de Cuba y todo lo que ello pudiera representar para su hegemonía en la región.

Al inicio del llamado «deshielo» en las relaciones bilaterales, subyace el reconocimiento de que ha cambiado aquella histórica relación de normalidad fundada en la subordinación de la región hacia Estados Unidos. A pesar de la reticencia implícita de Estados Unidos, los gobiernos latinoamericanos y caribeños lograron concretar consensualmente la invitación al gobierno cubano para participar en la VII Cumbre de las Américas realizada en abril de 2015 en la ciudad de Panamá. Se ratificaba en aquel momento algo que ya venía sucediendo y que rubricaba el pleno reconocimiento de Cuba como miembro de la comunidad hemisférica.

En la decisión de Obama estaba presente la posibilidad de que cambiando su política podría, por otros caminos, retomar el rumbo de sus objetivos estratégicos tanto hacia la isla como hacia el hemisferio en su conjunto. Bajo el ropaje de la transición se reactualizan

<sup>16</sup> G. Sánchez Otero: «Fidel, Chávez y el destino de nuestra América», en: J. Saxe-Fernández (coord.): *Yo soy Fidel. Pensamiento y legado de una inmensidad*, CLACSO, Buenos Aires, 2018, p. 174.

tales objetivos, ahora bajo los criterios de la política de Trump. Aunque existe una agenda, en el campo de las opciones actuales no están todas las deseadas. Tampoco las posibles, ni siquiera desde el más puro realismo político.<sup>17</sup> Más allá de los documentos disponibles y sobre todo en atención a la conducta seguida, parece difícil sostener que para la actual administración Cuba se encuentre en un lugar de baja prioridad dentro de su política. La complejidad de la relación en esta coyuntura, aunque los tiempos han cambiado, no aparece desprovista del peso que aporta la historia de la relación.

Entre el 2016 y 2017, diplomáticos estadounidenses fueron, supuestamente, víctima de ataques sónicos que han provocado, también supuestamente, daños cerebrales permanentes. Estupefacta, la opinión pública tomó nota del llamado *Sonic attack* después de que el Departamento de Estado revelara esa increíble forma de agresión. Así como las armas de destrucción masiva en tiempo de Saddam Hussein jamás pudieron ser corroboradas, aquí tampoco la cooperación profesional entre ambos gobiernos ni la investigación científica nunca pudo descubrir lo que ocurrió. Sin embargo, los congresistas cubano-americanos fueron muy oportunos para generar ante aquel episodio una corriente de opinión dirigida hacia la revisión de las relaciones heredadas de la administración anterior, incluso algunas formulaciones apuntaron hacia la ruptura de relaciones diplomáticas. Con el episodio quedó construido el primer peldaño para la reversión. Invocando medidas de seguridad se puso en marcha la decisión de reducir la presencia diplomática y consular norteamericana en La Habana y correlativamente se impuso la del personal de Cuba en Washington.

La tónica del nuevo periodo resultaba inequívoca. Aun así, la respuesta del gobierno cubano ha sido notable por su moderación, al tiempo que reiteraba su disposición de dialogar y cooperar con EE.UU. en asuntos de interés mutuo, y de seguir negociando sobre otros temas de interés bilateral. Luego vendrá el discurso del Presidente Trump del 16 de junio de 2017 en Miami, teñido de un lenguaje ofensivo a la política cubana, que tuvo el significado de una misión cumplida en atención a su promesa de campaña con el anuncio de su nueva política orientada a detener la opción de ampliar la cooperación construida. El

<sup>17</sup> Jorge I. Domínguez: «Opciones para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump». *IdeAs* [en línea], 10 | Otoño 2017 / Invierno 2018, publicado el 19 de diciembre de 2017, accedido el 29 de mayo de 2019. En: <http://journals.openedition.org/ideas/2139>; DOI: 10.4000 / ideas.2139.

avance de la contraofensiva retoma la ley Helms-Burton con la aplicación del Título Tercero, de agresivo alcance en cuanto a su extraterritorialidad. La pretensión del instrumento es imponer su juridicidad en Cuba, transgrediendo principios según los cuales el dominio de propiedad, de inversión o financiamiento corresponden soberanamente a las leyes del país. En virtud de la aplicación del mencionado título se busca otorgar legalidad a los antiguos propietarios en Cuba, así como a sus herederos, para entablar demandas en tribunales de Estados Unidos. Por extensión las demandas podrían exigir compensaciones a empresas de terceros países cuyos negocios en la isla utilicen inmuebles sin importar que hayan sido nacionalizados o confiscados al amparo de la legislación correspondiente. Es difícil proyectar lo que ocurriría si prosperan las demandas en las cortes estadounidenses. En cualquier caso, puede anticiparse un daño aún más grave a la economía cubana si al actual embargo se añadiera el impacto de inhibir la inversión de capital compartido de terceros países. Mientras tanto, las estadísticas disponibles registran en la economía cubana una pérdida estimada equivalente a 633 600 millones de dólares a la economía cubana por efecto del bloqueo de casi seis décadas.

Estas medidas, por su carácter coercitivo y unilateral, son similares a las que se vienen aplicando contra Venezuela. Aquella Orden Ejecutiva de Obama suscrita en marzo del 2015 es equivalente a una declaración de guerra. ¿Por qué? Porque se ha calificado no al país al que se refiere, sino a la Revolución Bolivariana, como una «amenaza inusual y extraordinaria a la Seguridad Nacional de Estados Unidos». Como es sabido esa orden fue ratificada un año después y por esa misma senda hará lo suyo la agresión de Trump y su Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017, la 13827, la 13835, la 13850, todas durante el 2018, así como la 13857 de enero de 2019 que producen, en registros distintos, agudos daños a la economía y las finanzas. El campo de afectación es de amplio espectro, prohibiendo al sistema financiero norteamericano y sus filiales internacionales realizar operaciones desde o hacia Venezuela. Estas prohibiciones, entre otras derivadas de los decretos, producen una cadena de agresión que se traduce en sensibles obstáculos para la disposición de divisas, lo cual conlleva una enorme crueldad cotidiana, toda vez que limitan severamente la adquisición de insumos fundamentales, como hospitalarios, productos farmacéuticos, medicamentos y, en general, el suministro de alimentos de primera



necesidad que no se producen en el país. La acumulación de necesidades básicas insatisfechas y los elementos contruidos para el diagnóstico de una «catástrofe social», encuadradas bajo el impacto de las sanciones, producen las referencias para promover la intervención bajo ropaje humanitario. Estos procesos, en curso, sugieren el desarrollo de una estrategia cuidadosamente concebida.<sup>18</sup> Después de instrumentar el cerco económico, financiero y comercial contra Venezuela la maquinaria mediática construye la acusación dirigida a responsabilizar al gobierno del desabastecimiento y otras causas que en su conjunto van justificando la intervención por «razones humanitarias».

A tales decisiones y maniobras promovidas por Estados Unidos se articula toda una política de agresión multidimensional con el propósito de derrocar al gobierno y aniquilar al chavismo. Aquí, al igual que contra Cuba, la administración norteamericana ha reconstituido la argumentación en favor de los «derechos humanos» y la «democracia». La arremetida descansa en un discurso antidictatorial centrado en el presidente Nicolás Maduro, cuya autoridad legal se busca deslegitimar con la autoproclamación de Juan Guaidó en calidad de «presidente encargado» de Venezuela al que el gobierno estadounidense le ha otorgado su reconocimiento.

En Venezuela se han puesto en práctica casi todos los experimentos para un cambio de régimen. Desde el intento de varios golpes de Estado, pasando por el de un magnicidio, la intervención bajo ropaje de «ayuda humanitaria», hasta la estrategia de un ensayo de levantamiento con desertión de mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el accionar combinado de grupos paramilitares. Las autoridades norteamericanas han afirmado en reiteradas ocasiones que sobre la mesa están consideradas todas las opciones políticas, incluso las variantes de una intervención militar.

### **A manera de cierre**

Nuestra región es la franja del planeta donde se encuentra domiciliado el mayor número de intervenciones estadounidenses. Su frontera sur, ha sido y sigue siendo considerada de hecho una suerte de

<sup>18</sup> P. Curcio Curcio *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela*, Ediciones MinCI, 2da. ed., Caracas, 2017.

prolongación de su territorio. El concepto de «patio trasero» se encuentra completamente ratificado en la índole de sus decisiones en materia de política migratoria, comercial, de seguridad y la ofensiva formulación reiterada para la construcción del muro fronterizo. La prolongación de ese concepto adquiere agresivas dimensiones geoestratégicas cuando apunta hacia la necesidad de incidir en la trayectoria de la política en nuestros países y desde luego en relación a la importancia que para su seguridad adquiere los recursos naturales como el petróleo, el gas y los recursos de la biodiversidad. Más allá de cualquier ámbito de concreción, lo que encierra esa proyección es elemento constitutivo de un expediente de regularidad que no se puede desligar de la actual contraofensiva de sometimiento, desestabilizadora y golpista contra aquellos procesos y gobiernos que han diseñado sus proyectos nacionales y regionales sin el consentimiento de la política norteamericana.

El endurecimiento de la política estadounidense bajo la actual administración es un referente de análisis que sirve para hipotetizar, de manera plausible, que estamos en la continuidad de los objetivos estratégicos en pugna y ante un escenario hemisférico y global en disputa. Los intereses atrincherados en las estrategias desestabilizadoras y golpistas intentan articular la iniciativa política bajo el despliegue de todas las formas de lucha, recurriendo al sabotaje de la economía con violencia callejera, los recursos institucionales del poder, el uso incluso bajo formas de chantaje político de las asimetrías históricas en la relación Norte-Sur y las provocaciones diplomáticas concertadas entre gobiernos de derecha, la OEA y el llamado Grupo de Lima. Destaca en ese cuadro el gobierno bolivariano y sus fuerzas políticas, que resisten desde una lectura cuidadosa de los acontecimientos, tratando de considerar la medida exacta de las correlaciones y los cambiantes desafíos. Pero la situación de guerra persiste y el resultado de sus batallas son un asunto vital para el futuro de América Latina y el Caribe.

# ¿Tormenta perfecta? América Latina: Derecha gobernante, resistencias y futuros

Pável Alemán Benítez

*pavel@cipi.cu*

Licenciado en Derecho.

Investigador Auxiliar del CIPI.

## **Resumen:**

Latinoamérica y en especial Sudamérica, presenta un complejo contexto económico y político, donde la Derecha ha retornado al gobierno en varios países. De forma simultánea estos gobiernos, políticamente alineados con Estados Unidos, impulsan una agenda de austeridad económica neoliberal combinada con el desmontaje de las políticas públicas inclusivas de los gobiernos precedentes. Se observa una tendencia creciente al empleo de los sistemas judiciales para perseguir políticamente los liderazgos de izquierda en la región. Los procesos electorales más recientes sugieren un futuro pendular con el resurgimiento de fuerzas de izquierda moderadas y pragmáticas, y su ascenso al gobierno.

## **Palabras clave:**

Latinoamérica, economía, procesos políticos, Derecha, elecciones, liderazgos.

## **Abstract:**

*Latin America and especially South America, presents a complex economic and political context, where the Right has returned to the government in several countries. Simultaneously, these politically aligned governments with the United States promote a neoliberal economic*

*austerity agenda that includes the dismantling of the inclusive public policies of previous governments. There is a growing trend in the use of judicial systems to politically pursue leftist leadership in the region. The most recent electoral processes suggest a pendular future with the resurgence of moderate and pragmatic left forces, and their rises to government.*

**Key words:**

*Latin America, economy, political process, right side, elections, leadership.*

No es el objeto del presente ensayo hacer un análisis pormenorizado de la situación fáctica en cada país de nuestra región. Se advierte que el escenario regional es fragmentado e inestable, y su complejidad está signada por la incertidumbre. Las referencias concretas sobre la situación política interna de algunos países, está relacionada con el interés particular para la política exterior de Cuba. En las anotaciones subsiguientes se analizarán temas transversales que se solapan y combinan entre la economía, la política y la sociedad en la región.

### **La economía latinoamericana: efectos ¿poscrisis?**

Tras la crisis de 2008-2009, originada por los títulos *subprime* en el mercado inmobiliario, y la posterior migración de las inversiones bursátiles al sector de las *commodities*, las principales instituciones internacionales se percataron de que la región sudamericana había amortiguado los impactos globales de la crisis. Dichas instituciones auguraron que los países sudamericanos, con economías sustancialmente asentadas en el sector primario y en las exportaciones, tendrían en el corto plazo un ciclo de elevada renta doméstica.

Sin embargo, el ciclo de crecimiento que impulsó la reprimarización de las economías, terminó abruptamente con la caída de los precios en su cotización. El caso más visible es el del petróleo, fuente principal de ingresos para varios países que se destacaron por reestatizar sus recursos naturales, una política más redistributiva con inversión social, e independencia y activismo en política exterior.

En Venezuela, mucho antes del triunfo de la Revolución Bolivariana, había nacido la idea de «sembrar el petróleo». Bajo ese

enfoque fue que el finado presidente Hugo Rafael Chávez Frías modificó la economía venezolana. En otras palabras, y válido para el conjunto de las economías sometidas a análisis: «derramar» los ingresos provenientes de la renta obtenida por el comercio exterior de los productos primarios, sobre otros sectores de la economía para dinamizarlos, y para reducir y/o eliminar la deformación de la estructura económica.

Sin embargo, en la región se ha acentuado la dependencia en la producción de bienes primarios, con énfasis en el comercio extrarregional abierto y conectado a las cadenas globales de valor. Esta tendencia se ha impuesto en desmedro del comercio intrarregional, ejerciendo un efecto desarticulador en los proyectos de integración. Particular importancia en este panorama desalentador, tiene el hecho de que varias de las economías globales más importantes han ralentizado su dinamismo, y existe una sobreoferta en el mercado de bienes primarios que no contribuye positivamente a estabilizar, o incluso recuperar su valor en la cotización internacional.

En América Latina, hay una tendencia creciente a adquirir en el corto plazo elevados montos de deuda pública, revirtiendo el proceso de desendeudamiento externo que había comenzado a mediados de la primera década del siglo. Más aún, ese proceso no va dirigido a financiar la inversión productiva, sino a sostener el valor de las monedas nacionales. Y como contrapartida implica aceptar el tradicional paquete de medidas de ajuste que emanan de las instituciones financieras internacionales.

Paralelamente, con la justificación de combatir la corrupción, facilitar la inversión productiva y mejorar la inserción económica internacional a través de las cadenas globales de valor, ha comenzado un nuevo ciclo de privatización de los sectores estratégicos de las economías sudamericanas. Únase a esto que las nuevas inversiones extranjeras serán beneficiadas con un marco regulatorio flexible, donde destaca la reducción considerable de las tasas impositivas, como medida destinada a fomentar dicha inversión.

Un factor a tomar en cuenta, es la enorme presión que en términos de riesgo-país (según las agencias calificadoras) se genera como consecuencia de la inestabilidad política. Los casos de Brasil y Venezuela, permiten comprender los efectos negativos de un proceso de *impeachment* presidencial, o de enfrentar una prolongada y

desgastante violencia callejera combinada con el desabastecimiento de bienes. En términos poco prolijos, algunos de los efectos más notables son: fuga de capitales, descenso de la inversión externa, inflación.

Por otra parte, hay que considerar el nuevo protagonismo de la República Popular China en su relación con las economías sudamericanas. Ciertamente China se ha convertido en la mayor fuente de financiamiento externo para América Latina y el Caribe, entre 2005 y 2015 (125 mil millones de dólares estadounidenses-USD). Incluso ha roto una vieja tendencia geográfica de las exportaciones, en las que los países sudamericanos ribereños con el Océano Pacífico concentraban sus exportaciones en Estados Unidos, a la vez que los del Atlántico (salvo Venezuela) hacían algo similar, pero con Europa. Chile, Perú y Brasil pasaron a tener como principal socio comercial a China. La gran interrogante es en qué sectores se concentrarán las adquisiciones chinas, toda vez que su mercado interno ha comenzado a cambiar sus patrones de consumo y demandar bienes de mayor valor agregado, y menos productos primarios. El mayor potencial exportador latinoamericano pudiera concentrarse en el sector agroalimentario —si no saturan el mercado con una sobreoferta, como ya sucedió en 2017 con algunos productos colombianos— y en el de los servicios. Los mayores afectados serían los sectores minero-metalúrgico y petrolero.

Si los sudamericanos quisieran obtener el mayor beneficio posible en su relación económica-financiera-comercial con China, tendrían que reforzar su integración para viabilizar proyectos de escala regional que fueran sostenibles ambientalmente. Esto sería igualmente útil en el marco del TPP, aún con la ausencia de Estados Unidos.

En la medida en que la presencia económica, financiera, comercial y tecnológica de la República Popular China sea percibida desde un sector del bloque de poder estadounidense como un desafío a su hegemonía en lo que consideran su área natural de reproducción de su poderío, en esa fisura en el capitalismo global, es posible entonces pujar por profundizar mayores márgenes de autonomía, siempre que esto coincida con la voluntad política de la clase dominante en cada país. Nótese que omito referirme a los proyectos emancipatorios, pues estos, aunque también pudieran beneficiarse, se encuentran sometidos a tensiones internas, que lógicamente incluyen al sector productivo.

### **Latinoamérica: giro a la derecha y criminalización de la oposición política y social**

Habría que considerar la hipótesis de que el proceso de emergencia de gobiernos nacionalistas-desarrollistas fue, además de una consecuencia de las luchas populares, expresión de una retirada estratégica de los sectores más conservadores y reaccionarios de la política regional, con la finalidad de transferir la administración de la crisis, preservar la legitimidad del sistema y evitar procesos de mayor radicalización política.

En todos los casos, el acceso del progresismo al gobierno implicó en no pocas ocasiones la aceptación de una «camisa de fuerza» institucional, alianzas tácticas con fuerzas políticas con mayor capacidad de articulación y compromisos frente a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI's). Paralelamente, en ese mismo sentido, habría que entender el nuevo constitucionalismo sudamericano como el resultado de una búsqueda de consensos y la afirmación de un nuevo pacto social que condujera a la modernización de esos Estados-nacionales en el contexto de los actuales procesos globalizatorios. Si bien es cierto que el nuevo marco jurídico expresa un acervo más amplio de derechos económicos, políticos y sociales, no siempre se logró fomentar las garantías materiales para su ejercicio. El nuevo constitucionalismo latinoamericano sustituyó un marco jurídico obsoleto para las nuevas necesidades del capitalismo en el siglo XXI.

A esa primera época de «retirada estratégica», siguió una de «desgaste activo», con el empleo combinado de ONG's que pervierten y contraponen actores sociales, fracturas de coaliciones, permanente ataque multimediático, empleo mínimo de recursos violentos (considerados menos legítimos o ilegítimos en la tradición política regional) y la persecución judicial de los políticos que habían protagonizado el liderazgo, no solo desde la presidencia, sino también en las bases sociales de los gobiernos progresistas.

La concentración de la conducción de los procesos políticos que aspiraban al cambio en un liderazgo carismático y personal, funcionó de manera simultánea como una fortaleza y debilidad. No debe ignorarse que ese ejercicio de poder está limitado por reglas preestablecidas de una cultura política donde la reelección continua y la permanencia por largo tiempo como primer mandatario, no es apreciada como condición

necesaria para asegurar cambios políticos y sociales progresivos, sino como una expresión antidemocrática. Esto es lo que padecieron Lula, Chávez, Correa, Evo y los Kirchner.

Al desaparecer ese liderazgo por muerte física o política, o por ausencia de mecanismos constitucionales que permitan la continuidad y legitimidad del progresismo, los procesos quedaron acéfalos y huérfanos. Cristina Fernández tuvo en Scioli un magro candidato de relevo a su presidencia, con un perfil personal y programa político no muy diferente al de Macri; Correa tuvo que asumir su reemplazo con la candidatura de Lenin Moreno —quien en poco tiempo ha demostrado la fragilidad de una formación tan plural como Alianza País, revirtiendo las políticas de su antecesor, tanto en su dimensión interna como internacional—; a la muerte del presidente Chávez, las fuerzas bolivarianas, pese a sus disensos internos, han tratado de recomponerse en medio de la turbulencia en torno al presidente Nicolás Maduro; Evo Morales ha buscado múltiples opciones para reelegirse, pues otro candidato tendría menos posibilidades de continuar el proyecto del gobierno del IPSP-MAS y sus aliados.

Si bien es cierto que el carisma político no se transfiere, ya que depende de las cualidades de cada líder, la única posibilidad de saldar esa deuda es promoviendo una construcción política diferente, de naturaleza colectiva y sin protagonismos personales. A Lula le cercenaron su primera opción de candidato, y luego removieron a Dilma Rousseff en su segundo mandato. Esto explica en parte, el porqué del ensañamiento del sistema judicial brasileño para impedir una nueva postulación de Lula, pues claro estaba que no tenía un relevo. El «progresismo» o la «izquierda» latinoamericana (entendiendo por esta a una diversidad de gradaciones cuyo denominador es la lucha contra el conjunto de dominaciones solapadas en la política, particularmente la de naturaleza neoliberal) padece de una orfandad de liderazgos. Muchos de estos problemas no son nuevos y ya estaban descritos en la propuesta que hicieron Ciro Gómez y Roberto Mangabeira a mediados de los años 90 del pasado siglo.<sup>1</sup>

No se puede menospreciar un asunto clave para la política, en especial para los «progresismos» en tanto asumen un discurso, prácticas e identidad de izquierdas. Si comprendemos que la ética y la

<sup>1</sup> Ciro Gómez y Roberto Mangabeira Unger: *O próximo passo: uma alternativa prática ao neoliberalismo*, Topbooks, Rio de Janeiro, 1996, pp. 38-40 y 140-155.



moral, pese a mantener un acervo común en las sociedades, también tienen un prisma ideológico y político, entonces no resultará difícil asumir que la ética política y la moral del «progresismo» y de «las izquierdas» deben ser y parecer diferentes al de la Derecha. El tema sensible de la corrupción, fenómeno de antaño que atañe al comportamiento de los servidores/funcionarios públicos, si bien tiene un costo para cualquier político, es de mayor gravedad cuando sucede con la participación o, por lo menos, ante la pasividad de las fuerzas progresistas.

Los casos recientes de Lava Jato y Petrolão, así como el de los Papeles de Panamá, no dejan dudas acerca de los vínculos de la política regional con los delitos de «cuello blanco». Pero remarcan a su vez el carácter selectivo de la aplicación de la justicia. Macri ha sido cuestionado duramente, pero no está sometido a la presión de un proceso judicial. Sin embargo, la función judicial trata de mantener una apariencia de imparcialidad en su desempeño. Así en Colombia, ante la extensión transfronteriza de los sobornos pagados por Odebrecht, el ex senador uribista Otto Bula fue capturado y entregado a la justicia. Si bien el ámbito político peruano ha mostrado ser uno de los más corruptos en la región, el enjuiciamiento en el pasado y en el presente del expresidente Alberto Fujimori, y los actuales procesos abiertos contra la excandidata y lideresa del fujimorismo Keiko Fujimori, así como de los expresidentes Alan García Pérez,<sup>2</sup> Ollanta Humala Tasso, Alejandro Toledo y la renuncia forzada, acompañada de una medida cautelar que le impide viajar al exterior, contra Pedro Pablo Kuczynski, pretende marcar una ruta de «honestidad». En Brasil Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados, fue destituido, y el expresidente Temer ha sido detenido para ser procesado judicialmente.

Hay que resaltar que los cambios de gobierno y su «reforzamiento» se están generando por vía electoral o judicial, tratando de involucrar lo menos posible a las fuerzas armadas, que se mantienen en apariencia como institución respetuosa y subordinada del poder público. Si

<sup>2</sup> El suicidio de Alan García Pérez, al publicarse otros elementos que fundamentaban la acusación de corrupción vinculados a Odebrecht, así como la sentencia judicial de prisión preventiva por tres años contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, confirman el desmoronamiento de la política y los políticos tradicionales del Perú. Queda así abierta la puerta hacia un futuro totalmente desconocido, donde se entremezclan la posibilidad de que dichos partidos se reconstruyan sobre la base de un nuevo liderazgo, y también la emergencia de otras fuerzas políticas que, desde la izquierda y la derecha, pulsen por una disputa del poder político.

hacemos una mirada rápida, Fernando Lugo y Dilma Rouseff fueron depuestos después de juicios políticos. El papel estratégico de las instituciones judiciales al servicio de las oligarquías nacionales sudamericanas ha sido impedir el ascenso de líderes políticos —caso de Piedad Córdoba en Colombia, y de la lideresa en prisión del Movimiento Túpac Amaru en Argentina—, o la «muerte política» de Dilma y Lula, incapacitado para presentarse como candidato presidencial por el PT y sus fuerzas aliadas. Hay procesos legales para enjuiciar a Rafael Correa en Ecuador, y Raúl Séndic en Uruguay, y está el decurso legal del caso Nisman-AMIA contra Cristina Fernández en Argentina, y el proceso seguido contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. La Derecha política está «blindando» su permanencia en el poder al descalificar políticamente a sus principales rivales.

Lo anterior no significa que se haya eliminado el empleo de la violencia política, tal como se aprecia en el caso venezolano —contra militantes, simpatizantes o líderes del chavismo— y la eliminación de líderes sociales y desmovilizados de las FARC-EP en Colombia —concentrado en un grupo social determinado—, o de manera individual, como sucedió con Santiago Maldonado en Argentina y recientemente contra Marielle Franco, líder regional del PSOL, en Brasil. Ello implica que el recurso del exterminio físico está siendo empleado en «dosis mínimas» para atemorizar a las sociedades con el fantasma del Terrorismo de Estado, que fue práctica común en la época de los 70 e inicios de los 80 del pasado siglo.

La victoria de Jair Bolsonaro ha permitido que afloren a nivel continental los nostálgicos de las dictaduras militares y del orden dictatorial. Existe una posibilidad de que la violencia ejercida desde el Estado se transforme nuevamente en genocidio político contra los partidos y organizaciones sociales y políticas identificados genéricamente como de Izquierda. Peor aún, existe la posibilidad de que una especie de Termidor se extienda y alcance incluso a fuerzas que hoy se ubican en la Derecha moderada, pero que comparten ideologías, valores y prácticas consustanciales a una matriz liberal-democrática. Todo ello configura un escenario, aún menor, de una «avalancha» de los sectores más conservadores y autoritarios, refractarios a cualquier política social inclusiva, que generarían condiciones de posibilidad para que el capital transnacional encuentre no solo un Estado reducido, sino condiciones ideales para generar mayor

plusvalía y acceder casi sin límites políticos y jurídicos a un ciclo vigoroso de saqueo de los recursos naturales, transferencia de costos productivos ambientales y un incremento notable en la tasa de retorno de sus ganancias.

En el caso concreto de Colombia, el Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana sufrió un primer revés tras la consulta popular en la que por estrecho margen fue derrotada la opción que favorecía su implementación. Así, fue sometido a revisión, aceptándose a pie juntillas todas las reformulaciones impuestas por el uribismo. Tras la nueva versión del texto del acuerdo, ha quedado pendiente el tema de la justicia transicional —cuestionada por el actual presidente Iván Duque—, así como la implementación efectiva de programas que permitan la reinserción social y económica de los desmovilizados. Las FARC-EP cumplieron no solo con el cronograma de concentración en las denominadas *zonas veredales*, sino que también se desmantelaron militarmente al realizar la entrega de armas bajo verificación internacional,<sup>3</sup> y hacer público el listado de bienes que componían su patrimonio. Pero la inseguridad ante la presencia activa de grupos paramilitares en las antiguas zonas bajo control guerrillero, los problemas de infraestructura y servicios básicos, y la cuestión de los proyectos productivos, en especial los vinculados al sector agrario, han desestimulado a los guerrilleros desmovilizados. La Misión de la ONU en Colombia tiene cifras controversiales sobre el abandono de esas zonas por poco más de la mitad de los desmovilizados —y proporcionalmente mayor impacto en los ex mandos medios—, algunos de los cuales estarían asociándose, como forma de subsistencia económica, a grupos paramilitares o criminales. Aunque se reconoce que muchos de estos desmovilizados se han desplazado a zonas de reencuentro con su familia.

Tras la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, proceso electoral que estuvo marcado por el asesinato y las amenazas a la vida de líderes sociales y políticos de la izquierda colombiana, y en particular de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), parece casi inviable la aplicación de lo alcanzado en la negociación de paz. Iván Duque representa a los sectores más radicales de la derecha

<sup>3</sup> León Valencia Agudelo (comp.): *Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo: a un año del acuerdo de paz*, Fundación Paz & Reconciliación, Bogotá D.C., 2017, p. 20.

colombiana, y es favorable a la revisión de los acuerdos, en especial el tema de la jurisdicción especial para la paz. Es notorio que hay acusaciones contra dirigentes de la otrora guerrilla y hoy partido político, que pretenden castrar su legitimidad política e histórica atacando su liderazgo.

### **De vuelta a la exclusión: el efecto social del neoliberalismo 3.0**

Históricamente, en Sudamérica hay dos etapas iniciales de reforma neoliberal: la del experimento chileno de los *Chicago boys* en la época de Pinochet, y una segunda y mucho más amplia, que entendemos como resultado del Consenso de Washington. Tras el retorno de los gobiernos de Derecha, como superación del período de los gobiernos que varios autores han denominado *postneoliberalismo*, las nuevas políticas de recorte del gasto social aplicadas en Argentina y Brasil, unidas al encarecimiento de los servicios básicos y la inflación en la economía, han perjudicado notablemente al ciudadano de las clases sociales menos favorecidas, e incluso vuelven a contraer a la clase media.

Hay que considerar que probablemente los actuales gobiernos orientados hacia la Derecha política sean parte de una transición institucional. Al adquirir el costo político en el corto plazo, por la aplicación de desmesuradas medidas de ajuste económico, dejan abierta la posibilidad de que emerjan gobiernos con igual signo ideológico, pero con políticas de estabilización económicas más racionales que le otorguen legitimidad política (policía bueno-policía malo). No debe pasarse por alto, que las extremas políticas regresivas asumidas por el gobierno *de facto* de Michel Temer en Brasil, crearon un margen amplio para que cualquier reducción de su alcance negativo, por mínima que esta pueda ser, se traduzca en un efecto positivo y legitimador para la presidencia de Bolsonaro.

Hay varios asuntos que de manera imperiosa preocupan por su regresión en el ámbito latinoamericano: el empleo y su calidad, los salarios, el sistema de pensiones, y como se van preparando esas sociedades hacia un futuro en el que será cada vez más creciente su población de la tercera edad, lo cual demandará una mayor cobertura de servicios. Se puede afirmar que en la etapa de gobierno de Macri y Temer, el aumento del desempleo y la reducción notable de la inversión social,

incide negativamente no solo en términos de ingresos, sino también de adquisición de bienes y acceso a servicios básicos —estos por el incremento de las tarifas—. Adicionalmente, la presencia sustitutiva del Estado por instituciones privadas en la gestión de los fondos de pensiones, tal como es el caso de Chile, afecta considerablemente el bienestar de los jubilados.

### **Procesos electorales: balance de lo que sucedió y perspectivas futuras**

Los años precedentes legaron detalles interesantes sobre el comportamiento de los procesos electorales latinoamericanos, especialmente para comprender el llamado «giro a la derecha».

En 2015, en las presidenciales argentinas terminó la época de gobierno kirchnerista. Influyó la división del voto peronista —Scioli se presentaba solo como el candidato del Frente para la Victoria (FPV)—, más la ausencia de una diferencia radical en el discurso y en el programa del FPV y Cambiemos. También resultó de dudosa eficacia el forzado distanciamiento que tomó Scioli de Cristina Fernández.

Con la llegada de Macri a la Casa Rosada, Argentina retomó una política exterior muy parecida a la «relación carnal» con Estados Unidos. También se produjo un cambio notable en el ejercicio de los cargos públicos con el nombramiento de un gabinete de empresarios, con una visión opuesta y crítica respecto al modelo económico de la era Kirchner. Pese a generar una avalancha de medidas impopulares, Macri ha logrado establecer una cómoda bancada en el legislativo, negociando con el Bloque Justicialista —escisión del FPV— y con el Frente Renovador, para lograr una mayoría con la cual imponer los temas de su agenda en ese ámbito.

En 2016, se celebraron elecciones congresionales y presidenciales en Perú. Aunque la izquierda peruana renació electoralmente con la candidatura de Verónica Mendoza por el Frente Amplio, y esa fuerza se convirtió en la primera minoría —beneficiada en parte por el retiro de la candidatura del Partido Nacionalista Peruano (PNP) del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, aún está por determinar el costo político que en lo personal puede representar el hecho de que llamara a sus partidarios a votar por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien ganó la presidencia frente a Keiko Fujimori en segunda vuelta. La hija del

expresidente Alberto Fujimori, tenía un programa conservador en lo político y liberal en lo económico, y su candidatura estuvo afectada por escándalos de corrupción por los fondos de financiación de su campaña electoral, que algunos alegan proceden del narcotráfico. Como se conoce, la debilidad en el legislativo de PPK lo llevó a aceptar, ante una moción de censura, el apoyo de parte de la bancada fujimorista —coordinada por Kenji Fujimori— a cambio del indulto presidencial por «cuestiones de salud» a favor de Alberto Fujimori. El escándalo político subsecuente, junto a alegaciones de corrupción —caso Odebrecht—, precipitó su renuncia.

Las elecciones presidenciales en Chile enfrentaron a fines de 2017 a Sebastián Piñera frente al candidato de izquierda Alejandro Guillier. La derrota de este último representó un retroceso sustancial, pues su agenda incluía la reforma de la Constitución vigente (promulgada en la época de Pinochet), el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios (en especial los mapuches) y la eliminación de la Ley del Cobre, que transfiere automáticamente buena parte de los beneficios de la compañía estatal chilena al gasto de defensa. Piñera prometió dar solución a problemas que inciden directamente en el ciudadano común: pobreza, desempleo, seguridad ciudadana y el costo del sistema de salud. Pero el voto dividido de la izquierda en primera vuelta y la abstención de una parte en segunda, favoreció a Piñera. Influyó también en la derrota de Guillier el escándalo que vinculaba con la corrupción al hijo de Bachelet y a su nuera. No obstante, la principal interrogante es cómo piensa resolver los problemas económicos cuando más de la mitad de los trabajadores percibe salarios por debajo de la línea de pobreza, existiendo además una brecha social profunda, toda vez que el 1% de la población concentra el 33% de la riqueza.

Las elecciones de Ecuador estuvieron matizadas, no solo por el acercamiento mediático de Lenin Moreno a la oposición a Correa, sino también por el enjuiciamiento y sentencia a prisión del exvicepresidente Jorge Glas, acusado de recibir sobornos de Odebrecht cuando era Ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012. El conflicto que enfrenta a Lenin Moreno y Rafael Correa dividió a Alianza País, pero se tradujo también en el establecimiento de alianzas entre Moreno y sectores de la oligarquía ecuatoriana, que brindaron su apoyo político para que resultara electo en la segunda vuelta. Los

efectos inmediatos se perciben en el recibimiento de altos oficiales del Comando Sur, así como en la reducción de la comunicación que sostiene Julian Assange, fundador de Wikileaks, con el Mundo. Assange pasó de estar confinado en la sede diplomática ecuatoriana en Londres, a ser detenido por las autoridades británicas.<sup>4</sup> Resta por ver si finalmente el Reino Unido procederá a extraditarlo a Estados Unidos. El realineamiento de Lenin Moreno con la derecha latinoamericana es apreciable en la decisión de su gobierno de solicitar la salida de su país de UNASUR y sus severas críticas hacia el gobierno de Nicolás Maduro.

En 2018 la disputa electoral entre la oleada conservadora y progresista se mantiene: 4 de febrero: Costa Rica; 4 de marzo: Elecciones municipales y parlamentarias en El Salvador; 22 de abril: Paraguay; 20 de mayo: Venezuela; 27 de mayo (primera vuelta) y 17 de junio (segunda vuelta); 1 de julio: México; 7 de octubre (primera vuelta) y 28 de octubre (segunda vuelta): Brasil.

En las elecciones presidenciales en Costa Rica, Carlos Alvarado, candidato oficialista por el Partido Acción Ciudadana (PAC) se impuso en la segunda vuelta frente al ganador de la primera, Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN). De este modo, Carlos Alvarado será quien gobierne entre 2018 y 2022, evitando el arribo del movimiento evangélico a la Presidencia de la República de Costa Rica.

Paraguay celebró en diciembre pasado sus primeras elecciones internas, especialmente para definir el candidato de la gobernante Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado), entre Santiago Peña (candidato del presidente Horacio Cartes) y Mario Abdo Benítez, de un sec-

<sup>4</sup> Tras una serie de excusas, refutadas tanto por sus abogados defensores como por exdiplomáticos ecuatorianos en su legación en Reino Unido, el gobierno de Lenin Moreno retiró de forma escandalosa la ciudadanía ecuatoriana y el asilo diplomático que habían sido otorgados a Assange. Muchas de las «razones» que argumentaron tanto el presidente Moreno como sus ministros de exteriores e interior, van desde las poco probables actividades de espionaje contra otros gobiernos coordinadas por Assange junto a sus correligionarios de Wikileaks, hasta conductas que rayan con el comportamiento de una persona con una patología psiquiátrica. Lo cierto es que el profundo malestar de Lenin Moreno nace de las revelaciones de los llamados Ina Papers, que vinculan al actual mandatario ecuatoriano y miembros de su familia con lavado de dinero, cuentas en paraísos fiscales y empresas *off-shore*. Este patrimonio, adquirido de forma supuestamente ilegal, habría sido empleado en beneficio propio para adquirir bienes y servicios, entre ellos propiedades inmuebles en España. Sin embargo, a esto se une el préstamo aprobado por el FMI de 4200 millones de dólares estadounidenses al Ecuador, que para algunas fuentes sería parte del «pago» por la entrega de Assange.

tor disidente del mismo partido. Como contendiente se encuentra la alianza Ganar, conformada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la izquierda organizada en el Frente Guasu. Esta última organización ha sido ambivalente, pues algunos de sus representantes en el legislativo habían firmado, junto a otros del Partido Colorado, un documento para facilitar la reelección de Cartes, quizás con la intención de beneficiar con ello al expresidente Fernando Lugo. El candidato del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, quien ha sido crítico de la gestión de Cartes, logra imponerse ante el candidato del PLRA-Frente Guasú, Efraín Alegre.

Con el 99,67 % de las mesas escrutadas, los más de 4,2 millones de ciudadanos habilitados para votar registraron una participación de tan solo el 61,40 %. Mario Abdo Benítez, candidato derechista de Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, se impuso con el 46,44% de los votos sobre Efraín Alegre, candidato liberal de Alianza Ganar —Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Frente Guasú (FG)—, quien obtuvo el 42,74% de los votos.

Los electores optaron por la continuidad de un gobierno de derecha, muy vinculado con los sectores agroexportadores, sin respuesta alguna a la situación de emergencia social que vive el país, donde más de un cuarto de la población sigue en la miseria, mientras el PIB mantiene un crecimiento sostenido del 4,5 %. Continúa siendo el país más pobre de Sudamérica, al tiempo que el Partido Colorado sigue comandando los destinos del país y con ello aumenta el giro neoliberal en la región.

Las elecciones primarias y legislativas en Colombia, dejaron un espectro fragmentado, pero con tintes de derecha. De 108 senadores, los partidos más a la derecha se hicieron de 50 curules —Centro Democrático, 19, Cambio Radical, 16, y Partido Conservador, 15—. Las fuerzas políticas de centro-izquierda representan la cuarta parte del Senado —Alianza Verde, 10, Polo Democrático Alternativo, 5, los Decentes, 4, y FARC, 5—. A ellos se deben sumar dos Senadores indígenas cuyo voto casi siempre se alinea a este bloque.

Una vez que Iván Duque ha tomado posesión, y en el contexto de una fragmentación política del legislativo, es probable que se intente llegar a acuerdos coyunturales, o que la derecha «reviva» la coalición de gobierno «Unidad Nacional», integrada por el Partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido Conservador, con la finalidad de hacer viable las políticas del nuevo gobierno electo.



En Venezuela, el 20 de mayo se efectuarán los comicios presidenciales (2019- 2025) y la elección de los Consejos Estadales y los Cabildos o Consejos Municipales (2018-2021). El candidato de continuidad de la Revolución Bolivariana Nicolás Maduro Moros fue reelegido con más de 6 millones de votos, lo que representa 4 millones de votos superior al candidato Henri Falcón —Avanzada Progresista (AP), Partido Movimiento al Socialismo (MAS) y Partido Socialcristiano (COPEI)—.

No obstante, los niveles de polarización política, la situación económica, los niveles de desabastecimiento e inflación y la guerra mediática, entre otros factores, mantuvieron elevados los niveles de incertidumbre de los pronósticos electorales. El triunfo electoral del candidato Nicolás Maduro resultó convincente en relación al resto de los candidatos, sin desconocer el significativo índice de abstencionismo registrado en dichos comicios, el mayor desde 1958.

2018 es un año clave en Bolivia para la conformación de candidaturas de cara a las elecciones presidenciales a final de 2019. Evo Morales pudiera ser la opción que garantice la continuidad del IPSP-MAS, y profundice los cambios con la implementación de la Agenda Patriótica 2025. A él se le opone Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, con su propuesta de Federalismo para Bolivia y el liberal Samuel Doria Medina de Unidad Nacional. Sin embargo, aún pueden presentarse otros candidatos, especialmente alguno que logre captar los disensos en la Central Obrera Boliviana y en segmentos de la población originaria. A inicios de enero, al prolongado paro médico se unió un paro cívico en Santa Cruz, que obligó a Evo Morales a acceder a la petición de abrogación del Código Penal.

En el caso de México, tras una victoria arrasadora en las gobernaciones y otros cargos electivos, triunfó el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador. Aún sin asumir la presidencia, AMLO ha dejado claro que sus principales prioridades son los servicios básicos a la población, y el tema de la inseguridad ciudadana, pero con un enfoque que, lejos de hacer énfasis en el enfrentamiento armado a los cárteles del narcotráfico, hace hincapié en la solución de los problemas de orden social y económico que han empoderado al crimen organizado. Quizás lo cuestionable es que, sin asumir el cargo, sea su protagonismo el que haya influido en la renegociación del TLCAN sin la participación de Canadá.

### **De cara al futuro: qué podría suceder.**

La derecha sudamericana podría consolidarse institucionalmente en un número importante de países, alineándose con Estados Unidos en política exterior, y provocando un aislamiento creciente de Bolivia y Venezuela, países donde se sostienen proyectos progresistas, pero con un notable costo político. Pese a todo, las fuerzas progresistas de una izquierda menos radical, lograrían posicionarse de manera visible en Chile, Paraguay y Perú. En Ecuador, la reversión sustancial de las políticas sociales y económicas implementadas durante el gobierno de Rafael Correa, aunque con resistencias de múltiples sectores y en particular de aquellos que constituyeron un nuevo movimiento político junto al expresidente Correa, podrían abrir el espacio para el retorno al gobierno a la partidocracia tradicional que había sido desplazada a un papel secundario durante la Revolución Ciudadana.

En Colombia el incumplimiento de los acuerdos de paz, y la ruptura de los diálogos con la insurgencia armada del ELN, provocaría un sustancial incremento de la violencia política. En ese contexto, es probable un fracaso de la inserción política de las FARC como partido legal. Esto incidiría en que una fracción de sus cuadros y militantes desistan de la experiencia legal, alejándose de la política, siendo absorbidos por otras fuerzas de la centro-izquierda, reintegrándose a la lucha armada o siendo cooptados por los grupos armados paramilitares o las estructuras de poder sobre las que se asienta la oligarquía colombiana.

El fracaso de la imposición maximalista de una agenda neoliberal en Argentina y Brasil puede conducir a un ciclo de reformas que atenúen sus consecuencias sociales. Consideremos que, en aras de preservar la legitimidad y estabilidad del sistema, tanto el gobierno de Bolsonaro<sup>5</sup> como el de Macri en un segundo mandato —o, preferentemente, un sucesor desde la Derecha—, podría reducir la profundidad de las políticas económicas y sociales de corte neoliberal, implementándose otras de igual matriz, pero con sentido común. Cualquier reducción de las políticas de Temer o de Macri resultaría en una ganancia política. Ello contribuiría a una alternancia entre fuerzas que responden a las elites políticas y empresariales en Argentina y Brasil.

<sup>5</sup> La trayectoria política de Bolsonaro, en la que hacía énfasis en un Estado con un rol importante en la economía, pudiera colisionar con la de su ministro de economía, clásico *Chicago boy* a favor de la privatización de los activos del Estado.

Sin embargo, lo peor podría suceder si el futuro confirmara el fin del ciclo progresista en América del Sur, con la pérdida de los gobiernos en Bolivia y Venezuela. No obstante, queda una considerable fuerza social y política, que sobre la base del análisis crítico de sus errores comienza un complejo proceso de reorganización, no exento de contradicciones en su interior.

Los procesos de integración nacidos desde el progresismo y cuya estructura institucional aún permanecen, podrían terminar refuncionalizados de acuerdo a los fines de las oligarquías transnacionales. Todavía existe la posibilidad de que sean empleados como mecanismos de inserción internacional y diálogo interregional, en especial ante la posibilidad de mantener una relación equilibrada frente a Estados Unidos, la Unión Europea y la región de Asia-Pacífico. Sin embargo, también existe la posibilidad de que desaparezcan *de facto*, como sugiere el caso de UNASUR.

Los actuales retrocesos de la izquierda latinoamericana no necesariamente hay que leerlos en clave de derrota. Es cierto que se han perdido importantes espacios que indicarían una derrota política de carácter estratégico en el escenario regional. Pero las temporalidades habría que asumirlas más que por la permanencia en el gobierno, en clave de acumulación de fuerzas, de masa crítica para emprender nuevos proyectos que superen los errores pasados y quizás se planteen de forma más persistente y profunda la construcción de una alternativa que no se limite al horizonte posneoliberal sino poscapitalista.

### **Desde la intimidad del pensamiento político: la noche es más oscura antes del amanecer**

La dialéctica nos enseña que nada es imposible, y existe la posibilidad de mayores retrocesos: la pérdida del gobierno en Bolivia, Nicaragua o Venezuela. A manera de hipótesis admitamos esa posibilidad, para hacer lo imposible por evitarla, y estar preparados en caso de que suceda. Ese escenario es muy negativo, pero las derrotas enseñan más que las victorias. Enseñan a ser humildes, a no confiarnos, a hacer las cosas mejor, a evitar los errores costosos y analizarlos críticamente sin autoflagelarnos. El mayor logro de esta época de gobiernos progresistas con que América Latina recibió el siglo XXI, son los millones de

personas, de ciudadanos que comenzaron a transformarse a sí mismos, a transformar su subjetividad. En ellos radica el potencial de cambio, la nueva acumulación de fuerzas para volver, más que a gobernar, a plantearse las alternativas de un cambio político radical y sustentable.

La izquierda latinoamericana ha de mirarse en el espejo del infatigable Bolívar. O asumimos el lapidario «hemos arado en el mar», o reaccionamos en positivo como «sociedades de las dificultades», capaces de resistir y simultáneamente construir un poder de naturaleza diferente. Hay que intentar, de tantas maneras como sea posible, la independencia real, política y económica. Hay que seguir construyendo esa alternativa socialmente justa y democrática, con participación protagónica de los ciudadanos en los procesos de socialización económica, política, social y del conocimiento.

Cada contexto nacional determinará cuáles son las formas de lucha política apropiadas, incluidas aquellas que quizás hoy parezcan obsoletas. Las formas de lucha que nos parecen superadas pudieran retornar. Tocaré de acuerdo a las condiciones históricas de cada país, que sus movimientos sociales y organizaciones políticas populares, progresistas, de Izquierda(s), definan las vías concretas para construir poder popular, nuevos consensos y una hegemonía emancipadora. Eso no está escrito en ningún manual, no es parte de ningún catecismo político, ni es mera cuestión retórica o teórica, ni siquiera trabajo desde la academia. Ese futuro emergerá de las luchas populares cotidianas, y quizás no sea lejano: los tiempos históricos son bastante variables y pueden sorprendernos.

# La economía venezolana: Temas críticos en un entorno de complejidad

Claudia Marín Suárez

*claudia@cipi.cu*

Máster en Economía.

Investigadora Agregada del CIPI.

## **Resumen:**

La economía venezolana ha sido escenario de una severa crisis económica, que, aunque vinculada a dinámicas que datan del período de bonanza, se ha agudizado con la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional. Durante 2018, los desequilibrios económicos ya existentes se han profundizado de manera acelerada.

La aplicación de nuevas y severas sanciones económicas por parte de la administración estadounidense de Donald J. Trump, como parte de una política de cambio de régimen hacia el país suramericano, además de reforzar esa tendencia, impone límites aún mayores a la capacidad del ejecutivo bolivariano para estabilizar una economía deformada que ha visto postergadas desde hace varios años las transformaciones estructurales que necesita, y obstaculiza cualquier esfuerzo gubernamental de salida de la crisis.

El artículo profundiza en las principales dinámicas que explican la complejidad del actual contexto económico venezolano y los reducidos grados de libertad del gobierno para estabilizar la economía. En ese sentido, se pone el énfasis en tres fenómenos clave: la producción petrolera, la hiperinflación y el endeudamiento externo. Además, se dedica un espacio a las medidas de recuperación planteadas por el gobierno bolivariano y al impacto de las sanciones económicas estadounidenses a ese país.

**Palabras clave:**

Economía, Venezuela, crisis económica, bloqueo económico, sanciones, producción petrolera, deuda externa, inflación.

**Abstract:**

*The Venezuelan economy has witnessed a severe crisis since previous years, which has worsened with the fall in oil prices in the international market. During 2018, the existing economic imbalances have deepened in an accelerated manner.*

*The application of new and severe economic sanctions by the US administration of Donald J. Trump, as central core of a regime change policy, imposes even greater limits on the ability of the Bolivarian executive to stabilize a deformed economy that has postponed for several years the structural transformations needed, and at the same time it becomes a major obstacle to any governmental effort to overcome the economic crisis.*

*The article explores the key dynamics that explain the complexity of the current Venezuelan economic scenario and the government capacity to stabilize the economy. In that sense, the emphasis is placed on three key phenomena: oil production, hyperinflation and external debt. In addition, the article analyzes some of the recovery measures proposed by the Bolivarian government and the impact of US economic sanctions on that country.*

**Keywords:**

*Economy, Venezuela, economic crisis, economic blockade, sanctions, oil production, external debt, inflation.*<sup>1</sup>

**Introducción**

Si bien Venezuela ha sido desde años atrás una especie de laboratorio para aplicar los más diversos instrumentos de la llamada Guerra de Cuarta Generación, en la coyuntura actual se ha convertido en blanco de fuertes ataques externos en frentes simultáneos —político, diplomático, económico, militar, etc.—, con un impacto que trasciende con creces al sector gubernamental para afectar directa e indirectamente al ciudadano común.

<sup>1</sup> Este artículo es una actualización de la ponencia presentada en la IV Conferencia de Estudios Estratégicos, organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional en La Habana, entre el 24 y el 26 de octubre de 2018.

La elevada polarización política y social interna y las agresiones externas, articuladas con una agresiva oposición interna, han derivado en una situación política tensa, cuyo impacto ha trascendido al ámbito regional e internacional, de manera que las posiciones respecto al proceso político que vive el país desde 1999 polarizan el debate regional e internacional. Es un proceso en franco desarrollo que contrapone los ataques subversivos internos y externos a la resistencia de las fuerzas progresistas que defienden un proyecto político de soberanía y autodeterminación.

Lo que está en juego, entonces, no es únicamente la preservación de ese proyecto nacional, sino las expectativas de cambio de las fuerzas progresistas y de izquierda a nivel regional en un momento donde la correlación de fuerzas de la región se inclina en un sentido totalmente opuesto. Esto último ha configurado un escenario adverso para el gobierno bolivariano, que es blanco de constantes agresiones diplomáticas, al punto de desconocerse incluso su legitimidad en favor del autoproclamado Juan Guaidó, y de considerarse como recurso factible, aunque poco probable, la opción militar.

El gobierno estadounidense ha desatado una poderosa ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro, que no queda fuera de su disputa hegemónica con otros actores globales, ni tampoco del escenario preelectoral de cara al 2020. En una estrategia que persigue el cambio de régimen en el país, apuesta a incentivar una ruptura de la unión cívico-militar que hoy respalda al gobierno venezolano, a través de presiones de todo tipo e intensidad, tanto directas como a terceros, y que se hacen especialmente cruentas en su dimensión económica por los efectos nocivos que provoca a nivel de la sociedad.

En ese contexto, la compleja situación económica del país adquiere cada vez más centralidad y plantea a la Revolución Bolivariana retos de una dimensión mayor. En medio de un complicado y polarizado escenario político, y de constantes ataques internos y externos, la agudización de los desequilibrios económicos y el deterioro de las condiciones de vida del ciudadano medio devienen factores de gran relevancia en la preservación de los niveles de apoyo popular.

El presente artículo pretende profundizar en los determinantes de la actual coyuntura económica, haciendo énfasis en los principales

fenómenos que explican su complejidad y limitan la capacidad gubernamental para estabilizar la economía. En ese sentido, el alcance del trabajo se limita al diagnóstico de la situación actual y no se pretende proponer posibles soluciones.

Aunque se alude a tendencias que datan de etapas anteriores, el análisis se concentra en el período más reciente, y en especial, en el desempeño económico durante 2018, en la medida en que los datos disponibles lo permiten.<sup>2</sup>

La economía venezolana desde hace algún tiempo ha estado inmersa en una severa crisis, agudizada con la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, pero vinculada a dinámicas que datan incluso del período de bonanza. Los desequilibrios económicos ya existentes se han profundizado aceleradamente durante 2018.

Desde 2014 el crecimiento económico ha mostrado una acentuada dinámica negativa, como resultado del deterioro de variables determinantes como el consumo, la inversión y la producción manufacturera. Según CEPAL, en 2018 la economía de Venezuela se contrajo por quinto año consecutivo alrededor de un 15%, lo que implica una caída acumulada de la actividad económica del 44% en comparación con los niveles de 2013.<sup>3</sup> Las tasas de decrecimiento trimestrales del PIB dan cuenta de esa dinámica, ubicándose en el tercer trimestre de 2018 por encima del 20%.

El deterioro de los ingresos fiscales, vinculados en una buena medida a los ingresos petroleros, y su relación con el volumen del gasto en programas sociales ha generado una ampliación del déficit fiscal, que ha sido financiado con una sostenida emisión monetaria, una de las múltiples causas de la espiral inflacionaria desatada en el país.

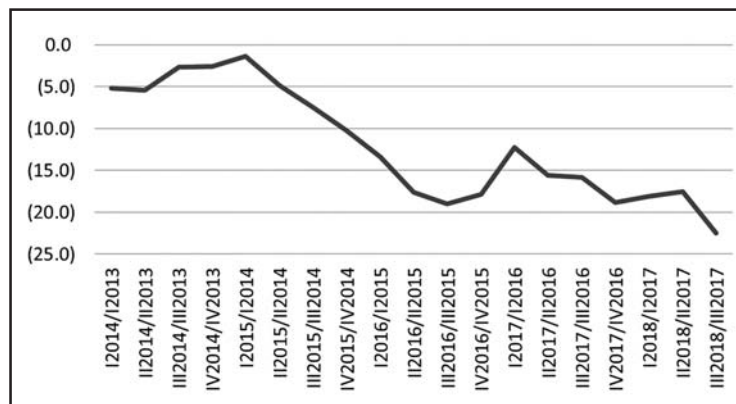
El origen de los desequilibrios económicos del país está vinculado al arraigado rentismo petrolero, que no pudo ser revertido durante el período de precios altos del petróleo en el mercado internacional. La

<sup>2</sup> La irregularidad en la publicación de datos estadísticos oficiales actualizados añaden mayor complejidad y riesgo a cualquier análisis o proyección a futuro sobre la economía venezolana. En ese sentido, en algunos casos ha sido necesario recurrir a datos, estimaciones y proyecciones no oficiales, provenientes de fuentes que en no pocas ocasiones están políticamente sesgadas, por lo que tienen, a los efectos de este trabajo, un carácter meramente referencial.

<sup>3</sup> CEPAL: *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018*. República Bolivariana de Venezuela. Santiago de Chile. Enero 2019. En: [http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44326/106/BPE2018\\_Venezuela\\_es.pdf](http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44326/106/BPE2018_Venezuela_es.pdf). Consultado el 20 de marzo de 2019.



**Gráfico 1: Tasas de crecimiento trimestrales del PIB de Venezuela (2014- tercer trimestre 2018) (%)**



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de BCV: Producto Interno Bruto. 2019.

elevada concentración productiva y del comercio exterior en el sector petrolero hicieron a la economía venezolana extremadamente vulnerable a las variaciones de los precios internacionales de los hidrocarburos. Ello, unido al manejo de la política económica, especialmente monetaria y cambiaria, y a la postergación de las inversiones necesarias tanto en el sector petrolero como para la diversificación productiva del país, llevaron a una acumulación de desequilibrios económicos y financieros que hoy resultan difíciles de corregir.

La aplicación de nuevas y severas sanciones económicas por parte de la administración estadounidense de Donald J. Trump, además de reforzar la tendencia económica recesiva, impone límites aún mayores a la capacidad real del ejecutivo bolivariano para estabilizar una economía deformada que ha visto postergadas las transformaciones estructurales que necesita.

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela han constituido, además de una medida unilateral coercitiva orientada a lograr un cambio de régimen en el país sudamericano, un factor agravante tanto por su impacto en los ingresos petroleros —fuente esencial de la que depende la economía venezolana—, como en la posibilidad de renegociación de la deuda externa y de realizar transacciones de todo tipo que aseguren un nivel de consumo interno adecuado para las necesidades básicas de la población, especialmente

de medicinas y alimentos. Nótese que aun cuando las exportaciones de petróleo de Venezuela se reorientaron fundamentalmente hacia países asiáticos como China y la India, en el momento de aplicación de las sanciones, Estados Unidos seguía siendo uno de los principales mercados del crudo venezolano.

El artículo aborda de una manera sintética las principales dinámicas que explican la complejidad del actual contexto económico venezolano y de los reducidos grados de libertad del gobierno para estabilizar la economía en el corto/mediano plazo. En ese sentido, se pone el énfasis en tres fenómenos clave: la producción petrolera, la hiperinflación y el endeudamiento externo. Además, se dedica un espacio a las medidas de recuperación planteadas por el gobierno bolivariano y al impacto de las sanciones económicas estadounidenses a ese país.

### **La producción petrolera y los problemas de PDVSA**

Durante 2018 y lo que va de 2019, los precios del petróleo, con algunas variaciones sobre todo a final del año, han mostrado una dinámica ascendente<sup>4</sup> y la cesta venezolana cerró con una media de 61,41 USD/barril, en niveles 31,61% superiores a los de 2017<sup>5</sup>. Sin embargo, la tendencia a la baja de la producción petrolera venezolana se ha acentuado hasta alcanzar valores mínimos en enero de 2019, lo que no ha permitido a la economía beneficiarse de la recuperación de los precios. Hasta ese momento, se había producido una caída acumulada de la producción petrolera de alrededor del 48,6% respecto a 2016, proceso que ya se había iniciado a una menor velocidad desde años anteriores.

El bajo performance petrolero venezolano ha estado asociado a la compleja situación operativa y financiera de PDVSA, que es la principal fuente de ingresos en divisas y concentra más del 90% de las exportaciones del país, lo que determina que las implicaciones alcancen a casi todas las esferas de la economía.

<sup>4</sup> OPEC: *Monthly Oil Market Report*. 12 February 2019.

<sup>5</sup> Banca y Negocios: «Desplome de la producción empaña alza de 31,6% del precio del petróleo venezolano». Diciembre 29, 2018. En: <http://www.bancaynegocios.com/desplome-de-la-produccion-empana-alza-de-316-del-precio-del-petroleo-venezolano/>. Consultado el 21 de marzo de 2019.

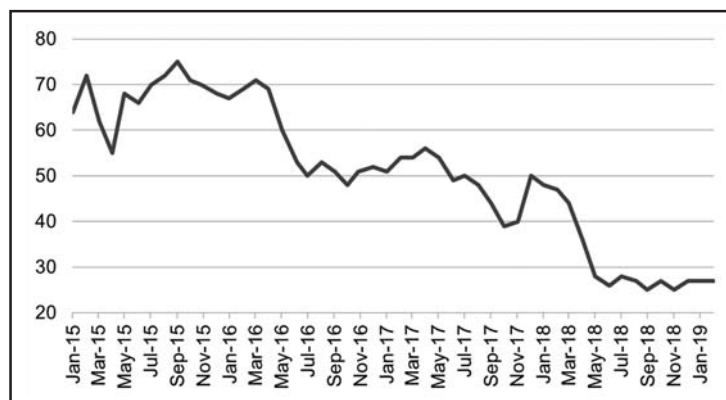
**Tabla 1. Producción de petróleo de Venezuela sobre la base de fuentes secundarias (millones de barriles diarios)**

2016	2017	2018	2018				2019
			IT	IIT	IIIT	IVT	
2.154	1.911	1.341	1.538	1.388	1.250	1.185	1.106

Fuente: OPEC: *Monthly Oil Market Report*. 12 February 2019.

La escasez de capital de PDVSA y la urgencia de inversión para aumentar la producción no son fenómenos nuevos, y se reflejan en una recurrente falta de mantenimiento y las fallas técnicas en las plantas de la empresa, que hacen que estas funcionen por debajo de su capacidad. Economist Intelligence Unit (EIU) estima las necesidades de financiamiento de PDVSA en alrededor de 10 000 millones de dólares anuales.<sup>6</sup>

Más allá de la propia producción petrolera, la dinámica de reducción de los taladros operativos de PDVSA refleja esa situación, que se

**Gráfico 2. Taladros operativos para la extracción de petróleo y gas de Venezuela (enero 2015-febrero 2019)**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Baker Hughes: *International RigCount for February 2019*. 03/07/19. En: <http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NzAoNzgz4fENoaWxkSUQ9NDE3MDE3fFR5cGU9MQ==&t=1>. Consultado el 22 de marzo de 2019.

<sup>6</sup> EIU: «PDVSA under pressure as debt comes due and output dwindles». October 17th, 2018. En: [http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=317252015&Country=Venezuela&topic=Economy\\_I](http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=317252015&Country=Venezuela&topic=Economy_I). Consultado el 1ro. de noviembre de 2018.

hizo más pronunciada a partir de 2016 para luego caer significativamente durante 2018. Según datos de Baker Hughes, una empresa propiedad de General Electric que reporta periódicamente el conteo de taladros activos de extracción de petróleo y gas a nivel mundial, Venezuela contaba con 27 taladros operativos en febrero de 2019, una cantidad bastante inferior a los 64 de que disponía el país en enero de 2015.

Ante este panorama, los problemas de la estatal petrolera para generar flujo de caja son notorios. Del total de la producción petrolera —ya deprimida—, solo una parte de los barriles son generadores de ingresos de caja para la empresa. Habría que descontar del total producido los que se destinan a honrar los acuerdos energéticos con Cuba y PetroCaribe y los compromisos con China y Rusia como parte de una modalidad de pago para saldar la deuda contraída por el gobierno con esos países, y además considerar la parte destinada al mercado interno, donde se expende combustible a precios muy bajos. Además, Venezuela desde hace algún tiempo ha presentado problemas, dada la caída de la producción petrolera, para asegurar los suministros a sus socios externos.<sup>7</sup>

A ello se suman las más recientes sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, que, a partir del 29 de enero de 2019, establecieron un bloqueo a las propiedades de PDVSA sujetas a su jurisdicción y prohibieron las transacciones de estadounidenses con la compañía, a excepción de ciertas actividades y transacciones de PDVH y CITGO —dos filiales de PDVSA radicadas en Estados Unidos— y otras empresas estadounidenses, inicialmente hasta el 27 de julio de 2019, así como la importación de petróleo de PDVSA de CITGO y otras compañías estadounidenses hasta el 28 de abril de ese año.<sup>8</sup> Más adelante, el plazo de autorización a las actividades de CITGO fue extendido a 18 meses.

<sup>7</sup> Según información de Reuters, en junio de 2018 se habrían producido cuellos de botella en los puertos venezolanos. Según esta misma fuente los contratos con la Corporación Nacional China de Petróleo (CNPC) se encontraban al 36% de cumplimiento, con Cuba al 67%, con Chevron al 74% y con la India al 0% para esa misma fecha. Cfr. Reuters: «PDVSA's exports sink in June amid seizures, shipping backlog», 20 de junio de 2018. En: <https://uk.reuters.com/article/uk-venezuela-pdvsa-exports/pdvsas-exports-sink-in-june-amid-seizures-shipping-backlog-data-idUKKBN1JG321>.

<sup>8</sup> Congressional Research Service: «Venezuela: Overview of U.S. Sanctions». March 8, 2019. En: <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF10715>. Consultado el 20 de enero de 2019.

Sin embargo, los pagos de esas transacciones deberán hacerse a través de una cuenta bloqueada en los Estados Unidos, que la administración de Donald J. Trump ha declarado poner a disposición del ilegalmente autoproclamado «presidente interino» de Venezuela, Juan Guaidó, en una estrategia explícita de golpe de estado al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela de Nicolás Maduro desde diferentes flancos.

Como consecuencia, a mediados de marzo de 2019 las importaciones estadounidenses de crudo venezolano cayeron a cero según datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA). Nótese que en la semana previa al anuncio de las sanciones, al mercado estadounidense se exportaron 587 mil barriles diarios de petróleo venezolano,<sup>9</sup> que, comparados con los datos de la OPEP, representarían alrededor de la mitad de la producción de petróleo de ese mes.

Lo anterior determina fuertes restricciones a la capacidad de PDVSA no solo para financiar con recursos propios las inversiones que permitan aumentar la producción de petróleo y sostener los programas sociales que financia, sino para acceder a divisas en el mercado internacional y abastecer al mercado interno, en especial al sector productivo y de consumo. Por ello, como ha venido ocurriendo recientemente, es esperable la asociación con terceros para incrementar la extracción petrolera, incluso bajo fórmulas de cesión del manejo temporal de los campos y pago de montos variables por barril producido, y no ya de la creación de empresas mixtas para la operación conjunta,<sup>10</sup> que se hace mucho más difícil como consecuencia de las sanciones.

En ese sentido, Venezuela está abocada a la búsqueda de una rápida diversificación de sus mercados para reorientar el destino de las exportaciones de petróleo, en especial el destinado al mercado estadounidense. Sin embargo, encontrar nuevos mercados es un proceso complejo, que requiere inversiones para una reconversión

<sup>9</sup> U.S. Energy Information Administration: «U.S. imports from Venezuela of crude oil, Weekly». En: [https://www.eia.gov/opendata/qb.php?sdid=PET.W\\_EPCo\\_IMo\\_NUS-NVE\\_MBBLD.W](https://www.eia.gov/opendata/qb.php?sdid=PET.W_EPCo_IMo_NUS-NVE_MBBLD.W). Consultado el 24 de marzo de 2019.

<sup>10</sup> Cfr. Banca y Negocios: «Venezuela regresa a acuerdos petroleros de incentivos fustigados en la era Chávez», 11 de septiembre de 2018. En: <http://www.bancaynegocios.com/venezuela-regresa-a-acuerdos-petroleros-de-incentivos-fustigados-en-la-era-chavez/>. Consultado el 15 de noviembre de 2018.

tecnológica que permita la refinación específica del petróleo venezolano.

Además, Estados Unidos presiona a otros países, como India, para que dejen de comprar petróleo a Venezuela.<sup>11</sup> El mercado indio tiene gran relevancia por ser el segundo mayor socio —después de Estados Unidos— que efectúa sus compras de petróleo en efectivo, a diferencia de otros como Rusia y China, que reciben parte del mismo como pago de los créditos que han concedido al país andino.

Las sanciones ya han adquirido un alcance extraterritorial, pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los activos del banco ruso EvrofinanceMosnarbank y prohibió las transacciones de estadounidenses con esa entidad por sus operaciones con PDVSA.<sup>12</sup> Dados estos precedentes, un obstáculo adicional no despreciable para Venezuela será encontrar bancos extranjeros dispuestos a exponerse a la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos para gestionar las cuentas a través de las que se operan las transacciones del comercio exterior.

La situación financiera de PDVSA es igualmente compleja. Datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) estiman que PDVSA tiene una deuda externa de alrededor de 63 mil millones de dólares, valor que ha crecido de manera importante en la última década.<sup>13</sup>

En noviembre de 2017 el gobierno no efectuó el pago de la liquidación del Bono PDVSA17, que entró en *default* técnico junto a otros bonos soberanos y de la empresa pública de servicios eléctricos ELECAR. Durante 2018 se dejaron de pagar once bonos venezolanos y de PDVSA, solo liquidándose el bono PDVSA20 que comprometía la mitad de las acciones de CITGO. La restricción de los ingresos externos, las sanciones, la persecución financiera y la retención de activos

<sup>11</sup> Cfr. Reuters: «EEUU presiona a India para dejar de comprar crudo venezolano: enviado», 10 de marzo de 2019. En: <https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-politica-india-idLTAKBN1QRoE5-OU5LT>. Consultado el 22 de marzo de 2019.

<sup>12</sup> Cfr. Reuters: «Tesoro EEUU impone sanciones a banco ruso por operaciones con venezolana PDVSA», 11 de marzo de 2019. En: <https://lta.reuters.com/articulo/venezuela-eeuu-rusia-idLTAKBN1QSiWE>. Consultado el 22 de marzo de 2019.

<sup>13</sup> Colbin Smith: «Venezuela's long and winding road to debt restructuring», *Financial Times*, March 6, 2019. En internet: <https://ftalphaville.ft.com/2019/03/06/151848400000/Venezuela-s-long-and-winding-road-to-debt-restructuring/>. Consultado el 22 de marzo de 2019.

en bancos estadounidenses y europeos han sido obstáculos decisivos en el impago de la deuda venezolana.<sup>14</sup>

Aunque ello requiere un 25% de consenso entre los acreedores, un factor al que debe dársele seguimiento es a la posibilidad de acción colectiva ante cortes estadounidenses contra la empresa estatal, lo que expondría aún más sus activos en el exterior al peligro de embargo como resultado de un fallo judicial para asegurar la retribución a los acreedores. Nótese que el embargo de importantes activos externos de PDVSA, como la filial CITGO, está ocurriendo *de facto* tras el anuncio de las sanciones, la congelación de las cuentas y la decisión del gobierno estadounidense de pasar el control de las mismas al ilegítimo «presidente interino».

### **El endeudamiento externo**

La deuda externa de Venezuela, según datos oficiales, ascendió en 2018 a 151 209 millones de dólares.<sup>15</sup> Alrededor de 65 mil millones de dólares corresponden a compromisos con tenedores de bonos, 31 mil millones con Rusia y China y 9 mil millones con acreedores oficiales e instituciones multilaterales, que incluyen al Banco Interamericano de Desarrollo.<sup>16</sup>

El endeudamiento externo venezolano ha mostrado una dinámica creciente, en consonancia con las ingentes necesidades de financiamiento externo de la economía. La deuda externa creció más del doble en la última década, pues en 2008 se ubicaba alrededor de los 67 mil millones de dólares.<sup>17</sup> Esta dinámica responde a un incremento notable de la deuda pública, no solo del gobierno central sino también de PDVSA, que ascendió en 2018 a aproximadamente 144 mil millones de dólares.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Cfr. Misión Verdad: «Bloqueo financiero: cronología de una estrategia para destruir a Venezuela». 14 de febrero de 2019. En: <http://misionverdad.com/entrevistas%20/sanciones-como-parte-de-la-guerra-por-desconfigurar-a-venezuela>. Consultado el 22 de marzo de 2019.

<sup>15</sup> BCV: *Deuda externa. Saldos al cierre del período a valor nominal por plazos, sectores e instrumentos 1997-2018*. 2019.

<sup>16</sup> Cfr. ColbinSmith: «Venezuela's long and winding road to debt restructuring», *Financial Times*, ob. cit.

<sup>17</sup> BCV: *Deuda externa. Saldos al cierre del período a valor nominal por plazos, sectores e instrumentos 1997-2018*. Ob. cit.

<sup>18</sup> Cfr. ColbinSmith: «Venezuela's long and winding road to debt restructuring», *Financial Times*, ob. cit.

En la coyuntura actual, la situación se presenta sumamente compleja por la convergencia de múltiples factores y hechos, entre los que destaca una importante restricción sobre los ingresos externos vinculada a la caída de la producción petrolera, sin perspectivas de recuperación en el corto o mediano plazo, con el agravante de las sanciones al comercio de hidrocarburos, a las transacciones financieras del país y el congelamiento de fondos de la filial de la estatal petrolera CITGO, impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Otro tanto ocurre con el cese de pagos (*default*) de bonos soberanos, de PDVSA y de la empresa de servicios eléctricos ELECAR, que comenzó en noviembre de 2017. Ello tiene implicaciones serias en términos de acceso a los mercados financieros internacionales y comporta el riesgo de una acción colectiva de los acreedores en tribunales estadounidenses que conduzca a la apropiación por parte de estos de activos de PDVSA localizados en el exterior, algo que ya ha ocurrido como resultado de las sanciones estadounidenses. Nótese que los bonos emitidos por el gobierno de Venezuela están sujetos a las leyes de Estados Unidos, lo que habilita a las cortes de ese país a dictaminar sanciones contra el país andino, cuyos montos engrosarían sus compromisos externos.

De hecho, existe el precedente del fallo de un tribunal de arbitraje a favor de la empresa ConocoPhillips que operaba en la Franja Petrolífera del Orinoco, nacionalizada por el gobierno bolivariano en años anteriores. La empresa intentó apropiarse de activos de PDVSA en islas del Caribe, lo que obstaculizó la refinación y almacenamiento de petróleo en esa área geográfica, al punto de generar embotellamientos en puertos venezolanos por no poder utilizar las capacidades en Curazao y San Eustaquio. Conoco Phillips recientemente ganó un segundo laudo arbitral en el CIADI, que dictaminó que Venezuela debe pagarle más de 8 mil millones de dólares a esa empresa.

A ello se sumaron en 2018 un grupo de demandas internacionales por nacionalizaciones anteriores y por el impago de la deuda, que buscan apropiarse de los activos de PDVSA en el exterior. Según *Financial Times*, hay seis demandas en curso contra PDVSA y Venezuela y se prevé aparezcan otras en el futuro, pues se conoce que los tenedores de bonos comienzan a organizarse y contratar representación legal.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Aunque aún no han presentado una reclamación en las cortes, un grupo de acreedores que cuentan con bonos de deuda venezolana por 8 mil millones de dólares se ha organizado bajo la representación de la firma de abogados Cleary Gottlieb. Cfr. Colbin Smith, ob. cit.



A fines de 2017, ante la incapacidad de asumir los pagos de la deuda, el gobierno anunció un proceso de reestructuración que hasta el momento solo se ha logrado con Rusia por valor de 3 500 millones de dólares. Un proceso de este tipo con los tenedores de bonos se ve mucho más lejano y sus posibilidades de éxito son muy reducidas si se toman en consideración el conjunto de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos desde agosto de 2017.

Las sanciones prohíben el acceso del gobierno venezolano y de sus empresas —incluida PDVSA— al mercado financiero estadounidense, impidiendo el acceso a papeles de deuda y acciones estadounidenses, con algunas excepciones. Igualmente, restringen las transacciones que involucren monedas digitales, medida erigida como respuesta por parte de la administración Trump a la creación del Petro como forma de evadir las sanciones financieras. Por último, para mayo de 2018, también mediante orden ejecutiva, prohibió la compra por estadounidenses de deuda venezolana, una sanción dirigida especialmente a impedir cualquier proceso de renegociación de la deuda del país andino.

A todo lo anterior habría que añadir las sanciones individuales impuestas a autoridades económicas que serían las empoderadas para llevar adelante cualquier proceso de reestructuración,<sup>20</sup> así como la persecución financiera a instituciones de terceros países por operar las cuentas del gobierno venezolano y de su principal activo, PDVSA.

Para 2018, sumando a los pagos atrasados de los bonos en *default* —que ascienden a 310 millones de dólares— los compromisos del servicio de la deuda emitida en bonos, Venezuela debería pagar más de 9 mil millones de dólares.<sup>21</sup> De estos, correspondían a PDVSA alrededor de 2,9 mil millones y a la deuda soberana más de 5 mil millones.

Ante las grandes restricciones que enfrenta para hacer frente a sus compromisos externos, el gobierno de Venezuela deberá aplicar una política selectiva para el servicio de la deuda, priorizando aquellos pagos que comprometan de manera más directa los activos externos de PDVSA y los compromisos con socios estratégicos como China y Rusia,

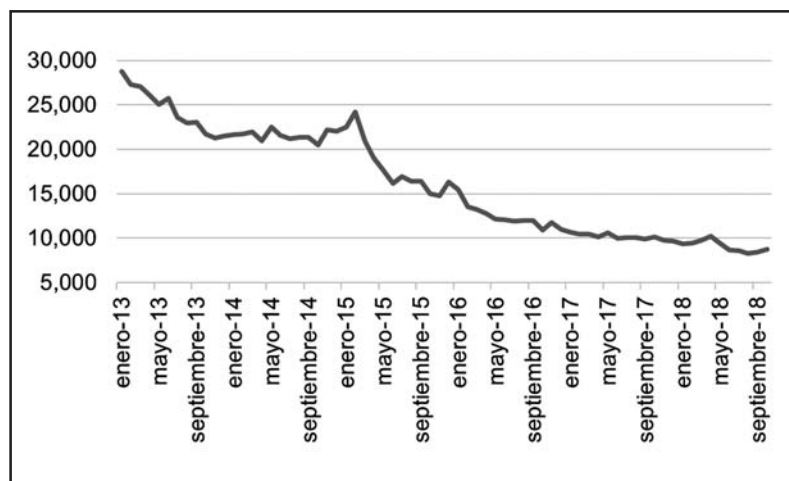
<sup>20</sup> Congressional Research Service: «Venezuela: Overview of U.S. Sanctions», ob. Cit.

<sup>21</sup> Este monto no incluye las deudas contraídas por otras vías de financiamiento como los créditos. Cfr.: EIU: «Venezuela in 2018: political and economic crisis deepens». December 28th, 2017. En: <http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1416260525&Country=Venezuela&topic=Politics&oid=1346271518&aid=1>. Consultado el 15 de noviembre de 2018.

<sup>22</sup> El bono PDVSA20 ofrece como colateral la mitad de las acciones de CITGO, filial estadounidense de PDVSA.

acreedores de gran magnitud y aliados políticos del gobierno bolivariano. De hecho, precisamente parece ser esta la interpretación del gobierno ante la difícil situación que enfrenta en materia de endeudamiento externo, al efectuar el pago del bono PDVSA20,<sup>22</sup> en un año donde las presiones se vieron aumentadas por el vencimiento del período de gracia de créditos por 4 mil millones de dólares provenientes de bancos de desarrollo chinos y los compromisos con la empresa rusa Rosneft por valor de 2,25 mil millones.

**Gráfico 3. Reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (enero 2013-octubre 2018) (millones de dólares)**



*Fuente:* Elaboración propia sobre la base de datos de Banco Central de Venezuela: Reservas Internacionales, 2019. En: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/reservas-internacionales>. Consultado el 20 de marzo de 2019.

De otro lado, los recursos disponibles para afrontar el servicio de la deuda se han visto reducidos de manera importante en los últimos años. Ello se refleja en la dinámica acentuada de decrecimiento de las reservas internacionales del país. En octubre de 2018 —último dato oficial disponible según el Banco Central de Venezuela— las reservas de esa entidad se ubicaron en 8,763 mil millones de dólares, lo que representa una fuerte caída de casi el 70% respecto al valor de enero de 2013.

Son múltiples y severas las presiones que enfrenta la economía venezolana, dentro de las cuales las vinculadas a la deuda externa ocupan un lugar prioritario. Al mismo tiempo, constituye una de las dinámicas más difíciles de revertir dados los problemas para generar ingresos en divisas —sea a partir de la producción y exportación de hidrocarburos o de otros rubros— y los obstáculos para reestructurar la deuda. Tómese en consideración que las sanciones estadounidenses alcanzan ambas dimensiones, lo que denota su intencionalidad específica en esa dirección.

### **La espiral inflacionaria, depreciación y desabastecimiento**

La inflación es uno de los fenómenos que más directamente afecta la percepción sobre la gestión gubernamental, lo que deviene impacto político-electoral y social, pues incide en el poder adquisitivo de la población y por tanto en su nivel de consumo y de satisfacción de sus necesidades materiales. Venezuela ha sido un país con un historial de inflación elevada. De hecho, en las últimas décadas su valor no ha logrado bajar de los dos dígitos, si bien hasta 2012 logró estabilizarse alrededor del 20%.

**Tabla 2. Inflación interanual en Venezuela 2011-2018  
(variación porcentual diciembre/diciembre)**

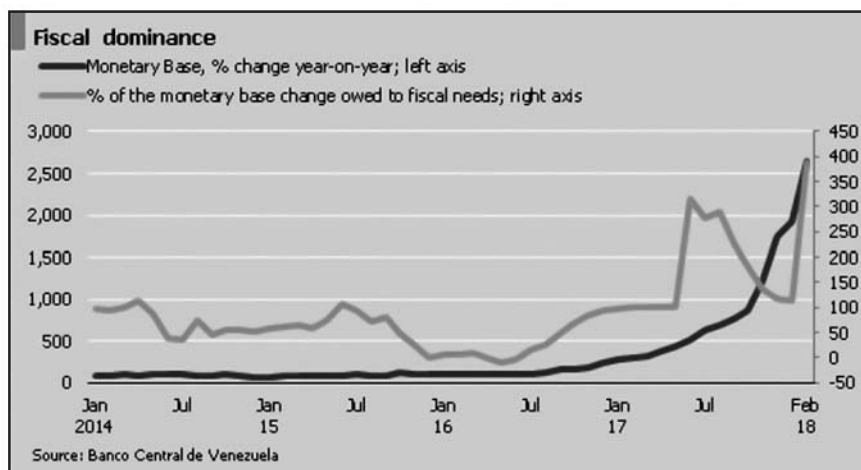
Año	Variación interanual (%)
2011	27,6
2012	20,1
2013	56,2
2014	68,5
2015	180,9
2016	274,4
2017	862,6
2018	130 060,2

*Fuente:* BCV: Variaciones del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Sin embargo, la coyuntura actual se caracteriza por el desencadenamiento de una espiral inflacionaria, que responde a factores de múltiple naturaleza, pero en particular a una política continuada de monetización del déficit fiscal, a las carencias en la diversificación productiva, al desabastecimiento de productos de primera necesidad que el país viene sufriendo desde hace algún tiempo y a la dinámica del tipo de cambio, en especial del mercado negro, por los niveles de dolarización de la economía venezolana.

El punto de partida de este análisis es una inflación que desde 2015 ha alcanzado los tres dígitos, pero que en un lapso de alrededor de año y medio se ha disparado exponencialmente.

**Gráfico 4. Variación anual de la base monetaria (eje izquierdo) y porcentaje del cambio de la base monetaria que corresponde a necesidades fiscales (eje derecho) (enero 2014-febrero 2018)**



Fuente: EIU: «New economic plan revealed». August 20th, 2018. En: <http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=257052009&Country=Venezuela&topic=Economy>. Consultado el 19 de septiembre de 2018.

Los sectores más afectados en ese sentido son los alimentos y bebidas y otros bienes y servicios, el alquiler de viviendas y los servicios de vivienda, a excepción de los servicios de telefonía. De esta manera, se observa cómo la inflación afecta el consumo de la población, con especial impacto sobre los estratos sociales de menores ingresos, pues

estos deben destinar una porción más importante de dicha riqueza a adquirir bienes y servicios imprescindibles para solventar sus necesidades básicas.

La continuada política de monetización del creciente déficit fiscal se disparó durante la primera mitad de 2018, inyectando constantemente liquidez a la circulación a una economía que no tiene capacidad para satisfacer la demanda y enfrenta una severa restricción de los ingresos disponibles para la exportación, al tiempo que durante la primera mitad del año se enfrentó a una coyuntura electoral. En un contexto de desabastecimiento y de grandes problemas para impulsar la producción nacional, una mayor liquidez incrementa la demanda y dispara los precios.

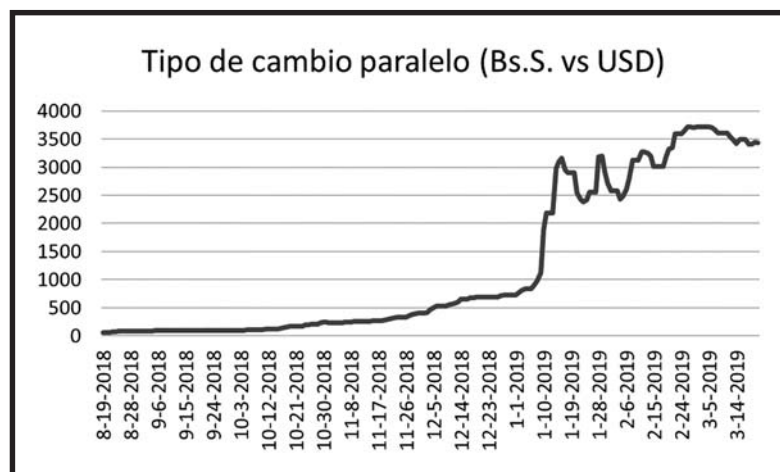
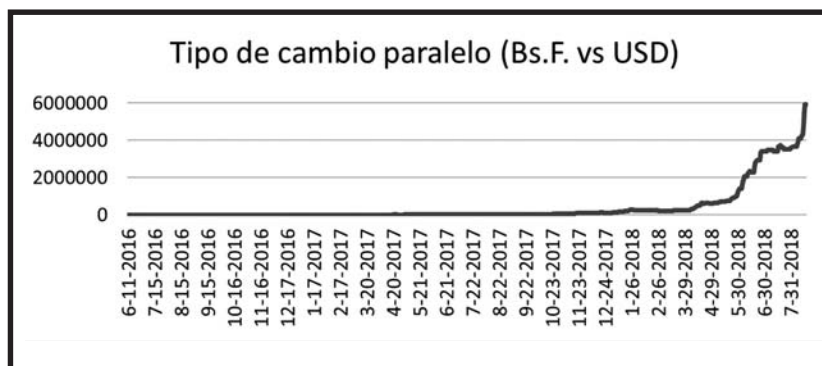
Por su parte, un componente determinante ha sido la fuerte depreciación del tipo de cambio, con su consecuente efecto sobre los precios. Durante la primera mitad de 2018, el régimen cambiario oficial venezolano se manejó a través de un sistema de subastas de divisas (DICOM) en bandas administradas de flotación y control cambiario, que resultaban en un tipo de cambio muy sobrevalorado respecto al del mercado paralelo.

Ante la escasez en la provisión de divisas por la restricción de los ingresos externos de PDVSA —principal suministrador de divisas a la economía nacional— y el control de cambios, el mercado paralelo ha cobrado cada vez mayor relevancia en el acceso a divisas tanto del sector productivo como de la población. De hecho, la dinámica inflacionaria ha estado muy asociada a la del tipo de cambio paralelo, vínculo que responde también a los elevados niveles de dolarización económica del país. En este contexto se reproducen múltiples prácticas de corrupción, especulación y sabotaje económico que acentúan la tendencia a la depreciación.

En las tablas que siguen se aprecia la depreciación del tipo de cambio paralelo desde 2016 hasta la actualidad. Nótese cómo durante 2018 se disparó el tipo de cambio hasta alcanzar valores de alrededor de 6 millones de bolívares fuertes por dólar estadounidense antes de la introducción del nuevo cono monetario que restó cinco ceros a la moneda local.

Luego de la instauración del nuevo cono monetario se mantiene la tendencia devaluatoria, inicialmente a menor ritmo, para volver a dispararse en enero de 2019, lo que sugiere también que, además de los

**Gráficos 5 y 6. Tipo de cambio nominal en el mercado paralelo (Bs.F./USD y Bs.S./USD)**



*Fuente:* Elaboración propia en base a datos de *DolarToday*. En: <https://dolartoday.com/custom/dolartoday.xlsx>. Consultado el 22 de marzo de 2019.

factores económicos que la determinan, también existe un componente político marcado.

Recientemente, el gobierno liberalizó el mercado cambiario, permitiendo a las instituciones bancarias y casas de cambio la compra-venta libre de divisas, medida que hará más manejable el sistema cambiario y permitirá reducir el diferencial cambiario entre el mercado oficial y el paralelo, que ha devenido mecanismo de sangría de

divisas de las arcas públicas. Aunque aún es muy pronto para evaluar el efecto de tal medida, lo cierto es que, como era previsible, el tipo de cambio oficial se ha depreciado notablemente y se ha reducido ostensiblemente la brecha cambiaria pero aún no logra eliminarse del todo. A inicios de junio de 2019 el tipo de cambio de referencia reportado por el Banco Central de Venezuela se ubicaba en 5 887 Bs.S./USD mientras que en el mercado paralelo se cotizaba a 6 347 Bs.S./USD.<sup>23</sup>

En otra dirección, la reducción de las exportaciones petroleras -que concentran alrededor del 95% de las exportaciones totales- y la consecuente restricción de los ingresos externos, ha provocado una disminución importante de las importaciones, motivada por la escasa disponibilidad de divisas. En ese contexto, el sector productivo nacional no cuenta con suficiente acceso a divisas para sostener las importaciones de insumos para la producción, de manera que este se convierte en otro mecanismo de presión sobre los precios.

Por una parte, la escasez de bienes de consumo y el aumento de liquidez estimulan el incremento de precios y, por otra, la devaluación encarece los costos de producción por el alto componente importado de los bienes intermedios para la producción nacional y por la propia importación de bienes de consumo final.

Los efectos del desabastecimiento en la economía venezolana, no solo recaen sobre los precios, sino que se convierten en uno de los factores potencialmente negativos en la esfera política y social. Sin tener un referente estadístico confiable, es de conocimiento general que el desabastecimiento de productos de primera necesidad —en especial, aunque no exclusivamente, de alimentos y medicinas— ha alcanzado niveles alarmantes en el país.

Alrededor de este fenómeno confluyen múltiples causas que van desde el escaso control gubernamental de la red minorista de distribución, hasta las imperfecciones de los mecanismos oficiales de distribución de la canasta básica, pasando por la guerra económica, la deformación de la estructura productiva del país y el sabotaje interno y externo a la llegada de los cargamentos de este tipo de productos.<sup>24</sup> En

<sup>23</sup> BCV: Tipo de cambio de referencia, 2 de junio de 2019, y *DolarToday*, 2 de junio de 2019.

<sup>24</sup> Misión Verdad, medio independiente de Venezuela, ha denunciado el sabotaje por parte del gobierno colombiano a la llegada de alimentos y medicinas al país. Cfr. Misión Verdad: «Bloqueo financiero: cronología de una estrategia para destruir a Venezuela», ob. cit.

efecto, son parte de un círculo vicioso que alimenta la inflación, el mercado negro, la corrupción, la pobreza e incluso la inseguridad y la violencia.

El desabastecimiento y la inflación son probablemente los fenómenos de mayor impacto político en el país andino, pues afectan directamente el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la población, de manera que su profundización compromete directamente el apoyo al proceso político y agudiza la conflictividad social.

### **El Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica: la respuesta de política económica**

En agosto de 2018, el gobierno venezolano anunció un conjunto de medidas económicas, como parte del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, con el objetivo de estabilizar la economía nacional, inmersa en una profunda crisis a tenor de la acumulación de fuertes desequilibrios macroeconómicos.

Es probable que los anuncios continúen, más aún en medio de una permanente adaptación a las medidas de bloqueo económico y financiero anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, que seguramente no han concluido en el momento de redacción de este artículo. En cualquier caso, una evaluación rigurosa requerirá observar la implementación en la práctica de las medidas y las dinámicas resultantes de las mismas.

La primera medida implementada por las autoridades bolivarianas fue la adopción de un nuevo cono monetario, que implica la sustitución del bolívar fuerte (BsF) por el bolívar soberano (BsS), restándole cinco ceros a la moneda inicial. Persigue facilitar las operaciones en efectivo y aunque operativamente tiene un impacto considerable, en términos macroeconómicos no implica cambios *per se* en la situación de partida.

Una segunda política fue la creación del Petro como unidad de cuenta que permitiera captar financiamiento evadiendo las sanciones financieras del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, y como anclaje cambiario, pues fija implícitamente el valor del bolívar soberano al dólar estadounidense y el salario mínimo también a esa divisa internacional.



A varios meses del anuncio, no queda claro aún cuál cómo se formará en el futuro la tasa de cambio a la cual se transará esta «criptomoneda»—si fluctuará según el precio del barril de petróleo venezolano o si se establecerán límites de flotación.<sup>25</sup> Hasta el momento su uso no se ha generalizado, aunque se estableció como unidad de cuenta obligatoria para PDVSA y se ha promovido como moneda de ahorro, para recibir remesas del extranjero y recientemente como medio de pago para la compra de inmuebles.

Lo que resulta más relevante en los anuncios sobre el Petro, es la tasa de cambio implícita que impone a la economía, pues su valor fue fijado inicialmente en 60 USD y 3 600 BsS, resultando una paridad de 60 BsS/USD. Más recientemente, el valor del Petro fue reajustado nuevamente a 9 000 BsS.

Esto supone una devaluación de gran magnitud para una economía con una inflación galopante, si bien reduce —aunque no llega a eliminar— el diferencial de tasa de cambio respecto al mercado paralelo. Aunque la medida busca también aliviar el costo al Estado de la sobrevaloración de la tasa de cambio oficial, puede esperarse un efecto fuerte sobre los precios en una economía que tiene poca capacidad de sustitución de importaciones. De hecho, en los últimos meses se han observado, más que los episodios de desabastecimiento frecuentes durante 2018, estantes llenos, pero a precios que suben con una rapidez vertiginosa. Adicionalmente, en la medida en que la tasa de cambio para el acceso a divisas se mantenga fija, los costos seguirán recayendo en las ya reducidas reservas internacionales del país y, en un contexto de restricción de divisas, se mantendrá el mercado negro.

La fijación del salario mínimo al Petro fue incluida en el plan económico, de manera que un salario mínimo equivale a 0,5 Petros, o sea, que luego del reajuste del valor del Petro en 9 000 BsS, el salario mínimo se incrementó a 4 500 BsS, en el orden del 150% por encima del aumento del 43 273% inicial.

Aunque la intención es tratar de asegurar un nivel de estabilidad relativa del poder adquisitivo, en especial de los trabajadores menos remunerados, ante variaciones del tipo de cambio, esta medida acarrea costos

<sup>25</sup> Hasta el momento el valor del Petro se ha mantenido muy cercano a los 60 dólares. Lo habitual en las criptomonedas es la flotación libre en dependencia de la oferta y la demanda, y que asuman las tres funciones de una moneda: unidad de cuenta, reserva de valor y medio para transacciones.

no despreciables. El impacto se hará sentir por dos vías: una mayor capacidad de compra para el trabajador que lo recibe sin un correlato en la oferta de bienes, y una elevación del costo para el empleador que, en el caso del sector privado, será transferido a los precios de los productos y servicios,<sup>26</sup> y en el caso del sector público, una elevación del gasto, y por tanto mayor presión sobre el déficit fiscal.

Al mismo tiempo se anunciaron un grupo de medidas que buscan mejorar el balance fiscal. En esa dirección se plantea una reforma fiscal con el incremento del IVA al 16% —excluyendo los productos y servicios de primera necesidad como alimentos, medicinas, agua potable, electricidad, telefonía y gas—<sup>27</sup> (el valor previo era del 12%), el aumento del precio de la gasolina y el establecimiento de ajustes en el impuesto sobre la renta y a las transacciones financieras.

El incremento impositivo aumentaría los ingresos del fisco, mientras que el del precio de la gasolina relajaría en alguna medida el gasto público por el subsidio estatal a este producto, cuyo precio hasta el momento se ubica muy por debajo del precio del mercado. Sin embargo, también se anunció algún nivel de subsidio —sin esclarecer la magnitud de este— para los ciudadanos registrados en el Carnet de la Patria. En este último caso se busca frenar el tráfico de gasolina a través de la frontera colombo-venezolana, originado por el diferencial de precios entre los mercados de ambos países, lo que genera también una mayor inflación por los mecanismos de cambio de efectivo en bolívares por transferencia bancaria en esa misma moneda.<sup>28</sup>

En mayo de 2019 se anunció la liberalización del mercado cambiario, permitiendo a las instituciones bancarias realizar transacciones de compra-venta en divisas y determinar la tasa de cambio a que estas se realizan, lo que implica la eliminación de la segmentación del mercado cambiario oficial. De una parte, se intenta reducir la brecha entre el

<sup>26</sup> El gobierno ofreció devolver a las empresas el 100% del diferencial salarial de los primeros 90 días, lo que aumenta las presiones al déficit fiscal.

<sup>27</sup> BCV: «ANC aprobó reforma fiscal y tributaria», 21 de agosto de 2018. En: <http://www.bcv.org.ve/notas-de-prensa/anc-aprobo-reforma-fiscal-y-tributaria>. Consultado el 30 de septiembre de 2018.

<sup>28</sup> Al parecer, dado el precio tan bajo de la gasolina venezolana, era una práctica común cambiar efectivo para este uso por una cantidad hasta ocho veces mayor de dinero por la vía de transferencias, de manera que se genera un mecanismo de multiplicación del dinero en circulación que añade presiones inflacionarias y devaluatorias en el mercado negro.

tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo, lo cual había devenido, dada sus diseños anteriores, un mecanismo cambiario inmanejable económicamente y una fuente de sangría de ingentes divisas al exterior; pero, por otro, no debe desestimarse la importancia del control de cambio en un contexto de escasez de divisas y las implicaciones en términos de soberanía económica de la libre flotación del tipo de cambio.

En general, las medidas anunciadas por el gobierno hasta el momento, si bien buscan la reducción del diferencial cambiario y una mayor estabilidad en el poder de compra del ciudadano común, no se orientan en la dirección de un cambio en la estructura productiva del país ni aseguran la solución de los problemas identificados en acápite anteriores: la monetización del déficit fiscal —ahora probablemente con mayores presiones por el incremento del salario mínimo—,<sup>29</sup> y la megadevaluación a la que está sometida la economía, de seguro presionarán aún más al alza de los precios.

De otra parte, no se prevé una solución inmediata a la caída de la producción petrolera ni a la situación de la deuda externa del país, si bien —en ambos casos— el crédito y la inversión china pueden ser un alivio, en especial que le permita atender parte de los compromisos financieros de corto plazo —sobre todo con los tenedores de bonos de PDVSA—. El efecto sobre la producción de petróleo queda aún por contrastar en la práctica.

A todo ello habría que añadir el peso de las sanciones estadounidenses que imponen obstáculos gigantescos a cualquier plan de recuperación, limitando aún más la capacidad de las autoridades económicas ya no solo para estabilizar la economía sino para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas del ciudadano medio.

### **Corolario: el bloqueo económico de Estados Unidos**

Durante 2018, el deterioro que la economía venezolana ha venido experimentando en los últimos años se ha agravado profundamente por el bloqueo económico del gobierno estadounidense.

<sup>29</sup> No existen datos suficientes para calcular el efecto del incremento impositivo y del precio de la gasolina sobre el déficit fiscal, pero la subida del salario mínimo es suficientemente elevada para vislumbrar la continuidad de la profundización del déficit fiscal y de la práctica de su monetización para financiarlo.

Las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, particular pero no exclusivamente por la administración de Donald J. Trump, buscan la asfixia económica de la Revolución Bolivariana. Dirigidas a los puntos neurálgicos de la economía —los ingresos petroleros y el endeudamiento externo— constituyen hoy el principal obstáculo a cualquier intento de recuperación, genera costos cuantiosos al pueblo venezolano y forman parte de una estrategia de guerra ya no tan «silenciosa» que se complementa con acciones en todos los ámbitos para lograr un cambio de régimen en Venezuela.

Desde marzo de 2015, la emisión por parte del presidente Barack Obama de la Orden Ejecutiva que califica a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, sentó las bases para la aplicación de sanciones, que ha alcanzado una escalada en los últimos meses y, con ello, la política hostil hacia Venezuela entró en una etapa de recrudecimiento ya reconocido oficialmente, si bien desde antes ya se perseguía el cambio de régimen en el país.

A esta política se han sumado actores de otras latitudes como Canadá, la Unión Europea, algunos países europeos y Panamá, que han aplicado medidas coercitivas unilaterales hacia el país andino, mientras que en el plano diplomático se libra una batalla campal en la que Estados Unidos y la derecha regional latinoamericana se presentan como los paladines de la «democracia» y los «derechos humanos».

En un momento inicial las sanciones estuvieron dirigidas hacia funcionarios del gobierno bolivariano y personal de las fuerzas armadas, así como a individuos —y sus familiares— y empresas identificadas como socios políticos y económicos del gobierno de Venezuela e incluyen:<sup>30</sup>

- Prohibición de ingreso a territorio estadounidense.
- Congelamiento e incautación de activos financieros, cuentas en el sistema financiero estadounidense y bienes que tales personas pudieran poseer en Estados Unidos.
- Prohibición de trato o relación comercial o financiera con entidades estadounidenses.

<sup>30</sup> Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores: «Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela», *Reporte Venezuela*, octubre de 2018. En: [http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2018/10/Reporte\\_Venezuela\\_Sanciones.pdf](http://mppre.gob.ve/wp-content/uploads/2018/10/Reporte_Venezuela_Sanciones.pdf). Consultado el 25 de marzo de 2019.

A partir de 2017 las sanciones han aumentado su alcance y profundidad, de manera que focalizan aquellos sectores de la economía venezolana que son claves para sostener el país, bloqueando las exportaciones de hidrocarburos y la posibilidad de renegociación de la deuda, y con ello el acceso a recursos financieros que requiere la economía nacional. En esa dirección, el gobierno estadounidense ha decretado las siguientes medidas:<sup>31</sup>

- Prohibición a personas y entidades estadounidenses para efectuar transacciones con la criptomoneda Petro, cualquier criptomoneda o instrumento monetario emitido o respaldado por el gobierno de Venezuela.
- Prohibición a individuos y entidades estadounidenses para efectuar transacciones con la estatal venezolana PDVSA.
- Bloqueo y embargo de cuentas a través de las cuales se opera el comercio exterior de hidrocarburos.
- Sanciones a barcos que transportan combustible a socios externos, entre ellos los destinados al mercado cubano.
- Bloqueo a instituciones bancarias como el Banco Bicentenario y el banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES)—incluidas algunas de sus filiales en el extranjero—, a través de los cuales el Estado venezolano paga los salarios de los trabajadores de la administración pública, las pensiones y las ayudas sociales dadas a los venezolanos.

A todo lo anterior se suma la persecución financiera a entidades de terceros países que operan cuentas públicas venezolanas, en especial de PDVSA, o están involucrados con las transacciones de oro de ese país, y las presiones que ejerce Estados Unidos a terceros países como la India para que no compren petróleo a Venezuela. Habría que añadir, además, el más reciente sabotaje al sector eléctrico venezolano a través de ataques cibernéticos con participación de Estados Unidos,

<sup>31</sup> Congressional Research Service: «Venezuela: Overview of U.S. Sanctions», ob. cit.; Misión Verdad: «EEUU sanciona los bancos con que el estado paga salarios y pensiones». 22 de marzo de 2019. En: <http://misionverdad.com/tendencias/bloquean-los-bancos-por-donde-los-trabajadores-publicos-cobran-sus-salarios>. Consultado el 25 de marzo de 2019; Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores: «Sanciones y bloqueo. Crimen de lesa humanidad contra Venezuela», ob. cit.

que ha provocado la paralización del país por varios días con grandes costos económicos derivados.

Obviamente, los efectos de las sanciones se dejan sentir en la ya delicada economía venezolana, con efectos nocivos sobre el acceso del país a alimentos y medicamentos —bienes altamente demandados en el mercado interno y que han sido el núcleo central de los episodios de desabastecimiento e hiperinflación en los últimos dos años en Venezuela—; la obstaculización de las transacciones comerciales y financieras del país, en especial de aquellas relacionadas con el pago a los acreedores extranjeros de deuda venezolana; la restricción de los ingresos petroleros y la retención y embargo de activos legítimos del país en instituciones bancarias y financieras; y retrasos e interrupción de los pagos de las transacciones comerciales a socios extranjeros, entre otros.

El gobierno venezolano ha estimado que las sanciones estadounidenses han provocado desde 2015 pérdidas por razón de 130 mil millones de dólares.<sup>32</sup> Estos incluyen los dividendos de CITGO, valorados en 11 mil millones de dólares, ilegalmente embargados por el gobierno de Estados Unidos, que ha transferido la gestión de cuentas a través de las cuales Venezuela realiza su comercio exterior a partidarios del autoproclamado Juan Guaidó.

Las consecuencias son graves y abarcan un espectro muy amplio esferas de la vida económica, política y social del país. Algunas de las más notables incluyen: la imposibilidad de sostener los pagos a pacientes con dolencias graves, incluidos niños y adolescentes, que son atendidos fuera del país gracias a programas de PDVSA; las restricciones para el pago de la importación de medicamentos y alimentos para el consumo nacional; los obstáculos para la importación de bienes de la canasta básica para su distribución a través de los CLAP, alegando fenómenos de corrupción y lavado de dinero en el exterior; las dificultades de PDVSA para la importación de aditivos y diluyentes para la exportación de combustible de PDVSA y la producción de gasolina para el mercado interno, lo que ha desatado problemas de abastecimiento interno, entre otros.

La magnitud de las sanciones es tal que incluso algunos analistas como el economista Jeffrey Sachs, para nada cercanos a la Revolución

<sup>32</sup> Venezolana de Televisión: «Venezuela perdió entre 2015 y 2018 más de \$130 mil millones por bloqueo de EE.UU.», 29 de mayo de 2019. En: <http://vtv.gob.ve/venezuela-perdido-millones-bloqueo/>. Consultado el 2 de junio de 2019.

Bolivariana, han mostrado preocupación sobre el efecto nocivo para el pueblo venezolano de las duras medidas aplicadas por el gobierno estadounidense. Por su parte, la propia agencia privada de inteligencia Stratfor, indicó en un reporte que el objetivo de las sanciones estadounidenses es aumentar el caos dentro de Venezuela.<sup>33</sup>

Lejos de facilitar cualquier intento de diálogo político en un país altamente polarizado, el bloqueo económico arrecia más aún la crisis económica que vive el país andino y perjudica directamente a la población en virtud de la cual es supuestamente aplicado.

Estados Unidos, apoyado en la derecha regional articulada en el Grupo de Lima y otros actores internacionales, exacerban las presiones internas a través de la asfixia económica, como método para derribar el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, apostando a la proliferación de estallidos populares por el malestar que genera la delicada situación económica y a la fractura del apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).

La situación económica interna, y sus consecuencias sociales, son claves en la sostenibilidad del proceso político bolivariano. La política estadounidense hacia Venezuela, además de perseguir objetivos electorales de cara a 2020, se inserta en la disputa hegemónica con otros actores globales como Rusia y China, cuyas alianzas con países del área son percibidas como amenaza. China ha incrementado notablemente su presencia económica en toda la región, y en especial en Venezuela ha jugado un rol muy destacado como prestamista del gobierno bolivariano, mientras que Rusia ha ampliado su influencia en el ámbito militar, siendo Venezuela uno de los socios más importantes.

El deterioro económico venezolano ha implicado también afectaciones a la sostenibilidad de la cooperación energética en el Caribe, área de interés geopolítico para Estados Unidos y otras potencias globales, hacia la que Venezuela ha tenido una proyección regional como suministrador de energía, cuestión de alta sensibilidad para los países caribeños. La importancia de este grupo de países es vital en el entorno diplomático y multilateral porque, a pesar de su tamaño, representan un número considerable de votos en los organismos en que participan.

<sup>33</sup> Misión Verdad: «Las sanciones son una receta para aumentar el caos: Reporte de Stratfor», 23 de mayo de 2019. En internet: <http://misionverdad.com/TENDENCIAS/las-sanciones-son-una-receta-para-aumentar-el-caos-reporte-de-stratfor/>. Consultado el 2 de junio de 2019.

Venezuela vive una situación crítica, pues a la crisis económica interna, que con el agravante de las sanciones estadounidenses alcanza niveles insostenibles, se le suma el asedio político-diplomático en el espacio regional y multilateral. La correlación regional de fuerzas políticas favorece a una derecha muy conservadora que en algunos casos mimetiza las actitudes de quienes dirigen hoy el gobierno estadounidense y que busca articularse a través de foros regionales con una retórica muy agresiva hacia ese país bajo el liderazgo de Brasil, Colombia y Chile.

Una eventual reversión de la Revolución Bolivariana, para lo cual Estados Unidos y sus aliados regionales han desplegado variados y poderosos instrumentos en todos los ámbitos, asestaría un duro golpe al progresismo y la izquierda regional, así como a los procesos asociativos de concertación política y cooperación que defienden posiciones más autóctonas en el continente.



# Coyuntura política en la Comunidad del Caribe (CARICOM). Retos y oportunidades para la articulación de movimientos transformadores

Diana I. Legrá Brooks

*diana@cipi.cu*

Licenciada en Relaciones Internacionales.  
Investigadora del CIPI.

## **Resumen:**

En el Caribe tuvo lugar la primera Revolución del hemisferio contra el colonialismo y la esclavitud en el siglo XVIII. Sin embargo, no solo la Revolución Haitiana no logró una transformación profunda de las estructuras sociales coloniales, sino que ni Haití, ni el resto de los países que conforman la subregión<sup>1</sup> participaron de los procesos independentistas que, en los siglos XIX y XX, tuvieron lugar en la región latinoamericana y caribeña. A partir de la década del sesenta del siglo XX, se produce el acceso a la independencia de los países caribeños. Pero este proceso ocurrió «desde arriba», a través de la negociación con las metrópolis, como parte de los procesos de descolonización de la época, y no como resultado de revoluciones sociales. En la actualidad, en un contexto de crisis sistémica del capitalismo y de reconfiguración del sistema internacional, el Caribe toma especial relevancia para los grandes poderes, de los cuales se advierte un interés por recolonizar este espacio geoestratégico. El objetivo de este trabajo es examinar los cambios recientes en la correlación de fuerzas en la subregión, para identificar en estas propuestas elementos de contacto

<sup>1</sup> La definición de Caribe que se asume en este trabajo incluye a los 15 estados miembros de la CARICOM, por las similitudes económicas y políticas, y los vínculos sociales y culturales que comparten. Quedan excluidos entonces Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, cuya evolución histórica resulta más cercana a la de América Latina.

con los movimientos progresistas y de izquierda, que puedan ser trabajados en función de los procesos transformadores del siglo XXI.

**Palabras clave:**

Geopolítica, recolonización, procesos de transformación.

**Summary:**

*The first Revolution of the Hemisphere against colonialism and slavery was held in the Caribbean in the XVIII century. However, Haitian Revolution not only couldn't achieve a deep transformation of colonial social structures but, nor Haiti nor the rest of countries within the sub region, participated of the independentism movements of the XIX and XX century. During the 60's of the XX century, Caribbean countries acceded independence. But this process occurred «from the top», meaning they acceded independence, not as a result of social revolutions, but through the negotiation with their metropolis, as part of the decolonization processes that were taking place at that time. At the present, in a context of capitalism systemic crisis and reconfiguration of the global order, the Caribbean retrieves special relevance for the greater powers, from which it is seen an interest on recolonizing this geostrategic space. The objective of this paper is to examine the recent changes in the correlation of the political forces in the sub region, as a mean to identify within these proposals, contact points with the progressive and leftist movements, that could be acted on, facing the transformation processes of the XXI century.*

**Keywords:**

*Geopolitics, recolonization, transformation processes.*

## **Introducción**

Habiendo accedido a la independencia nominal de las metrópolis a partir de la década del sesenta del siglo XX, la mayoría de los estados caribeños, ex colonias británicas, pasaron a pertenecer a la Mancomunidad de Naciones Británicas. Por tal razón, el sistema político más extendido en el Caribe está basado en el Sistema de Westminster, heredado de la colonización inglesa. En estos casos, el Jefe de Estado es la Reina Isabel II del Reino Unido y la estructura de gobierno se compone

del Primer Ministro, como principal figura del Gobierno, y de un Parlamento.

Esta característica de los sistemas políticos caribeños, constituye un factor estructural que ha limitado la construcción de procesos de transformación. A esto se suman otras limitaciones objetivas en las dimensiones geográfica (pequeñez, vulnerabilidad ante efectos del cambio climático) y económica (economías monoexportadoras y monoproductoras, mercados muy abiertos y estrechos, falta de complementariedad, dependencia, inestabilidad macroeconómica, atraso tecnológico –heredados de la colonización–), que se reflejan también en las dinámicas sociales y culturales de la subregión. Estas cuestiones facilitan, condicionan, o refuerzan, en política: la vulnerabilidad, la dependencia, el pragmatismo, la desideologización, los discursos moderados, la limitada capacidad de negociación; las cuales, paradójicamente, confieren al Caribe un clima de relativa estabilidad política.

En un escenario de crisis sistémica del capitalismo, estas condiciones favorecen los procesos de recolonización que ponen en marcha los grandes poderes, en función de mantener (u obtener) control e influencia sobre espacios geoestratégicos determinados. Sin embargo, el fenómeno recolonizador muestra un cambio en la forma, al tomar por bases las mismas del neoliberalismo y la modernidad; pero no en su contenido. La situación también resulta un nicho para el auge de tendencias globales neoconservadoras, nacionalistas y proteccionistas. Sin embargo, también abre una ventana de oportunidad para la profundización del pensamiento crítico y la articulación, desde la región, de movimientos independentistas, antimperialistas, antineoliberales, postcapitalistas: categorías hoy ausentes en el discurso político caribeño.

La literatura al respecto es bastante escasa. Se pueden identificar trabajos de académicos caribeños que reconocen las limitaciones políticas (Elsada D. Cassells: *Caribbean Diplomatic Climate in the age of Trump*; Wendy C. Grenade: *The Grenada Revolution 40 Years After: Lessons for Rethinking Caribbean Politics and Political Economy*), económicas (Mark Kirton: *Current Trends in Caribbean Regional Integration, the Prospects and Challenges for CARICOM and the Current State of CARICOM's Relations with the Rest of the Hemisphere*), sociales y culturales (Margaret Harris: *Cultural Production for the Caribbean Community in the Era of Cultural China: Meeting the Dilemma of Authenticity*). Estas aproximaciones, aunque críticas,

no plantean perspectivas reales de superación de estas limitaciones, que afectan la toma de decisiones políticas de los gobiernos caribeños. La academia cubana, en sus análisis, potencia más los aspectos de superación y el papel de Cuba como articulador de la región ALC, (Serbín, Andrés; Quenan, Carlos y Romero, Antonio: *América Latina y el Caribe frente a un nuevo orden mundial: Poder, globalización y respuestas regionales*). Sin embargo, no es mucha la obra publicada al respecto y los trabajos identificados no abordan exclusivamente la necesidad de identificar, en la coyuntura política actual en el Caribe, elementos de contacto con los movimientos progresistas y de izquierda, que puedan ser trabajados en función de los procesos transformadores del siglo XXI. En ese sentido, la aproximación que pretende este trabajo resulta de actualidad, novedad y utilidad para la academia y la política cubana y caribeña.

El trabajo se divide en tres epígrafes que analizan la coyuntura política en diferentes grupos de países de la Comunidad del Caribe, cuyas dinámicas políticas más recientes marcan la correlación de fuerzas en el Caribe que, a su vez, impacta la correlación de fuerzas en toda la región. Un último epígrafe aborda la coyuntura en la CARICOM.

### **Coyuntura política en Guyana, Santa Lucía y Jamaica**

Un rasgo característico del sistema político en los países caribeños de habla inglesa es que predomina bipartidismo, con lo cual, a pesar de que existen numerosos partidos políticos, solo dos tienen posibilidades reales de ganar las elecciones y se alternan consecutivamente en el gobierno. Otros partidos más pequeños se ven desalentados a participar de los procesos políticos, pues no cuentan con la suficiente representación para ganarle municipalidades enteras a los partidos dominantes. Esta dinámica se inserta en una situación política caracterizada por la alternancia política, que confiere al sistema cierta estabilidad.

Entre 2015 y 2016, ocurrieron elecciones en varios países del Caribe, tras las cuales se observó un giro hacia la derecha en las posiciones políticas de varios países donde hasta entonces estaban en el gobierno partidos políticos de centro izquierda. En este trabajo son objeto de análisis algunos de estos países: Guyana, Jamaica y Santa Lucía; así como San Vicente y las Granadinas y Dominica, donde se mantienen en el gobierno líderes progresistas, y Barbados y Trinidad y Tobago,

que potencialmente podrían impactar la correlación de fuerzas en la subregión.<sup>2</sup>

Históricamente, las posiciones de Guyana han marcado la correlación de fuerzas en el Caribe. En un contexto de presiones de la derecha del hemisferio contra Venezuela, las relaciones de Guyana con Venezuela pasan especialmente hoy por el conflicto en el río Esequivo, sin solución hace años. El conflicto se ha visto exacerbado por el reciente descubrimiento de petróleo en la frontera de Guyana con Venezuela, cuya explotación por la transnacional estadounidense Exxon Mobile está prevista para 2020. En este contexto, el Primer Ministro, David Granger ha asumido posiciones fuertes contra Venezuela, lo cual quedó evidenciado en su voto a favor de la *Resolución sobre la situación en Venezuela* en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), en junio de 2018 (Ver Tabla 1).

Por su parte, Santa Lucía ha reducido su participación en el mecanismo ALBA-TCP, mecanismo al que se integró en 2013. En agosto de 2018 se unió al Grupo de Lima, núcleo de la derecha latinoamericana cuya dinámica incide directamente sobre la correlación de fuerzas en ALC. Como parte del Grupo, ha asumido posiciones contra los gobiernos progresistas de la región, que han marcado la correlación de fuerzas en el Caribe votando, en el marco de la OEA, a favor de las Resoluciones sobre Venezuela y Nicaragua (Ver Tabla 1). El Primer Ministro Allen Chastanet, se ha acercado a México, un actor hemisférico central en la correlación de fuerzas políticas en la región latinoamericana y caribeña, que ha asumido tradicionalmente posiciones de derecha, influidas muy de cerca por el gobierno de los Estados Unidos.

En Jamaica, la elección de Andrew Holness, un líder alejado de los políticos tradicionales, marcó un cambio en el discurso político de ese país, al poner mayor acento en las cuestiones económicas, financieras y de negocios. La llegada al gobierno de Holness se inserta en una tendencia global a la emergencia de gobiernos de corte proteccionista y neoliberal. En la búsqueda de mayor independencia y soberanía económica para Jamaica, que permita aumentar su competitividad

<sup>2</sup> De los 14 países que integran la CARICOM, se excluyen de este análisis a Belice, Granada y las Bahamas, donde están en el gobierno partidos de derecha. Además de San Cristóbal y Nieves (donde está en el gobierno un partido de centro-izquierda), Antigua y Barbuda (donde el partido dominante no posee una posición política declarada, pero su líder Gaston Brown, ha asumido posiciones de signo progresista) y Haití (cuya complejidad política demanda un análisis más profundo).

internacional y afianzar y mejorar su rol como potencia regional, se han implementado Programas de Ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2014. Estos programas, si bien conllevan a cierto progreso en la estabilización de los indicadores macroeconómicos, ponen en riesgo la estabilidad de los indicadores sociales, debido a su base neoliberal. En esta dimensión, también resulta perjudicial el reforzamiento de las relaciones estratégicas con Estados Unidos y el acercamiento a otros actores extraregionales, en detrimento de la integración regional.

Como parte de la iniciativa energética de Estados Unidos en el Caribe, enfocada en desplazar a Venezuela como principal suministrador de energía de la región, Jamaica se perfila como distribuidor del combustible estadounidense, un papel que EE.UU. proyectaba inicialmente para Trinidad y Tobago. Sin embargo, el Primer Ministro ha evitado un discurso agresivo contra Venezuela y ha reiterado que las posiciones asumidas por su país no responden a la actuación norteamericana.<sup>3</sup>

### **¿Por dónde van las fuerzas progresistas caribeñas? Coyuntura política en San Vicente y las Granadinas y Dominica**

Siendo la situación en Venezuela la cuestión que más claramente marca hoy las relaciones internacionales en América Latina y el Caribe, ha habido una fractura del consenso de la CARICOM al respecto. San Vicente y las Granadinas y Dominica, constituyen los países de la subregión que han asumido las posiciones de apoyo más sólidas al gobierno de Maduro.

En San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves comenzó en 2015 su cuarto período de mandato consecutivo, al frente del United Labour Party (ULP), uno de los partidos de izquierda que aún conserva el poder en la región. Gonsalves se ha opuesto abiertamente a la política injerencista de los Estados Unidos. En el marco de las acusaciones contra Venezuela en la OEA el pasado año, el papel de su liderazgo político tuvo una importancia crítica, al hacer un llamado a sus colegas miembros de la CARICOM a que se mantuviera la posición de consenso

<sup>3</sup> The Jamaica Gleaner: Holness steers clear of calls for sanctions against Venezuela, 7 de febrero de 2018. Recuperado el 4 de enero de 2018. En: <http://jamaica-gleaner.com/article/news/20180207/holness-steers-clear-calls-sanctions-against-venezuela>.

dentro del bloque,<sup>4</sup> lo cual, en última instancia, evitó la aprobación de la *Resolución sobre la situación Venezuela*, en junio de 2018 (Ver Tabla 1).

Asimismo, Gonsalves fue uno de los mayores críticos de la reunión que sostuvo el pasado 22 de marzo de 2019 el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con los líderes de Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana; en la cual se discutió, fundamentalmente, el incremento de las inversiones estadounidenses a través de la OPIC; entre otros temas, como la presencia china en la región y la situación en Venezuela. Como Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, que no fue invitada al encuentro (como la mayoría de los países caribeños), Gonsalves se unió al Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y otros líderes caribeños, para aseverar que la posición asumida por estos países no puede ser tomada como la posición oficial de la CARICOM, que sostiene como principio la no injerencia en los asuntos de otros Estados. Con respecto a Venezuela, sostuvo que la CARICOM mantiene como consenso el apoyo a ese país y, en ese sentido, se resaltó el papel del grupo negociador para tratar el tema de Venezuela, del cual forman parte Saint Kitts y Nevis, Barbados y Trinidad y Tobago.

Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica, también criticó este encuentro. Este pequeño estado es miembro del ALBA desde enero de 2008 y se beneficia del acuerdo Petro Caribe con Venezuela. El gobierno de Skerrit tiene importantes vínculos con la izquierda latinoamericana, especialmente con la Revolución Bolivariana y con la Revolución cubana, y ha demostrado su apoyo en el marco de las votaciones en la OEA (Ver Tabla 1). Actualmente, Dominica experimenta un proceso de recesión económica, producto de las afectaciones causadas por el huracán María, que representaron alrededor del 200 por ciento del PBI anual de ese país.<sup>5</sup> Para la recuperación tras el paso de los huracanes, además del apoyo de China, Cuba, Venezuela y de otros países del

<sup>4</sup> E. Otálvora: «Trump coloca a Cuba y Venezuela en la misma canasta», *Runrun*, 19 de junio de 2017. Recuperado el 26 de enero de 2018. En: <http://runrun.es/opinion/314142/informe-otalvora-trump-coloca-a-cuba-y-venezuela-en-la-misma-canasta.html>.

<sup>5</sup> Banco Mundial: *Joint statement by Dominica Prime Minister Roosevelt Skerrit and World Bank Vice President for Latin America and the Caribbean Jorge Familiar*, octubre de 2017. Recuperado el 6 de noviembre de 2017. En: <http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/31/joint-statement-by-dominica-prime-minister-roosevelt-skerrit-and-world-bank-vice-president-for-latin-america-and-the-caribbean-jorge-familiar>.

ALBA, también participaron actores internacionales no estatales como el Banco Mundial (BM) y la ONU, quienes otorgaron importantes créditos para la reconstrucción. Como resultado de la situación económica que enfrenta su país, el discurso de Skerritse ha movido hacia posiciones más moderadas.

### **Coyuntura política en Barbados y Trinidad y Tobago**

Los mencionados gobiernos de centro-izquierda equilibran la correlación de fuerzas en la subregión. A continuación, se examina la situación política en Barbados, donde el resultado de las elecciones de junio de 2018 podría alterar la correlación de fuerzas regional, en el corto plazo; y en Trinidad y Tobago, un país cuyas posiciones han sido moderadas, como resultado del respeto de sus compromisos económicos con Venezuela.

En las elecciones del 24 de mayo de 2018, en Barbados, el triunfo absoluto de Mia Motley al frente del Barbados Labour Party (BLP) en todos los departamentos del país, le permitió conformar un Parlamento donde el total de los asientos corresponden al BLP, con lo cual no existe una oposición oficial en el país. Esta peculiaridad le podría permitiría a Motley promover profundos cambios políticos y económicos en esa isla. Otro elemento que podría incidir en un movimiento de Motley hacia posicionamientos políticos más sólidos, favorables para la izquierda y el progresismo regionales, resulta el hecho de ser una mujer con posicionamientos cercanos al progresismo, en tiempos en que gobiernan hombres conservadores. Esto podría representar un cambio con respecto a las posiciones asumidas por el anterior gobierno de ese país, que en junio de 2017 votó a favor de la Resolución sobre la situación en Venezuela (Ver Tabla I). No obstante, el conservadurismo propio de la sociedad barbadense y la situación de crisis económica por la que atraviesa el país, imponen importantes obstáculos a la profundización de estos cambios.

Trinidad y Tobago también se ha visto afectada por la crisis económica. Desde 2016, el país atraviesa una delicada situación económica, debido al impacto que ha tenido sobre la producción nacional, la caída de los precios del petróleo a partir de 2014 y a la escasez de gas natural; situación que ha provocado dificultades en el crecimiento económico, debido a que la industria aporta a ese país alrededor del 50% de su PIB



(CARICOM, 2015). Resolver esta situación ha sido uno de los principales retos del Primer Ministro Keith Rowley, que se encuentra en el gobierno desde 2015. Aunque no se espera que el PNM genere cambios que alteren la correlación de fuerzas existente en la región, el país ha respetado sus compromisos económicos con Venezuela<sup>6</sup> y ha asumido una postura moderada con respecto a la situación en el país latinoamericano, lo cual resulta positivo atendiendo al contexto regional actual.

### **Proceso de integración en la Comunidad del Caribe (CARICOM)**

En cuanto al estado actual del proceso de integración regional en la Comunidad del Caribe (CARICOM), en junio de 2016, a propuesta de Jamaica, se conformó la Comisión Golding, para analizar el desempeño de la CARICOM respecto de las metas y objetivos planteados en el Tratado Revisado de Chaguaramas. Esta, además, evaluó los efectos de la participación de Jamaica en el crecimiento y desarrollo económico de la CARICOM y cuestionó la eficacia de la Corte Caribeña de Justicia para la resolución de disputas.<sup>7</sup> Debido a la centralidad que tiene para el Caribe la existencia del mecanismo integrador, especialmente en un contexto donde la ralentización de los procesos integradores afecta al conjunto de entidades asociativas de la región, ha habido un pronunciamiento político al más alto nivel respecto de la necesidad de avanzar y profundizar el proceso de integración econó-

<sup>6</sup> En 2013 Venezuela y Trinidad y Tobago sellaron un acuerdo para la explotación de gas en su frontera marítima por parte de la transnacional estadounidense Chevron Global Inc. y la compañía estatal PDVSA (de la parte venezolana) y de la parte triniaria, la Chevron Trinidad and Tobago Resources Ltd y la compañía estatal BG de Trinidad y Tobago (Reuters, 2013). Este acuerdo sigue a la unificación de las reservas de gas que comparten ambos países en el suelo del mar, que comenzara desde 2003, bajo la iniciativa de Venezuela. Recientemente, ambos países han suscrito importantes acuerdos en materia económica. Entre ellos destaca en 2017 la firma de un acuerdo preliminar para la ejecución de un proyecto de explotación de gas en el campo Lorán-Manatee, ubicado en la Plataforma Deltana en la frontera marítima entre los dos países. El convenio comprende la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto desde Campo Dragón, ubicado en el estado Sucre, Venezuela hasta el campo Hibiscus en Trinidad y Tobago (TeleSUR, 2017), donde opera la petrolera Shell y la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago. Este año se ha avanzado en las conversaciones de primer nivel entre ambos países para poner en marcha el suministro transfronterizo de gas desde Venezuela.

<sup>7</sup> Ronald Sanders: «Deliver the golding report on CARICOM», Friday 15 December 2017. Recuperado el 16 de enero de 2018. En: <http://www.sirronaldsanders.com/viewarticle.aspx?ID=630>.

mica en la CARICOM. Como resultado, ha sido relanzado el Mercado y Economía Únicos del Caribe (CSME, por sus siglas en inglés), puesto en pausa desde 2011.

En un contexto de ofensiva de Estados Unidos y la derecha regional contra los procesos progresistas y de izquierda en la región, se ha visto fracturado el consenso en política exterior de los Estados miembros de la CARICOM, lo cual sienta un precedente negativo de alto impacto para el hemisferio. Adicionalmente, Guyana y Santa Lucía forman parte del Grupo de Lima, donde se radicaliza el discurso de la derecha regional. Sin embargo, las posiciones que asumen los países caribeños dentro de este grupo, no contradicen su actuación en la CARICOM y el respeto a los principios consensuados de la organización.

El contexto subregional actual no parece favorecer la emergencia de movimientos contestatarios en el corto plazo. La ralentización de los procesos progresistas; la evolución hacia discursos más pragmáticos y moderados; la bilateralización del relacionamiento con los grandes poderes del sistema internacional; la profundización de la dependencia económica, comercial, financiera y energética; la inestabilidad en el crecimiento económico; la ralentización en la integración regional, entre otros, constituyen elementos que caracterizan, a grandes rasgos, la coyuntura política actual en el Caribe.

Sin embargo, las dinámicas cambiantes subregionales y de los contextos externos (regional, hemisférico y global) de alto impacto para el Caribe, ofrecen oportunidades en el mediano y largo plazo para la emergencia de movimientos contestatarios y de superación del colonialismo y, en última instancia del capitalismo. En ese sentido, en el Caribe se dan importantes debates en torno a la racialidad; la cuestión identitaria; la necesidad de profundizar los procesos de integración y la necesidad de superación del orden mundial actual, construido sobre las bases del capitalismo, la modernidad occidental y la supremacía de la raza blanca. En estos, se identifican elementos de contacto con los planteamientos del pensamiento crítico latinoamericano, que se enlazan con el reconocimiento del papel de Cuba como articulador de la región y el comprobado respaldo que ha brindado el Caribe a la Revolución cubana, en las diferentes etapas del proceso político. Sobre estos elementos se puede trabajar, en función de los procesos transformadores del siglo XXI, para resolver la cuestión de la

independencia y soberanía del Caribe, tarea pendiente de la subregión desde la Revolución Haitiana.

## Conclusiones

**Tabla 1. CARICOM. Participación en votaciones seleccionadas en la OEA 2017-2019. Principales inversores.**

	Jun 2017	Dic 2017	Abril 2018	Jun 2018	Jul 2018	Ago 2018	Ago 2018	Ene 2019	2016
	VOT OEA s/ VEN	Traslado Emb a Israel	LIMA Cumbre AMERICA	VOT OEA S/ VEN (1)	VOT OEA S/ NICA (2)	GRUPO LIMA	VOT CONS OEA S/ NICA (3)	VOT CONS OEA S/ sit VEN	INVERSION PRINCIPAL
AB	C			Ab	F		F	Ab	EEUU
BAH	F		X	F	F		F	F	RU
BBD	F		X	F	Ab		Ab	Ab	EEUU
BEL	F			Ab	Ab		Ab	Ab	TAIPEI
DOM				C	Au		Au	C	EEUU
GRN	Ab			Ab	Ab	X	Au	Au	EEUU
GUY	F		X	F	F	X	F	F	TT
HAI	Ab			Ab	Ab		Ab	F	EEUU
JAM	F		X	F	F	X	F	F	EEUU
SKN	C			Ab	Au		Ab	Ab	EEUU
SL	F		X	F	F	X	F	F	RU
SUR	Ab			Ab	Ab		Ab	C	P. BAJOS
SVG	C			C	C		C	C	CANADA
TT	Ab			Ab	Ab		Ab	Ab	EEUU
RD	Ab	X		F	F		F	F	EEUU
T favor	6	1	5	6	6	4	6	6	
T contra	5			2	1		1	3	
T Ab	4			7	6		6	5	
T Au	0			0	2		2	1	
T países	15	1	5	15	15	4	15	15	

*Fuente:* Elaborado por la autora de acuerdo con los resultados de las votaciones en la OEA y comunicación personal con la Doctora Tania García Lorenzo.

Las correlaciones de fuerzas políticas en el Caribe se caracterizan por la orientación al centro político de los partidos en el gobierno y el pragmatismo, basado en sus particularidades económicas. No obstante, en la actualidad se aprecia una tendencia en los gobiernos a la aproximación a la derecha, particularmente en el caso de Guyana, Jamaica y Santa Lucía, países que han adoptado las posiciones políticas más desfavorables para la izquierda y los movimientos progresistas en la subregión.

Se han ralentizado algunos de los procesos progresistas en marcha: solamente en dos países gobiernan líderes de centro izquierda: San Vicente y las Granadinas (Ralph Gonsalves) y Dominica (Roosevelt Skerrit).

La ralentización en la integración regional, afecta al conjunto de entidades asociativas de la subregión. Jamaica ha sido el principal crítico de la CARICOM, al cuestionar la eficacia de la integración económica para incrementar el desarrollo de la región y su inserción en la economía global. En el contexto de las presiones contra Venezuela, se ha visto una ruptura del consenso en política exterior de los estados miembros de la CARICOM, lo cual sienta un precedente negativo de alto impacto para todo el hemisferio.

La ralentización de los procesos progresistas; la evolución de los gobiernos hacia discursos más pragmáticos y moderados; la ausencia de discursos sólidos en las oposiciones; la bilateralización del relacionamiento con los grandes poderes del sistema internacional; la profundización de la dependencia económica, comercial, financiera y energética; la inestabilidad en el crecimiento económico; la ralentización en la integración regional; los conflictos fronterizos, constituyen factores de peso que podrían ser utilizados por Estados Unidos y la derecha regional para alterar la correlación de fuerzas políticas existente al interior de la CARICOM.

Los debates en torno a la racialidad; la cuestión identitaria; la necesidad de profundizar los procesos de integración y la necesidad de superación del orden mundial actual, construido sobre las bases del capitalismo, la modernidad occidental y la supremacía de la raza blanca, resultan elementos de contacto con los planteamientos del pensamiento crítico latinoamericano, que pueden ser trabajados en función de los procesos transformadores del siglo XXI.

---

**Bibliografía:**

ABRAZPE: *China realizará la mayor inversión en Jamaica con Zona Económica Especial*, 10 de marzo de 2018. Recuperado el 1 de abril de 2018. En: <http://www.abrazpe.org.br/index.php/2018/03/10/china-realizara-la-mayor-inversion-en-jamaica-con-zona-economica-especial/>.

Agencia Cubana de Noticias: *Dominica thanks ALBA countries for help after Hurricane Maria*, diciembre de 2017. Recuperado el 17 de febrero de 2018. En: <http://www.cubanews.acn.cu/world/7586-dominica-thanks-alba-countries-for-help-after-hurricane-maria>.

N. Alastre *Primer ministro de Dominica advierte que Perú busca desestabilizar a la región*, marzo de 2018. Recuperado el 23 de marzo de 2018. En: <https://laradiodelsur.com.ve/2018/03/primer-ministro-de-dominica-advierte-que-peru-busca-desestabilizar-a-la-region/>.

Analítica: *Inauguran en Barbados el Centro de Energía Renovable del Caribe*, mayo de 2015. Recuperado el 1 de abril de 2018. En: <http://www.analitica.com/ciencia-y-ambiente/ambiente-ciencia-y-ambiente/inauguran-en-barbados-el-centro-de-energia-renovable-del-caribe/#sthash.sxsA2Fei.dpuf>.

BBC: *Trinidad y Tobago: potencia energética*, 13 de junio de 2013. Recuperado el 19 de octubre de 2017. En: [http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130606\\_economia\\_trinidad\\_tobago\\_potencia\\_energetica\\_mj](http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130606_economia_trinidad_tobago_potencia_energetica_mj).

BBC: *Suriname profile-Timeline*, julio de 2017. Recuperado el 10 de enero de 2018. En: <http://www.bbc.com/news/world-latin-america-20028418>.

Caribbean Elections: *Caribbean Elections*, 30 de marzo de 2018. Recuperado el 30 de marzo de 2018. En: [http://www.caribbeanelections.com/bb/elections/bb\\_results\\_2018.asp](http://www.caribbeanelections.com/bb/elections/bb_results_2018.asp).

Caribbean360 News: *Dominica signs US\$300 million cooperation agreement with China*, 5 de diciembre de 2013. Recuperado el 11 de enero de 2018. En: <http://www.caribbean360.com/business/dominica-signs-us-300-million-cooperation-agreement-with-china>.

CARICOM: *Aid for Trade Strategy*, 2015. Recuperado el 2 de noviembre de 2017. En: [https://caricom.org/documents/5269-caribbean\\_community\\_aft\\_strategy\\_final.pdf](https://caricom.org/documents/5269-caribbean_community_aft_strategy_final.pdf).

CARICOM: *CARICOM Energy Programme*, 2016. Recuperado el 29 de enero de 2018. En: <https://caricom.org/energy-programme/>.

E. D. Cassells: *Caribbean Diplomatic Climate in the age of Trump*. En: XII Conferencia de Estudios del Caribe, La Habana, 2018.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe: *Balance Preliminar de las Economías del Caribe*, 2017. Recuperado el 30 de marzo de 2018. En: [https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/98/BPE2017\\_Barbados\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/98/BPE2017_Barbados_es.pdf).

Declaración de Lima, 2017. Recuperado el 11 de octubre de 2017. En: <https://epoo.epimg.net/descargables/2017/08/09/325283de2b3c8ff466987a2b99da5b7a.pdf>.

Dominica News Online: *Dominica signs documents with China for economic cooperation and military aid*, 29 de noviembre de 2017. En: <http://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/general/dominica-signs-documents-with-china-for-economic-cooperation-military-aid/>.

EFE: *Chávez y el apoyo a Venezuela para la Cumbre de las Américas centraron la reunión de ALBA*, 6 de marzo de 2018. Recuperado el 24 de marzo de 2018. En: <https://www.efes.com/efe/espana/mundo/chavez-y-el-apoyo-a-venezuela-para-la-cumbre-de-las-americas-centraron-reunion-alba/10001-3543707>.

El Nacional: *Estos países votaron a favor de resolución en la OEA sobre Venezuela*, febrero de 2018. Recuperado el 8 de abril de 2018. En: [http://www.el-nacional.com/noticias/politica/estos-paises-votaron-favor-resolucion-oea-sobre-venezuela\\_224297](http://www.el-nacional.com/noticias/politica/estos-paises-votaron-favor-resolucion-oea-sobre-venezuela_224297).

El Periódico: *Primer Ministro de Santa Lucía. La Comunidad del Caribe no debe ignorar hechos en Venezuela*, 4 de junio de 2017. Recuperado el 26 de octubre de 2017. En: <https://www.elperiodico.com/es/internacional/>

20170704/primer-ministro-santa-luciacomunidad-caribe-no-debe-ignorar-hechos-venezuel-6148080.

Fidel: soldado de las ideas: *Discurso íntegro de Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica y Presidente Pro Tempore de CARICOM*, noviembre de 2016. Recuperado el 13 de enero de 2018. En: <http://www.fidelcastro.cu/es/articulos/discurso-integro-de-roosevelt-skerrit-primer-ministro-de-dominica-y-presidente-pro-tempore>.

Gobierno de San Vicente y las Granadinas: *St. Vincent & the Grenadines And the Republic of China on Taiwan Signs Agreement*, 2018. Recuperado el 21 de marzo de 2018. En: <http://www.gov.vc/index.php/news/225-st-vincent-the-grenadines-and-the-republic-of-china-on-taiwan-signs-agreement>.

W. C. Grenade: *The Grenada Revolution 40 Years After: Lessons for Rethinking Caribbean Politics and Political Economy*, 2019. En: SALISES XX Annual Conference, Barbados.

Grupo de Acción de los Estados Unidos, el Caribe y América Central: *Informe del Grupo de Acción de los Estados Unidos, el Caribe y América Central sobre la seguridad energética*, 2016. Recuperado el 31 de enero de 2018. En: <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/257057.pdf>.

M. Harris: *Cultural Production for the Caribbean Community in the Era of Cultural China: Meeting the Dilemma of Authenticity*, 2019. En: SALISES XX Annual Conference, Barbados.

M. Hokstam: «El Ministerio de Defensa de Surinam aumenta el gasto y la cooperación con el Pentágono», *Diálogo Américas*, 30 de mayo de 2013. Recuperado el 14 de diciembre de 2018. En: <https://dialogo-americas.com/es/articulos/el-ministerio-de-defensa-de-surinam-aumenta-el-gasto-y-la-cooperacion-con-el-pentagono>.

Interamerican Development Bank: *IDB, CDB, CARICOM and the US Department of Energy sign MOU to support renewable energy and energy efficiency in the Caribbean*, 5 de mayo de 2016. Recuperado el 5 de marzo de 2018. En: <https://www.iadb.org/en/news/news-releases/2016->

05-05/idb-cdb-caricom-usdoe-offer-caribbean-energy-aid%2C11461.html.

International Monetary Fund: *IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with Barbados*, 31 de enero de 2018. Recuperado el 5 de febrero de 2018. En: <http://www.imf.org/en/news/articles/2018/01/30/pr1833-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation-with-barbados>.

M. Kirton: *Current Trends in Caribbean Regional Integration, the Prospects and Challenges for CARICOM and the Current State of CARICOM's Relations with the Rest of the Hemisphere*, XII Conferencia de Estudios del Caribe, La Habana, 2018.

La Vanguardia: *Violenta manifestación en Dominica para pedir la dimisión del Primer Ministro*, febrero de 2017.

La Conexión USA, 12 de marzo de 2017. Recuperado el 9 de abril de 2018. En: [http://laconexionusa.com/noticias/201703121296753\\_lci29675312.asp](http://laconexionusa.com/noticias/201703121296753_lci29675312.asp).

Diana Legrá Brooks: *Proceso de implementación del Mercado y la Economía Únicos (CSME) de la Comunidad del Caribe (CARICOM) durante el periodo 2008-2015*, ISRI, La Habana, junio de 2017. Recuperado el 14 de marzo de 2018. En: web

C. Parkinson: «DEA «tiene pruebas» de vínculos de presidente de Surinam con capo de la droga», septiembre de 2013. Recuperado el 8 de diciembre de 2018. En: <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/dea-tiene-pruebas-de-vinculos-de-presidente-de-surinam-con-capo-de-la-droga/>.

Piensa en Geotermia: *El gobierno de Dominica asigna una inversión de 15 millones en proyecto geotérmico*, abril de 2018. Recuperado el 10 de abril de 2018. En: <http://www.piensageotermia.com/el-gobierno-de-dominica-asigna-una-inversion-de-15-millones-en-proyecto-geotermico/>.

P. Pineda: «México y Santa Lucía tejen cooperación», *El Economista*, 6 de marzo de 2018. Recuperado el 1 de abril de 2018. En: <https://www.economista.com.mx/internacionales/Mexico-y-Santa-Lucia-tejen-cooperacion-20180305-0142.html>.



Prensa Latina: *Banco Mundial financia proyecto geotérmico en Dominica*, marzo de 2018. Recuperado el 29 de marzo de 2018. En: <http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=159471&SEO=banco-mundial-financia-proyecto-geotermico-en-dominica>.

Radio Habana Cuba.: *Valoran Venezuela y Dominica incrementar intercambio comercial*, 10 de febrero de 2017. Recuperado el 11 de febrero de 2018. En: <http://www.radiohc.cu/noticias/internacionales/121252-valoran-venezuela-y-dominica-incrementar-intercambio-comercial>.

I. Rauber: *Refundar la política. Desafíos para una nueva izquierda indoafrolatinaamericana*, Editorial Bolívar, Bogotá, 2017.

A. Serbín, C. Quenan y A. Romero: *América Latina y el Caribe frente a un nuevo orden mundial: Poder, globalización y respuestas regionales*, XII Conferencia de Estudios del Caribe, La Habana, 2018.

TeleSUR: *Canciller venezolana culmina «exitosa gira» por el Caribe*, febrero de 2015. Recuperado el 5 de marzo de 2018. En: <http://wp.telesurtv.net/news/Canciller-venezolana-culmina-exitosa-gira-por-el-Caribe-20150222-0023.html>.

The Guardian: *China buy 10 lng stake*, 13 de agosto de 2013. Recuperado el 18 de enero de 2018. En: <http://www.classifieds.guardian.co.tt/business/2011/08/13/china-buy-10-lng-stake>.

The Sydney Morning Herald: *BHP sells Suriname alumina operations to Alcoa*, 30 de abril de 2009. Recuperado el 23 de febrero de 2018. En: <https://www.smh.com.au/business/bhp-sells-suriname-alumina-operations-to-alcoa-20090430-aona.html>.

Unidad de Estudios de Políticas Económicas y Sociales del Caribe: *Monitor Caribe Haití*, año 3, número 3, 1-15 de febrero 2018. Recuperado el 5 de febrero de 2018. En: <http://economia.gob.do/wp-content/uploads/drive/UEPESC/Monitor%20Caribe%20Haiti/2018/Febrero/Monitor%20Caribe-Haiti%202018-02-Q1.pdf>.

B. Wilkinson: «Guyana-Surinam: Incidente reaviva conflicto limítrofe», *Interpress Service*, marzo de 2018. Recuperado el 2 de abril de 2018. En: <http://www.ipsnoticias.net/2000/09/guyana-suriname-incidente-reaviva-conflicto-limitrofe/>.

M. F. Zambrano: «Pulso entre EE.UU. y Venezuela por el suministro de energía al Caribe», 13 de febrero de 2018, *Global Affairs Strategic Studies*. En: <http://www.unav.edu/web/global-affairs/detalle/-/blogs/17227622>.